

REPORTE N° 37

CONFLICTOS SOCIALES CONOCIDOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Al 31 de marzo del 2007

Resumen Ejecutivo

La Defensoría del Pueblo presenta el trigésimo séptimo reporte sobre conflictos sociales de distinta intensidad entre población, autoridades de diferentes entidades públicas y empresas, con información actualizada al 31 de marzo del 2007.¹ El reporte da cuenta de 79 conflictos, de los cuales 23 se encuentran activos (29%), 46 en estado latente (58%) y 10 resueltos (13%) durante este mes. En las primeras páginas se presenta un resumen de la información sistematizada; más adelante se ofrece una descripción detallada de los conflictos.²

I. ESTADO DE LOS CONFLICTOS (marzo del 2007)

1. **Conflictos activos.** La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 23 conflictos activos en el país. A continuación una breve descripción y su estado actual de acuerdo a su ubicación geográfica.

Departamento	Nº	Descripción	Estado actual
Ancash	2	Ubicación: Distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga. Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo. Actores: Jorge Luis Vega Flores, Partido Aprista Peruano (tercera reelección), regidores (5), pobladores de Llama, JEE Pomabamba.	No hay diálogo. La municipalidad ha sido cerrada por la población. La Municipalidad aún se encuentra tomada por la población, sin embargo los dirigentes han aceptado declinar su medida de fuerza si el alcalde reelecto solicita licencia al cargo.
		Ubicación: Distrito de Tinco, provincia de Mariscal Luzuriaga. Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo. Actores: Alcalde, población de Tinco.	No hay diálogo. La municipalidad ha sido cerrada por la población. El alcalde juramentó en el centro poblado de Toma pero no puede ingresar a la Municipalidad.
Arequipa	1	Ubicación: Cocachaca (provincia de Islay). Caso: Conflicto entre los accionistas minoritarios y mayoritarios de la empresa Chucarapi por el derecho de propiedad de la empresa. Actores: Accionistas (minoritarios y mayoritarios) de la empresa azucarera Chucarapi. Otros. Centros Poblados de Chucarapi y Cocachaca.	Se ha llevado a cabo la diligencia de restitución judicial de la central azucarera a favor de los accionistas mayoritarios. Los accionistas minoritarios están organizando mesas de diálogo para solicitar mejoras laborales.
Ayacucho	3	Ubicación: CP. Cocas, distrito de Vilcanchos y CP. Tomanga, distrito de Sarhua, provincia de	Se ha iniciado el proceso de diálogo. Las comunidades han firmado un acta

¹ Los conflictos incluidos en este reporte son aquellos en los que se ha producido por lo menos una de las siguientes situaciones: amenazas a la vida, integridad o salud de las personas, daños a la propiedad pública o privada, afectación al libre tránsito, impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad, o la paralización de la prestación de servicios públicos.

² Ver más adelante la descripción de los conflictos activos (páginas 11– 33), latentes (páginas 34–71) y resueltos (páginas 72 - 79).

		<p>Víctor Fajardo. Caso: Conflicto por delimitación territorial. Actores: Comunidad de Cocas y comunidad de Tomanga.</p>	<p>manifestando su voluntad de empezar un proceso de diálogo.</p>
		<p>Ubicación: Provincias de Parinacochas y Lucanas. Caso: Conflicto por el uso del agua. Actores: Comuneros y dirigentes de las C.C. Coracora y Chumpi (Parinacochas) y Chaviña (Lucanas). Ministerio de Agricultura.</p>	<p>No hay diálogo. La situación se mantiene tensa.</p>
		<p>Ubicación: Cangallo (Provincia de Cangallo). Caso: Conflicto por delimitación territorial. Actores: Comuneros y dirigentes de las Comunidades Campesinas de Putica, Chichucancha, Patahuasi, Huillcapampa. Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) y la Dirección Regional de Agricultura. Otros. Comuneros Henry Barzola, Oswaldo Arango y Modesto Barzola (C.C. de Putica).</p>	<p>Aún no se inicia el diálogo. Solo una de las partes ha pedido formalmente la mediación. El 09 de marzo la DP vuelve a enviar una carta a la Comunidad de Putica, reiterando el pedido para que expresen mediante comunicación escrita la aceptación de intervención como mediadora de la DP.</p>
Cajamarca	3	<p>Ubicación: La Encañada (provincia de Cajamarca). Caso: Conflicto por incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa. Actores: Alcalde del centro poblado de Chanta Alta (Julio Alva), Presidente del comité de Desarrollo del Alto Llaucano (Pedro Acosta que además es asesor del Alcalde de Chanta y Administrador de una empresa que brinda servicios a la Empresa Minera), Minera Yanacocha, Municipalidad de la Encañada (por el caso de la maquinaria retenida y la inejecución de las obras programadas el año pasado).</p>	<p>Se está llevando a cabo el proceso de diálogo entre las partes.</p>
		<p>Ubicación: Distrito de Sallique, provincia de Jaén. Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo. Actores: Longobardo Ojeda Huamán, dirigentes y pobladores de Sallique.</p>	<p>Se ha iniciado el proceso de diálogo y las investigaciones por parte de la CGR.</p>
		<p>Ubicación: Cachachi (provincia de Cajabamba). Caso: Conflicto debido a que la población se opone a la explotación minera (ambas mineras se encuentran en pugna por la concesión de la tierra). Además la zona está siendo explotada por mineros informales. Actores: Mineras Algamarca y Sullidén Shahuindo, Pobladores del CP Chuquibamba.</p>	<p>Se ha iniciado el proceso de diálogo. El 13 de marzo se llevó a cabo una reunión para analizar el tema. Se llegó a un compromiso de mantener el diálogo abierto con los actores afectados directamente y empezar una campaña de salud con los trabajadores de la zona. Se programó la siguiente reunión para el 31 de marzo.</p>
Huancavelica	1	<p>Ubicación: Distrito de Acoria, provincia de Huancavelica. Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo. Actores: Alcalde de Acoria, Leonidas Bendezú Fernández; ex – alcalde, Silvano Huamán Sedano; Comité anticorrupción, liderado por Alejandro Aclari ticllacuri, Julio García, Nicolás Cusi Delgado, Héctor Taipe Cárdenas y Leoncio Taipe.</p>	<p>No hay diálogo. Los pobladores solicitan una auditoría a la gestión del ex alcalde. CGR no ha tenido las condiciones necesarias para realizar la auditoría.</p>

La Libertad	2	<p>Ubicación: Huamachuco (provincia de Sanchez Carrión).</p> <p>Caso: Conflicto debido a minería informal.</p> <p>Actores: Rondas campesinas y juntas vecinales de cinco sectores de Huamachuco, mineros informales del sector de Alto Parashique (colindante con el cerro El Toro), Ministerio Público, PNP. Dirección Regional de Energía y minas, Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión-Huamachuco.</p>	<p>No se ha iniciado el diálogo.</p> <p>El 17 de febrero del 2007, más de 500 personas integrantes de las Rondas Urbanas y Juntas Vecinales desalojaron a mineros informales que desde hace un año se habían establecido en el Sector Alto Parashique. La población quemó las pertenencias de los mineros informales y destruyó 17 pozas de cianuración, principales fuentes de contaminación</p>
		<p>Ubicación: Huaranchal (provincia de Otuzco).</p> <p>Caso: Las rondas campesinas se oponen a la explotación minera. Afirman que contaminan el agua.</p> <p>Actores: Rondas Campesinas del distrito de Huaranchal, con una fuerte presencia de ronderos de Chuquizongo. Empresa minera Sienna Minerals S. A. C.</p> <p>Otros. Bases ronderas de caseríos y Centros Poblados de la zona. Dirección Regional de Minería de La Libertad.</p>	<p>En proceso de diálogo.</p>
Lambayeque	1	<p>Ubicación: Cayaltí (provincia de Chiclayo)</p> <p>Caso: Conflicto por el control del directorio de la empresa agroindustrial Cayaltí.</p> <p>Actores: Empresa Agroindustrial Cayaltí, pobladores de Cayaltí, COFIDE, Sindicato de Trabajadores repuestos y representantes de trabajadores firmantes del acuerdo conciliatorio.</p>	<p>No hay diálogo. Se está a la espera de la ejecución de la sentencia.</p> <p>El 8 de marzo el Juez de paz de primera nominación del distrito de Cayaltí llevó a cabo la diligencia de reposición de 79 trabajadores despedidos por le empresa, sin embargo esta diligencia fue interrumpida por un grupo de trabajadores.</p>
Lima	1	<p>Ubicación: Huampará (provincia de Yauyos).</p> <p>Caso: Conflicto por rechazo de la población al alcalde electo.</p> <p>Actores: Población del distrito de Huampará; presidente de la comunidad de Huampará, Sr. Pablo Ballarta; alcalde reelecto, Sr. Luis Beltrán Ponce Martínez, de lpartido político "Somos Perú"; candidato del partido político "Perú Posible", Sr. Luis Alberto Pérez Tomas.</p>	<p>No hay diálogo.</p> <p>El palacio municipal continúa cerrado. No funciona ni la oficina de registro civil, por lo cual no se pueden inscribir nacimientos, obtener copias de partidas o celebrar matrimonios.</p>
Moquegua	1	<p>Ubicación: Ilo (provincia de Ilo).</p> <p>Caso: Los pobladores reclaman el pago del canon minero.</p> <p>Actores: Población de Ilo y Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua (dirigentes: Oswaldo Luque y Leonel Villanueva) y la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation.</p>	<p>No hay diálogo.</p>
Pasco	1	<p>Ubicación: Chaupimarca (provincia de Pasco).</p> <p>Caso: Oposición de los pobladores a la explotación de la empresa debido a la posible contaminación.</p> <p>Actores: Población de los distritos de Chaupimarca y Yanacancha, compañía minera Volcan S.A.</p> <p>Otros. Frente Amplio de Defensa de los intereses de Pasco (FADIP), Centro de Cultura Popular Labor (ONG), municipalidad provincial de Pasco,</p>	<p>El diálogo está suspendido.</p> <p>Se tenía prevista una reunión del comité central el día 23 de marzo donde se daría cuenta de los avances alcanzados por las comisiones, sin embargo la Municipalidad Provincial de Pasco suspendió la misma por falta de quórum.</p>

		trabajadores de la compañía minera Volcán.	
Piura	1	<p>Ubicación: Distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba.</p> <p>Caso: Conflicto por rechazo de la población a la explotación minera.</p> <p>Actores: Rondas campesinas de Huancabamba y Jaén, radios locales, empresa minera Majaz, alcaldesa, Ananías Velásquez Torres por Somos Perú (20.71% de los votos) obtuvo cuatro regidores y uno es de Perú Posible, Diócesis de Chulucanas, Vicariato Apostólico de Jaén, MEM.</p>	<p>No hay diálogo. Una de las partes está radicalizando su posición.</p> <p>En el proceso de consulta ciudadana viene siendo impulsado por varios gobiernos locales, entre las que están las Municipalidades provinciales de Ayabaca y Huancabamba, ambas de Piura, y la Municipalidad Provincial de San Ignacio, de Cajamarca.</p>
Puno	3	<p>Ubicación: Distrito de Usicayos, provincia de Carabaya.</p> <p>Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo.</p> <p>Actores: Williams Sotomayor Guerra (Partido Aprista Peruano), Jesús Gonzales Leque (Partido Nacionalista)</p>	<p>No hay diálogo.</p> <p>El alcalde está asumiendo sus funciones a pesar del malestar de la población.</p>
		<p>Ubicación: Distrito de San Gabán, provincia de Carabaya.</p> <p>Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo.</p> <p>Actores: Alcalde Adolfo Huamantica Condori, pobladores de San Gabán.</p>	<p>No hay diálogo.</p> <p>La municipalidad se encuentra cerrada.</p>
		<p>Ubicación: Arapa (provincia de Azángaro).</p> <p>Caso: Se demanda transparencia en la gestión del alcalde. Se ha solicitado su vacancia al JNE.</p> <p>Actores: alcalde Jorge Roselló Calapuja (Lista Independiente por el Desarrollo Comunal de Arapa); Comité de Lucha, presidente: Simón Quispe Torres, Frente de Defensa por la Paz con Desarrollo de Arapa, presidente: Sebastián Quispe Mamani; Gobernador, Enrique Arratia Quispe; Centro de Desarrollo Humano, David Danz; Párroco del distrito, Marcos Degen; Contraloría General de la República; Jurado Nacional de Elecciones.</p>	<p>No hay diálogo. Se está a la espera de la respuesta del JNE.</p> <p>Población está a la espera del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones.</p>
San Martín	1	<p>Ubicación: Distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.</p> <p>Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo.</p> <p>Actores: alcalde, pobladores de Campanilla.</p>	<p>Se está iniciando el proceso de diálogo, sin embargo se ha registrado un enfrentamiento violento.</p>
Tacna	2	<p>Ubicación: La Yarada (provincia de Tacna)</p> <p>Caso: Conflicto por el manejo del agua del distrito.</p> <p>Actores: Federación Agropecuaria e Industrial "Fronteras Vivas del Sur" (FEAGROSUR), Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna.</p>	<p>Se ha designado instituciones que se harán cargo del conflicto.</p>
		<p>Ubicación: Comunidad de Vilavani, Palca (provincia de Tacna).</p> <p>Caso: La población se opone a la explotación minera.</p> <p>Actores: Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna (Presidenta: Ing. Nora Melchor Cohaila). Empresa minera MINSUR.</p>	<p>No hay diálogo. Tensión en el procedimiento de audiencia pública del EIA.</p>
TOTAL	23		

Existe un número importante de conflictos que se encuentran en estado de latencia. Al no haber sido resueltos, se mantiene el riesgo de una posible escalada hacia situaciones de crisis.

Departamento	Activos	Latentes	Total
Ancash	2	2	4
Apurímac	0	2	2
Arequipa	1	1	2
Ayacucho	3	1	4
Cajamarca	3	5	8
Cusco	0	5	5
Huancavelica	1	5	6
Huánuco	0	2	2
Ica	0	2	2
Junín	0	2	2
La Libertad	2	1	3
Lambayeque	1	1	2
Lima	1	2	3
Loreto	0	3	3
Moquegua	1	1	2
Pasco	1	2	3
Piura	1	1	2
Puno	3	4	7
San Martín	1	3	4
Tacna	2	0	2
Ucayali	0	1	1
TOTAL	23	46	69

2. **Casos nuevos.** En relación al reporte anterior, durante este mes aparecieron dos nuevos conflictos (información al 31 de marzo). En el siguiente cuadro se brinda una breve reseña de dichos conflictos, uno de los cuales permanecen activos al cierre del reporte, uno se encuentra en estado de latencia.

Nº	Lugares	Actores	Motivo
1	Huampará, Yauyos LIMA	Población del distrito de Huampará; presidente de la comunidad de Huampará, Sr. Pablo Ballarta; alcalde reelecto, Sr. Luis Beltrán Ponce Martínez, de partido político "Somos Perú"; candidato del partido político "Perú Posible", Sr. Luis Alberto Pérez Tomas.	Rechazo de la población al alcalde electo.
2	San Francisco de Asís de Yarusyacán, Pasco PASCO	Compañía minera Milpo, comunidad campesina de San Juan de Milpo, municipalidad provincial de Pasco.	Rechazo de la población de la construcción de un nuevo vaso relave en una zona que pertenecería a la comunidad.

3. **Conflictos latentes.** Durante el mes de marzo, ningún conflicto pasó del estado activo a latente. Este mes se reportan 46 conflictos en estado de latencia (ver páginas 34-71).
4. **Conflictos resueltos.** Durante el mes de marzo se han resuelto 10 conflictos.

Lugares	Información general
Distrito de San Jerónimo de Paclas, provincia de Luya AMAZONAS	Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo. Modo de resolución: El 9 de marzo, se entreó de manera pacífica el local municipal (en presencia de la DP) y se designó a nuevos representantes del consejo de Coordinación Local. El 18 de marzo se llevó a cabo una audiencia de rendición de cuentas con participación de la DP.
Comunidad de Pocpa, Huasta (provincia de Bolognesi) ANCASH	Caso: La comunidad reclama el incumplimiento sistemático de acuerdos por parte de la minera y el pago de servidumbre minera por el uso de territorio comunal para la construcción de una carretera que se construyó el año 1997. Modo de resolución: La compañía aumentó su propuesta y ofreció un millón de soles para la ejecución de obras prioritarias para la comunidad. La propuesta fue discutida y aceptada por la comunidad, se firmó un acta y se levantó la medida de fuerza.
Distrito de Majes (provincia de Caylloma) AREQUIPA	Caso: Protestas por parte de adjudicatarios de parcelas de la Irrigación Majes por la adjudicación de sus tierras a nuevos propietarios de lotes urbanos. Modo de resolución: La CGR, mediante resolución, estableció que la MD incorporó ilegalmente como patrimonio de la comuna terrenos inscritos a nombre de AUTODEMA.
Distritos de Mazamari y Pangoa (provincia de Satipo) JUNIN	Caso: Los nativos reclamaron la devolución de mil hectáreas de linderos que –según afirman– fueron invadidas por pobladores de Atalaya. Modo de resolución: Las organizaciones asháninkas ya no mencionan el tema. Los pobladores de la zona de conflicto están desarrollando sus actividades con normalidad.
Distrito de Ondores (provincia de Junin) JUNIN	Caso: La CC Ondores (unos 3,000 comuneros) y la SAIS Túpac Amaru (15,000 comuneros, aproximadamente, agrupados en 15 CC) sostienen un largo enfrentamiento por la posesión del predio Atocsayco (22,000 Hás). Modo de resolución: El PETT realizó la georeferenciación con el uso de GPS diferencial del lindero sur a la SAIS Tupac Amaru del territorio de la CC Ondores, conforme a las actas de determinación del punto de inicio de hitos colindantes dispuesto por el Juzgado Mixto de la Provincia de Junín. La DP acompañó el proceso.
Distrito de Caballococha (provincia de Mariscal Ramón Castilla) LORETO	Caso: Conflicto por rechazo al alcalde electo. Modo de resolución: El 19 de marzo se llevó a cabo una reunión, en la cual se llegaron a los siguientes acuerdos: 1. Intervención de la CGR a la gestión del ex alcalde. 2. Presencia de pobladores de Caballococha en la nueva gestión (60% de puestos). 3. No discutir sobre el punto de prohibir la migración de integrantes de la religión Israelita a la provincia. 4. Solicitar información sobre la situación judicial de dirigentes y pobladores denunciados. 5. Intervención de las instituciones públicas en la comunidad de Alto Monte Israel. El 19 de marzo la DP realizó una visita de inspección y verificó el correcto funcionamiento de la municipalidad.
Distrito de Santa Ana de Tusi (provincia Daniel Alcides Carrión) PASCO	Caso: Rechazo de la comunidad a la autoridad electa. Modo de resolución: El alcalde ha empezado a ejercer su cargo.
Pallanchacra (provincia de Daniel Alcides Carrión) PASCO	Caso: Los pobladores sostienen que la empresa está incumpliendo los acuerdos asumidos. Modo de resolución: Se está en proceso de implementación de los acuerdos firmados en el acta (el mes de febrero del 2007). La DP se encuentra haciendo seguimiento de los mismos.
Provincia de Huancabamba PIURA	Caso: La población señaló irregularidades en la Licitación Pública N° 002-2004/CEA/MPH, destinada a la adquisición de productos para el Vaso de Leche Modo de resolución: Al mes de febrero del 2007, se han resuelto ya los contratos de los funcionarios responsables del mal proceso de adquisición.
Distrito de Unicachi (provincia de Yunguyo) PUNO	Caso: Los pobladores exigen transparencia en el manejo de los recursos económicos. El alcalde denunció haber sido secuestrado por los pobladores. Modo de resolución: Archivamiento definitivo del proceso penal seguido contra los pobladores de Unicachi procesados por secuestro en agravio del ex alcalde.

Reporte de acciones subversivas.

- El 19 de marzo, aproximadamente entre las 10.30pm y 11.00pm, en el distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaja, región Huancavelica ocurrió un enfrentamiento entre una patrulla del Ejército y presuntos miembros de Sendero Luminoso, dejando el saldo de dos presuntos subversivos muertos, el profesor Octavio Edson Aquino Inga y dos militares heridos.
- El 23 de marzo, el Ministro de Defensa Allan Wagner, informó que el encargado de determinar la causa de muerte del profesor Octavio Aquino Inga es el Ministerio Público. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo informó que se envió a un Comisionado de la Unidad de Conflictos Sociales para realizar una investigación defensorial sobre el suceso en Huachocolpa y que se encontraba en Huancavelica, entrevistando a las autoridades y pobladores de la zona.
- El 27 de marzo, el Presidente de la Región Huancavelica, Federico Salas, reveló que en noviembre pasado fue secuestrado durante más de tres horas por un grupo de integrantes de una columna armada de Sendero Luminoso, los cuales lo forzaron a escuchar sus prédicas terroristas y le pidieron una colaboración voluntaria. Así mismo, declaró que hay zonas en Huancavelica donde ninguna autoridad logra ingresar.
- El 28 de marzo, el Almirante Jorge Montoya, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, anunció que el Ejército ha instalado una base militar en la localidad de Huachocolpa, debido al reciente enfrentamiento entre presuntos terroristas y una patrulla militar.
- El 30 de marzo, fue identificado uno de los presuntos subversivos de Sendero Luminoso por su madre quien recogió su cuerpo de la Morgue de Huancayo. Según Petronila Medrano, su hijo, Jhony Roca Medrano, tenía 25 años y era proveniente de la comunidad Selva de Oro en Satipo. La señora Medrano informó que su hijo fue secuestrado en su comunidad por un grupo de terroristas, cuando este tenía 15 años de edad.
- **Reporte especial:** Caso Huachocolpa (provincia de Tayacaja, Huancavelica)

Actores. Ejército del Perú, población de Huachocolpa, Sendero Luminoso.

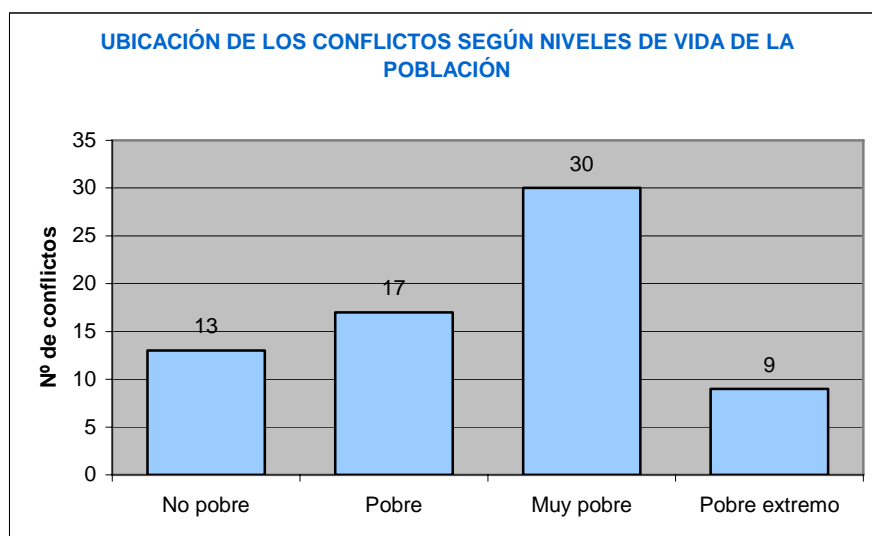
Hechos. El 19 de marzo de 2007 en Huachocolpa murieron tres personas (dos calificados como NN y el profesor de la localidad, Octavio Aquino Inga). Se presentaron diversas versiones que los medios de comunicación se encargaron de divulgar: desde un enfrentamiento entre militares y subversivos, que el profesor fallecido era parte de SL, que fue la legítima defensa del Ejército frente al ataque recibido, etc. Ante ello, la DP decidió enviar a un comisionado para realizar la investigación que permita establecer la versión de la Defensoría del Pueblo. Así, se realizó un viaje desde el 22 al 29 de marzo por Huancavelica, Huancayo y Huachocolpa para recabar testimonios y constatar la situación geográfica, militar, económica y social de la localidad y su entorno. Se realizaron entrevistas a autoridades de los sectores salud, Director regional de Salud de Huancavelica, educación, militar, policial, Ministerio Público, Gobierno Regional de Huancavelica. Asimismo, se obtuvo informaciones por parte de integrantes de miembros de ongs, Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza entre otros. Se ha obtenido testimonios de la viuda del profesor Aquino, de la obstetra y el médico de la posta de salud de Huachocolpa quienes expresan detalles sobre los sucesos del 19 de marzo de 2007. Actualmente, se cuenta con un informe de los 8 días que duró la investigación que incluye las gestiones realizadas, observaciones que evidencian detalles relevantes de los sucesos y conclusiones; todo lo cual constituye el insumo para la elaboración de la versión que sobre el caso determine la Defensoría del Pueblo.

II. INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE LOS CONFLICTOS INCLUIDOS EN ESTE REPORTE

1. **Situación de los conflictos.** De los 69 conflictos, activos y latentes, incluidos en este reporte, 13 se iniciaron el 2007 (18%), 16 se iniciaron en el 2006 (24%), 22 se iniciaron en el 2005 (32%), otros 15 se iniciaron en el 2004 (22%) y tres se iniciaron en el año 2003 o antes (4%).
2. **Escenarios de conflictos.** El 31% de los conflictos reportados cuestiona el desempeño de alcaldes provinciales y distritales. Otros conflictos ocurren con relación a temas ambientales (31%), por disputas entre comunidades (17%) y por demandas gremiales (10%). El siguiente cuadro muestra la distribución de los conflictos según diversos escenarios:

Escenario	Breve descripción	Nº	%
Municipal	Cuestionamientos a autoridades locales	21	31%
Ambiental	Enfrentamientos entre poblaciones y empresas que explotan recursos naturales	21	31%
Comunal	Conflictos entre comunidades por delimitación, propiedad, acceso a recursos	12	17%
Gremial–sectorial	Reivindicaciones laborales o gremiales	7	10%
Regional	Conflictos entre departamentos por demarcación territorial o acceso a recursos	5	7%
Cultivo de coca	Cuestionamientos de agricultores de hoja de coca a política gubernamental de erradicación de cultivos	3	4%

3. **Situación socioeconómica de las zonas de conflicto.** El 71% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (49). Según el nivel de pobreza de su población, 56 conflictos (81%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza.



Fuente: FONCODES. Mapa de la pobreza 2004.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

4. **Autoridades y entidades cuestionadas.** Los 69 casos dan cuenta del cuestionamiento a 78 autoridades, funcionarios y entidades varias. El 27% de autoridades cuestionadas está integrado por alcaldes provinciales y distritales. Otras entidades incluidas son empresas extractivas (19), Poder Judicial (3), dependencias del Ministerio de Agricultura (5) y Gobiernos Regionales (4).

5. **Motivos o causas aparentes.**³ Entre los principales motivos que han generado los conflictos aquí reportados se encuentran los siguientes:

Motivo	Nº	%
Cuestionamiento de decisiones judiciales o administrativas (sentencias judiciales, linderos, adjudicación de tierras, adquisiciones, obras, etc.)	23	33%
Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos	16	23%
Supuesta gestión no transparente (la entidad no brinda información, no rinde cuentas, etc.)	9	13%
Riesgo de contaminación	13	19%
No realiza obras	7	10%
No cumple promesas / acuerdos	7	10%
Disputa por linderos	6	9%
Demandas gremiales	3	4%

6. **Evolución del conflicto.**

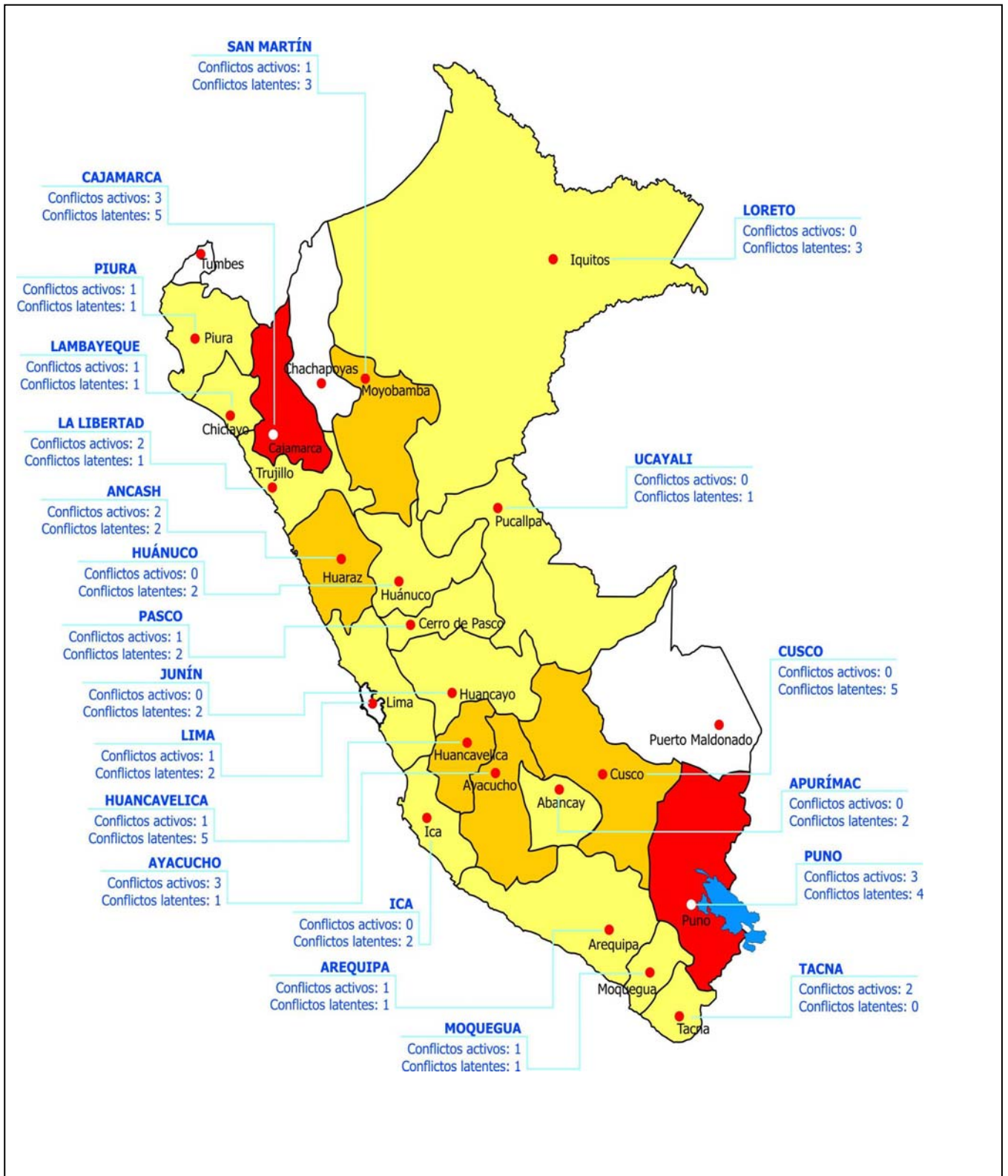
- En 20 casos (29%) se ha constatado la existencia de procesos jurisdiccionales (Ministerio Público o Poder Judicial), auditorías o investigaciones de organismos competentes (Contraloría General de la República, Jurado Nacional de Elecciones) sobre la gestión de la autoridad cuestionada.
- En 47 casos (68%) se han producido enfrentamientos, agresiones e, inclusive, la retención de personas.
- En 25 conflictos (36%), la población tomó el local de la institución cuestionada; en la mayoría de los casos, la Municipalidad.
- En 33 casos (48%) se han registrado paros y movilizaciones; la mayor parte de ellos, pacíficos. Asimismo, en 22 conflictos (32%) se han reportado, como parte de las protestas, bloqueos de vías de comunicación.
- Una vía utilizada para la canalización de estos conflictos ha sido el establecimiento de mecanismos de diálogo entre autoridades, población y empresas, como se constata en 37 de los casos registrados (54%). En la mayoría de ellos se demanda la intervención de entidades con capacidad de influir con sus decisiones sobre su desarrollo (Poder Judicial, Contraloría General de la República, Gobierno Regional, Jurado Nacional de Elecciones, etc.). Por otro lado, cabe mencionar que sólo en dos de estos casos (3%) se ha empleado el diálogo directo entre pobladores y autoridades.

7. **Mecanismos de solución de conflictos.** En el mes de marzo se han resuelto 10 conflictos. Los mecanismos de solución empleados se explican en este cuadro:

Mecanismo de solución empleado	Nº	%
Diálogo y acuerdo entre las partes en conflicto	6	60%
Emisión de resoluciones	3	30%
Intervención de las autoridades pertinentes	1	10%
TOTAL	10	100%

³ Normalmente, la población señala la confluencia de varias razones. El cuadro incluye todos los argumentos expresados por la población. La columna de porcentaje establece la proporción de cada una de estas razones con relación al número total de conflictos (69 en este reporte).

CONFLICTOS ACTIVOS Y LATENTES POR DEPARTAMENTOS Al 31 de marzo del 2007



ANEXO DESCRIPCIÓN DE LOS CONFLICTOS ⁴

CONFLICTOS ACTIVOS

ANCASH

1. Distrito de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga

Actores. Jorge Luis Vega Flores, Partido Aprista Peruano (tercera reelección), regidores (5), pobladores de Llama, JEE Pomabamba.

Antecedentes. En el año 2003 la población tomó las instalaciones de la municipalidad para intentar que el alcalde (elegido por segunda vez) no juramente en el cargo. Esta situación culminó con la firma de un acta en el cual el alcalde se comprometía a retirar las denuncias hechas a los pobladores y a realizar informes trimestrales de los balances económicos. Ninguno de los acuerdos se cumplió.

Hechos. Antes de las elecciones regionales y municipales del 2006, los pobladores realizaron pedidos de fiscalización a los supuestos votos golondrinos que apoyarían al alcalde y a los supuestos malos manejos de fondos. Ninguno de los pedidos fue atendido. El día de las elecciones, cuando los pobladores se enteraron de la reelección del alcalde, ingresaron al local de votación y quemaron las actas.

El 4 de enero del 2007 un grupo de pobladores informaron a la OD Ancash que el local de la Municipalidad había sido tomada por un grupo de pobladores (300 personas), quienes piden que el alcalde reelecto no asuma el cargo, pues consideran que dicha reelección (tercera oportunidad) habría sido realizada con la presencia de votos golondrinos. Además la población no está de acuerdo con el fallo del JEE de Pomabamba, mediante el cual se validaron las elecciones en el distrito, a pesar de que el material electoral fue incinerado por la población el mismo día de las elecciones. En un principio se pensó que no se darían resultados oficiales (los pobladores afirman que desde el JEE Pomabamba se les afirmó verbalmente que habrían elecciones complementarias) sin embargo, el JEE se emitió la credencial al alcalde reelecto, actitud que rechaza la población. De acuerdo a información oficial, se procedió a emitir un resultado con las actas electorales de los personeros (según la Web de la ONPE se han procesado 4 actas, de las cuales 2 fueron anuladas y solo 2 validaron la elección)

El grupo de pobladores que se acercó a la Defensoría del Pueblo indicó que el principal cuestionamiento que se hace a la gestión del alcalde es la poca transparencia, pues la población no tiene acceso a la información que obra en poder de la municipalidad, además, indican que a la fecha no existen obras visibles en el distrito lo que los lleva a pensar que existe malversación de fondos.

El 17 de enero la OD Ancash visitó la zona para conversar sobre el caso con el alcalde, el fiscal y los pobladores. Se comprobó entonces que existían alrededor de 120 personas en las afueras del local, impidiendo el ingreso. Los pobladores han solicitado un pedido de nulidad al JNE y una acción de control por parte de la CGR. Los días 24 y 26, la OD Ancash convocó a dos reuniones para tratar el tema, participaron: el GR, la Prefectura, el Ministerio Público, la PNP, la CGR y pobladores de Llama. Hasta el mes de febrero, la Municipalidad aún se encontraba tomada por la población. Los dirigentes habían aceptado declinar su medida de fuerza si el alcalde reelecto solicitaba licencia al cargo.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

2. Distrito de Tinco, provincia de Mariscal Luzuriaga

Hechos. El día 10 de enero de 2007 la Oficina Defensorial de Ancash recibió la llamada telefónica de pobladores del distrito de Tinco (Provincia de Carhuaz) los que nos informaban que al día siguiente el reelecto alcalde pretendía juramentar al cargo en la plaza del distrito y pese a que un grupo de pobladores se encontraba en las puertas de la Municipalidad exigiendo se invaliden las elecciones, por lo que solicitaban que la Defensoría del Pueblo se acercara a dicho distrito para evitar el conflicto que podía suscitarse; los pobladores reclamaban que la elección era fraudulenta pues el alcalde había resultado reelecto por los "votos golondrinos"; además, es un alcalde que no rinde cuentas y el pueblo no sabe del destino de los dineros para obra públicas. Durante el mes de febrero el alcalde juramentó en el centro poblado de Toma pero no pudo ingresar a la Municipalidad, sin embargo, según lo informado por la PNP la

⁴ ANR: Asamblea Nacional de Rectores. CC: Comunidad Campesina. CGR: Contraloría General de la República. CN: Comunidad Nativa. CP: Centro Poblado Menor. DP: Defensoría del Pueblo. GR: Gobierno Regional. JEE: Jurado Electoral Especial. JNE: Jurado Nacional de Elecciones. MCLCP: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. MD: Municipalidad Distrital. MiP: Ministerio Público. MI: Movimiento Independiente. MEM: Ministerio de Energía y Minas. MuP: Municipalidad Provincial. OD: Oficina Defensorial. ODPE: Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales. PETT: Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros. PJ: Poder Judicial. PNP: Policía Nacional.

situación se estaba calmando y la población que se encuentra en las afueras de la municipalidad estaba disminuyendo.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

AREQUIPA

3. Distritos de Cocachacra e Islay, provincia de Islay

Actores. Accionistas (minoritarios y mayoritarios) de la empresa azucarera Chucarapi.

Otros. Centros Poblados de Chucarapi y Cocachacra.

Antecedentes. Los accionistas minoritarios de la empresa afirman que la compra de acciones se hizo de forma irregular, por otro lado, los accionistas mayoritarios reclaman el derecho de propiedad de la empresa, afirman que la compra se hizo de modo regular mediante la Bolsa de Valores de Lima.

Hechos. El 30 de octubre del 2006 se realizó una reunión en la cual estuvieron presentes el Prefecto de Arequipa, el General de la PNP, los accionistas minoritarios con sus abogados y la DP. Se conversó acerca de la posesión de los accionistas minoritarios. Se les exhortó a entablar una mesa de diálogo con los accionistas mayoritarios. El Juez mixto de Islay, Dr. Cari Choque presentó una medida cautelar a favor de los accionistas mayoritarios para que retomen la posesión de la empresa. El día 22 de noviembre, los accionistas minoritarios interpusieron un Hábeas Corpus ante el juzgado de Lambayeque, esta medida ha sido amparada por el Juez, luego de declarar nula la medida cautelar anterior. El 22 de noviembre la DP se reunió con el gerente general de la empresa Michell y Cía. (accionista mayoritaria de la empresa azucarera Chucarapi) para organizar una mesa de diálogo con los accionistas minoritarios. Además se le recomendó analizar la posibilidad de mejorar las condiciones de los accionistas minoritarios para asistir a la mesa de diálogo con propuestas concretas. El 21 de diciembre se tuvo conocimiento, mediante los medios de comunicación, del enfrentamiento surgido porque la PNP estaba ejecutando la Medida Cautelar de reposición del Directorio de los accionistas mayoritarios, medida dispuesta por el Juzgado de Mollendo luego de que la Sala Constitucional dejó sin efecto el Habeas Corpus dictado por el Juez de Lambayeque. La DP acudió de inmediato al lugar en donde se produjo el enfrentamiento y encontró aproximadamente a 400 pobladores con objetos contundentes, hondas y armas blancas, que ocultaban sus rostros con pasamontañas. Luego se conversó con el General de la PNP, el Juez que dictó la medida cautelar, el Fiscal Mixto, el médico de la posta de salud y la Subprefecta de Cocachacra y de Islay, con quienes se propuso organizar una reunión. En el enfrentamiento se registró un total de 43 personas heridas. El día 23, cientos de pobladores allegados a los cooperativistas ingresaron al complejo, obligaron a la PNP a retirarse y tomaron el control del Ingenio.

El 30 de enero del 2007, el nuevo Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillen Benavides, ha convocado a los principales actores del conflicto (accionistas mayoritarios y minoritarios), con la finalidad de llegar a un acuerdo satisfactorio y evitar un nuevo enfrentamiento. Al mes de febrero del 2007 se ha destituido al Juez de Lambayeque que amparó el hábeas corpus que dejaba sin efecto la medida cautelar dictada por el Juez de Mollendo. La situación del Directorio se encuentra con proceso en el Poder Judicial.

Últimos acontecimientos. El 1 de marzo la Dirección Territorial de Policía de Arequipa – Moquegua solicita a la DP su participación en la diligencia de Restitución Judicial de la Central azucarera Chucarapi. Ese mismo día se realizó el viaje a la zona junto con los efectivos policiales. El 2 de marzo se realizó la incursión pacífica a la central azucarera. Al promediar las 7:30 am los socios mayoritarios tomaron completa posesión de la empresa, este hecho se registró mediante un acta elaborada por la Jueza y la Fiscal de turno. Desde esa fecha no se han registrado intentos de toma del local por parte de los socios minoritarios, los pobladores o los trabajadores de la empresa. Los accionistas minoritarios han organizado una mesa de diálogo con los trabajadores para tratar el tema de mejoras de las condiciones laborales.

AYACUCHO

4. CC Coracora y Chumpi, provincia de Parinacochas y CC Chaviña, Provincia de Lucanas

Actores. Comuneros y dirigentes de las C.C. Coracora y Chumpi (Parinacochas) y Chaviña (Lucanas). Ministerio de Agricultura.

Antecedentes. Hace aproximadamente cien años, un hacendado del valle de Yauca (Caravelí-Arequipa) mandó construir la represa de Angascocha ubicado en el distrito de Chaviña (Lucanas) con el objeto de irrigar las tierras de dicho valle. También hacían uso de esta agua los agricultores de Chaviña. Luego, los agricultores de Cora-Cora, localidad contigua a Chaviña, solicitaron que sus tierras también fueran

beneficiadas con las aguas de la citada represa, debido a que dichos recursos hídricos también les pertenecían.

Hechos. El 7 de octubre del 2006, cuando la junta de usuarios del distrito de riego de las localidades de Coracora y Chumpi (Parinacochas) empezaba a celebrar, por primera vez, la fiesta de la salida del agua a través del canal de irrigación recién construido por el Gobierno Regional de Ayacucho, tuvo conocimiento de que 600 comuneros de Chaviña habían tomado las instalaciones del dique de Angascococha y no permitían la salida del agua. La Junta de usuarios del Sub distrito de Riego de Coracora había conseguido la autorización de la apertura de la compuerta Ucayali en 0.15 metros durante 15 días, a iniciarse después del abastecimiento del Sub Distrito de Riego Yauca (mediante Resolución N° 129-2006-GRA/PR-DRAG-ATDR-AYP del 27 de septiembre del 2006). Esta resolución se firmó luego de un acta en la que se acordaba distribuir el agua de la represa en un porcentaje de 40%-60% entre las comunidades de Yauca y Coracora-Chumpi (firmada por agricultores de Coracora y Yauca, funcionarios del MINAG y el presidente del GR Ayacucho). Al enterarse los pobladores de Coracora de este hecho, se dirigieron al dique de Ancascococha. En un primer momento hubo voluntad de diálogo. Sin embargo, se produjo un enfrentamiento que arrojó como saldo a 32 personas heridas (ocho personas fueron evacuadas a los nosocomios de Puquio y Nazca por la gravedad de sus lesiones). Ese mismo día por la tarde, los coracoreños recuperaron el dique. Ante ello, el día 9 de octubre, la DP realizó visitas a la Dependencia Policial, Hospital y Fiscalía Mixta de Puquio-Lucanas para verificar las investigaciones preliminares del enfrentamiento. El día 12, la DP visitó la Represa de Angascococha, caserío de San José, distrito de Chaviña y el distrito de Coracora. Se encontró que la represa no había sido dañada, pero que se habían incendiado aproximadamente 40 Hás. de los pastizales. En el caserío de San José se verificó que se había incendiado un carro, se habían roto los vidrios de las ventanas de la escuela primaria y se habían saqueado algunos bienes (dos computadoras). En Chaviña se estaban realizando marchas de protesta debido a la utilización del agua. Solicitaban: 1. La anulación de los acuerdos a los que se llegó en el acta suscrita el 12 de septiembre y la Resolución N° 129-2006. 2. Garantías para los jóvenes de Chaviña que estudian en Coracora. 3. Dotación de 800 a 1000 metros de volumen por segundo de agua permanente. 4. Administración de agua con sede en Puquio. 5. Reinstalación de la delegación de la comisaría en el distrito de Chaviña. 6. Que el puesto de salud de Chavín comprenda a la jurisdicción de Lucanas-Puquio. 7. Acatar un paro de 24 horas convocado por el FREDIL para el día 17 de octubre. El 17 de octubre se llevó a cabo el paro programado por los pobladores de Chaviña, sin reportarse hechos violentos.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

5. CC Putica y Chichucancho, distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo

Actores. Comuneros y dirigentes de las Comunidades Campesinas de Putica, Chichucancho, Patahuasi, Huillcapampa. Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) y la Dirección Regional de Agricultura.

Otros. Comuneros Henry Barzola, Oswaldo Arango y Modesto Barzola (C.C. de Putica)

Antecedentes. Se tiene conocimiento de que, desde hace más de dos décadas, las Comunidades Campesinas de Putica y Chichucancho, ubicadas en el distrito y provincia de Cangallo, tienen problemas de delimitación de tierras. En este sentido, en 1985, ante la Dirección Regional de Agricultura se tramitó la titulación de aproximadamente 2,000 hectáreas de tierras agrícolas a favor de la CC de Putica, lo que motivó la reacción de comuneros de Chichucancho, Patahuasi y Huillcapampa, quienes reclaman la titularidad de dichos predios aduciendo que les pertenecen.

Hechos. El 7 de octubre del 2006, durante la mañana, los pobladores de la C.C. de Chichucancho, Patahuasi y Huillcapampa, provistos de armas de fuego, incursionaron en la C.C. de Putica, para tomar posesión de las tierras, específicamente los sectores denominados Tastacucho, Huancapampa, Calvariopampa, Almasamachina, los cuales se encuentran registrados como propiedad de la C.C. de Putica. Se produjo entonces un enfrentamiento entre éstos y los aproximadamente cien comuneros que se encontraban realizando trabajos agrícolas de temporada. En dicha incursión resultó muerta una persona y hubo un total de ocho heridos con perdigones: Alejandro Pillaca Poma (38), Juan Carlos Quispe Arango (17), Fermín Sulca Escriba (32), Ernesto Pérez Prado (18), Carmen Rosa Prado Quino (38). Ante ello, la DP solicitó el informe correspondiente al Fiscal Provincial de Cangallo, efectuando igualmente las coordinaciones necesarias con las autoridades del Gobierno Regional y el Jefe de la Policía Nacional. El día 10 se realizó en el local del Gobierno Regional de Ayacucho una reunión con participación de los dirigentes de la C.C. de Chichucancho, el Vicepresidente del Gobierno Regional de Ayacucho, el Director de PETT y la DP. No hubo autoridades de la C.C. de Putica, por lo cual se suspendió dicha reunión hasta el 11 de octubre con la finalidad de confirmar la participación de las autoridades de ambas comunidades. Se programó una reunión el día 10 de noviembre, a la cual asistirían los actores del conflicto y la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza. Esta reunión fue pospuesta para el día 22 de noviembre. En dicha reunión, que se llevó a cabo en el local de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, participaron la presidenta de la MCLCP, el prefecto, un comisionado para la paz y desarrollo, el

comandante de la PNP, un comisionado de la DP, el subprefecto de Cangallo y representantes de las comunidades. Se les exhortó a solucionar el problema de manera pacífica. Los representantes, sin embargo, manifestaron que no existía representatividad con respecto a la opinión de todo el pueblo. Por ello se acordó que ambas comunidades realizaran reuniones en cada uno de sus pueblos, en las cuales debían aprobar si aceptarían o no la mediación de la DP y de las demás autoridades. Estos acuerdos deben constar en un acta de asamblea cuya copia debe ser presentada en la siguiente reunión, programada para el 3 de diciembre.

El 19 de enero de 2007, se envió cartas a los Presidentes de las comunidades de Putica y Chichucancha solicitando que informen por escrito sobre la aceptación de la intervención mediadora de la DP. La comunidad de Chichucancha respondió (a través del Oficio N° 001-2007-PC.C.CH del 26 de enero de 2007) aceptando que la DP junto con una comisión del Congreso de la República realicen la mediación.

Últimos acontecimientos. Con fecha 09 de marzo la DP vuelve a enviar una carta a la Comunidad de Putica, reiterando el pedido para que expresen mediante comunicación escrita la aceptación de intervención de la DP como mediadora.

6. CP. Cocas, distrito de Vilcanchos y CP. Tomanga, distrito de Sarhua , provincia de Víctor Fajardo

Actores. Comunidad de Cocas y comunidad de Tomanga.

Antecedentes. Se registra un enfrentamiento entre las comunidades en los años 80, en un lugar denominado Samachipampa, en la comunidad de Cocas, el cual tuvo como resultado a algunos heridos. Además existe una denuncia presentada por un comunero de Cocas contra un comunero de Tomanga por daños calificados (expediente N° 2006-735). Se destruyó una propiedad ubicada en el límite entre ambas comunidades. El comunero denunciado es pariente de las actuales autoridades de Tomanga.

Hechos. Las comunidades se han enfrentado debido a un conflicto por delimitación territorial el 8 de febrero del 2007. El enfrentamiento tuvo lugar en las alturas de Choqoro (ubicado en el límite entre ambas comunidades), producto de ello falleció un comunero de Cocas y se registraron alrededor de 20 heridos quienes fueron atendidos en la posta de salud de Cocas. El día 9, el Fiscal de la provincia y la PNP hicieron el levantamiento del cadáver en el lugar de los hechos. Los pobladores de ambas comunidades han solicitado la intervención de las autoridades. La DP ha invocado al diálogo y a mantener la calma, sugiere la instalación de una mesa de diálogo.

Últimos acontecimientos. El 23 de marzo los representantes de las comunidades de Cocas y Tomanga, y los alcaldes distritales de Vilcanchos y Sarhua firmaron una acta de compromiso, en presencia del Representante de la OD Ayacucho, manifestando su voluntad de iniciar un proceso de diálogo con la participación de la DP, para lo cual se comprometieron a presentar su pedido por escrito, acompañando documentos sustentatorios, antes del 16 de abril del presente año.

CAJAMARCA

7. Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba

Actores. Mineras Algamarca y Sullidén Shahuindo, Pobladores del CP Chuquibamba.

Hechos. Las compañías mineras Algamarca y Sullidén Shahuindo sostienen pugnas relacionadas a concesiones mineras y terrenos superficiales en la zona, las cuales se ventilan en el PJ. Ellas han ocasionado enfrentamientos entre comuneros y ronderos que apoyan a una u otra empresa. La población desea que las empresas se retiren de la zona por los riesgos de contaminación.

El 11 de septiembre del 2004, los pobladores del CP Chuquibamba bloquearon las principales vías de acceso que conducen a los campamentos mineros. La vía fue despejada por la PNP. El 28 de septiembre, en reunión convocada por la DP, autoridades regionales, ante la presencia de comuneros y dirigentes, se comprometieron a canalizar los reclamos de la población. La DP coordinó con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y el Distrito de Riego la recopilación de información sobre la cantidad y calidad de las aguas de las fuentes supuestamente contaminadas y de las que se hallen en peligro de contaminación. También efectuaría el seguimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. El 10 de octubre, pobladores de ocho caseríos se reunieron en el CP Malcas y solicitaron que se declare intangible la zona. El 11 de octubre, el Fiscal Provincial de Cajabamba constató que la compañía Sullidén Shahuindo continúa realizando trabajos de exploración en el caserío San José–Algamarca, a pesar de que su autorización venció el 31 de agosto, debiendo rehabilitar las áreas exploradas hasta el 30 de septiembre. La DP solicitó a la Dirección General de Minería que inicie la acción de fiscalización correspondiente. El 13 de octubre, la DP informó a dirigentes de la zona sobre las gestiones realizadas. Se les indicó que continúan las coordinaciones para realizar el análisis del agua en los lugares solicitados, y se les exhortó a mantener el diálogo. Pese a ello se realizaron movilizaciones sucesivas en Chuquibamba (21 de octubre), Tabacal (22), La Grama (23) y Cajabamba (24). Las marchas fueron pacíficas. Sólo en Tabacal, los ronderos detuvieron a

un empleado de la minera Sullidén que filmaba la movilización; dicho empleado los denunció posteriormente por secuestro. El 5 de noviembre, en Huangamarca, se enfrentaron trabajadores de ambas mineras. El 9 de noviembre, en Pampachancas, hubo otro enfrentamiento entre pobladores y PNP ocasionando varios heridos. El 29 de noviembre se reunieron en Chuquibamba funcionarios de la Dirección General de Minería con los pobladores.

El 17 de enero del 2005, en Cajabamba, el MEM e INRENA realizaron una reunión informativa convocada por el alcalde provincial. Según una fuente, los funcionarios limeños indicaron que la reunión se realizaría con 30 personas, lo que provocó el descontento de la población reunida en la Plaza de Armas. La presidenta del Frente de Defensa del Medio Ambiente del Valle de Condebamba solicitó que la charla fuera dirigida a todo el público en la misma plaza. Al no ser aceptada su propuesta (sólo se colocaron parlantes), la población lanzó piedras contra el local municipal y colocó parlantes con música a alto volumen para obstaculizar la reunión. Concluida ésta, la población impidió la salida de los funcionarios, que solo pudieron hacerlo luego de explicar a la población que estaban programando una fiscalización a ambas mineras para verificar que no hubiesen realizado trabajos sin autorización. Representantes de las dos empresas indicaron que habían suscrito un acta por la cual se comprometían a suspender sus actividades. Durante febrero, las empresas mineras cumplieron con el compromiso asumido de paralizar sus actividades hasta que se resuelva su situación jurídica. Sin embargo, no se coordinó con la población, funcionarios del MEM y otras autoridades, la fecha exacta de la fiscalización en dicha zona. Durante marzo, el MEM no realizó la fiscalización solicitada por la población y autoridades locales. Aprovechando el paro agrario de la región, el 14 de marzo los dirigentes del valle tomaron la carretera de acceso hacia Cajabamba. Entre sus reclamos se encontraban petitorios de índole agrario y la declaración de intangibilidad de la zona. El 11 de abril, el Frente de Defensa organizó una movilización en Cajabamba para exigir el retiro de las empresas mineras. No se registraron hechos violentos. El 17 de mayo, en reunión del Frente de Defensa, se trató sobre la organización de las bases de la zona y se expresó preocupación por la permanencia de las mineras. La Comisaría PNP-Cajabamba informó que durante el mes de julio el problema se mantuvo estable, estando a la espera que el PJ resuelva el conflicto de intereses entre empresas. Las actividades mineras seguían paralizadas. Según información proporcionada por el Fiscal Provincial de Cajabamba, un promedio de 300 trabajadores informales estarían realizando actividades de explotación minera en Algamarca. El 23 de agosto, funcionarios de la DREM, GR, alcalde de Cajabamba y un representante de la DESA viajaron a efectuar una fiscalización a Algamarca debido al documento remitido por la Fiscal Provincial de Cajabamba. Su objetivo fue verificar de la explotación informal que están realizando más de 300 pobladores actualmente. El 18 de septiembre, el alcalde de Cajabamba manifestó a la DP que en la zona se viene presentando una situación bastante delicada por el hecho de que existen alrededor de tres mil personas que se dedican a la minería artesanal en la zona en litigio entre Algamarca y Sulliden Shauindo, lo cual podría generar un enfrentamiento entre la empresa y los pobladores. El 27 de octubre la DREM recibe un documento mediante el cual se solicita una inspección (junto con DIGESA) a los mineros informales del Cerro Algamarca. Dicha inspección se llevará a cabo el 2 de noviembre del 2006. Según informaciones que ha obtenido la DP, se está incrementando el número de personas dedicadas a la extracción informal de oro en el cerro Algamarca. El 9 de noviembre, un grupo de aproximadamente 750 mineros informales intentó tomar las instalaciones de la compañía minera Sudamericana. Dichas personas fueron expulsadas por la PNP. Luego, un grupo de ocho dirigentes ingresó a dialogar con los directivos, pero un grupo de personas intentó tomarlos como rehenes. Hubo un enfrentamiento en el cual resultó herida de bala una persona (se internó en la clínica Normedic). El día 14, la DP se comunicó con la comisaría de Algamarca, quienes informaron que la situación se encontraba tranquila, pero que existía gente azuzando a los mineros informales a expulsar a la empresa Sudamericana. El 1 de diciembre, el Fiscal Provincial de Cajabamba exhortó a los mineros informales que abandonen la zona. Esto se dijo después de que se diera a conocer un informe de inteligencia que reporta la muerte de cuatro mineros informales, quienes presumiblemente fallecieron por la manipulación de sustancias nocivas y que han sido enterrados de forma clandestina.

El 14 de enero del 2007 hubo una reunión en la Municipalidad Provincial de Cajabamba para tratar el tema de los mineros informales en la el Cerro Algamarca y formar una comisión encargada. Participaron de la reunión: el Gerente General del Gobierno Regional, Ing. German Estela, el Director de la Dirección Regional de Minería, Ing. Genaro Carrión, el gerente de recursos naturales y medio ambiente, Ing. Tulio Mondragón, el alcalde provincial de Cajabamba, Ing. Carlos Urbina Burgos, los representantes del Centro Social Cajabamba, una representante de la Municipalidad Distrital de Cachachi y un comisionado de la DP. En esta reunión se formó una comisión, presidida por el alcalde de Cajabamba, conformada por un representante del Centro Social de Cajabamba, un representante de la sociedad civil, así como también un representante de la municipalidad de Cachachi, los cuales se comprometen a extender la invitación a los alcaldes de los distritos de Cachachi y Condebamba, además de hacer extensiva la invitación a los trabajadores artesanales.

La comisión se ha propuesto como objetivos: a. Velar por el medio Ambiente, b. Analizar los problemas sociales y velar porque la minería formal de preferencia en el trabajo a los pobladores de la provincia, c. Cautelar que las utilidades que se generen como consecuencia de la actividad minera se usen para impulsar obras de impacto económico social en la provincia.

El día 16 se llevó a cabo una reunión en la que participaron: el Fiscal Mixto de Cajabamba, Dr. Lucido Boyd Palacios, el alcalde de Cajabamba, Ing. Carlos Urbina Burgos, el Presidente de las Rondas Campesinas – Cajabamba, Sr. Abansio Nikin, la representante de las Rondas Campesinas de Condebamba, Sra. Violeta Cabanillas y el secretario del SUTEP – Cajabamba. En dicha reunión los representantes de las rondas manifestaron que estaban en contra de cualquier actividad minera y solicitaron el retiro de urgente de los mineros informales del cerro Algamarca para evitar la contaminación ambiental del valle de Condebamba. En esta reunión se organizó un paro distrital pero no se acordó la fecha del mismo. Ese día la PNP capturó a 7 personas que se encontraban supuestamente realizando actividades de minería informal en la zona de Alto Moyán, se les encontró bolsas de polietileno, bidones vacíos, pastillas de cianuro, palas y barretas. Además, de acuerdo a información obtenida por la PNP, presentan antecedentes por el delito de terrorismo y son los promotores de los paros y levantamientos contra los mineros informales y empresas mineras. La PNP también destruyó 36 pozas de cianuración.

El día 17, la DP visitó la zona para verificar el estado de los detenidos. Se conversó con el comandante PNP David Pérez Vigo, quien informó que, mediante oficio N° 079MP-FPM, el fiscal encargó a los siete detenidos en la dependencia policial mientras se redacta la denuncia. Se constató que ya habían transcurrido más de las 24 horas que establece la ley y no se ha hecho presente el Juez, tampoco se ha dispuesto ninguna medida judicial.

El día 18 la DP se comunicó telefónicamente con la comisaría de Cajabamba y entrevistó al técnico PNP Camposol sobre el tema de los detenidos, se nos informó que el fiscal ya los había puesto a disposición del Juzgado. Además nos comunicamos con la Dra. Lucia Rosa Yon Li, quien informó que ya se había abocado a la causa (por ausencia del Juez Penal), ha abierto instrucción y ha ordenado en el auto de apertura, mandato de comparecencia por los delitos de hurto agravado y contaminación de suelos y aguas. Se les ha tomado las inestructivas. El 21 de febrero la DP realizó una visita al centro poblado Chuquibamba (provincia de Cajabamba) junto con la DREM, el alcalde provincial de Cajabamba, el representante de la DESA, el representante del Gobierno Regional, el presidente del comité transitorio de la municipalidad de Chuquibamba, el presidente de la Federación de rondas campesinas, el representante del Centro Social Cajabamba y la presidenta del Frente de Defensa de Condebamba con la finalidad de realizar un monitoreo participativo. Se tomaron las muestras necesarias. Luego se partió a la zona de Algamarca para buscar información en la comisaría acerca del fallecimiento de un supuesto minero informal en el caserío de Huachoque. De acuerdo a la información obtenida, el 20 de febrero el padre del fallecido (Vicente Ferrer Abanto Arenas) reportó a la policía el fallecimiento, esto fue comunicado al Fiscal quien ordenó el levantamiento inmediato del cadáver para poder realizar la necropsia de ley, sin embargo la familia se llevó el cadáver, por lo cual no se pudo continuar el proceso.

Últimos acontecimientos. El 13 de marzo se llevó a cabo una reunión para analizar el tema. Participaron representantes del Gobierno Regional, municipalidad de Cajabamba, la Vicaría de la Solidaridad y la DP. Se llegó al compromiso de mantener el diálogo abierto con los actores afectados directamente y empezar una campaña de salud con los trabajadores de la zona. Se programó la siguiente reunión para el 31 de marzo. El día 20, el CONAM – Cajamarca organizó una reunión para empezar la coordinación en la actuación sobre el tema. Participaron además, representantes del GR y la DP. Se acordó involucrar también a las direcciones de salud y agricultura.

8. Distrito de Sallique, provincia de Jaén

Actores. Longobardo Ojeda Huamán, alcalde; dirigentes y pobladores de Sallique

Hechos. El 17 de enero del 2007 un grupo de dirigentes tomaron las instalaciones del municipio de Sallique, mostrando así su disconformidad con la reelección del alcalde. Los dirigentes afirman que no hay transparencia en cuanto al manejo de los fondos, la cual ha sido solicitada en la gestión anterior. Ahora, al saber de la reelección, han pedido una investigación a CGR y solicitan que la DP intermedie en el caso. El alcalde ha presentado denuncias penales contra los dirigentes debido a la toma del local, las cuales se encuentran en investigación.

Los dirigentes han comunicado a la DP su pliego de reclamos: 1. Suspensión de acciones represivas del PJ contra los denunciados. 2. Cambio total de trabajadores. 3. Organización de un comité fiscalizador. 4. Rendición de cuentas cada tres meses. 5. Solución de procesos laborales de trabajadores nombrados. 6. Permanencia del alcalde en el distrito (sólo permanece un día). 7. Muestra de la camioneta de la municipalidad (se desconoce su paradero). 8. Cambio del proveedor del programa de vaso de leche. 9. No politización de los programas sociales. 10. Que el alcalde pida disculpas públicas por las agresiones del 25 de noviembre del 2006. 11. Otorgan 5 meses para efectuar los cambios.

La PNP comunicó, el 22 de enero, a la DP acerca de un posible enfrentamiento entre los pobladores que apoyan al alcalde y los dirigentes. De acuerdo a un oficio recibido (Nº 06-DIVPOL-JAEN/Sec) se trataría de 800 a mil personas (de un total de 3100 ciudadanos).

Estado actual: El alcalde no accedió a ninguno de los reclamos realizados. El 31 de enero, los pobladores decidieron abandonar las instalaciones del local municipal para evitar problemas con el Poder Judicial. Solicitaron la presencia del Fiscal y de la DP para hacerlo, se está coordinando la fecha.

Últimos acontecimientos. El día 1 de marzo representantes de la población, el alcalde, los regidores y representantes de la DP se reunieron para dialogar sobre el pliego de reclamos. Abordaron el primer punto referido al pedido de retiro del personal de confianza de la municipalidad; el alcalde sostuvo que tendría que evaluar al personal, al no llegar a ningún acuerdo, los representantes de la población optaron por retirarse. El 20 de marzo la Contraloría General de la República y la fiscalía convocaron, en Sallique, a los representantes de la población, y pidieron volver a la localidad para recoger información en las instalaciones de la municipalidad, comprometiéndose en hacerlo el día 28 de marzo. El 28 de marzo, la CGR visitó Sallique en compañía de la PNP y DP, se intentó reabrir la municipalidad y se recogió información parcial en las oficinas del municipio. El alcalde y el gerente municipal entregaron la información a la CGR, sin embargo afirmaron no tener actas de sesiones de consejo, información financiera ni contable. La CGR continuó la búsqueda e inició el trabajo con la información disponible. La CGR inicialmente no comunicó a los pobladores los procedimientos de su investigación. A pedido de la DP lo hicieron y se acordó con los representantes de la población que a partir de esa fecha sólo atendería la Oficina de Registro Civil. Los representantes de la CGR vienen atendiendo el caso en la ciudad de Jaén.

9. Distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca

Actores. Alcalde del centro poblado de Chanta Alta (Julio Alva), Presidente del comité de Desarrollo del Alto Llaucano (Pedro Acosta que además es asesor del Alcalde de Chanta y Administrador de una empresa que brinda servicios a la Empresa Minera), Minera Yanacocha, Municipalidad de la Encañada (por el caso de la maquinaria retenida y la inejecución de las obras programadas el año pasado).

Antecedentes. En el mes de octubre de 2006 la comunidad de Chanta Alta encabezada por el alcalde Julio Alva retuvo una maquinaria perteneciente a la municipalidad de la Encañada en protesta al incumplimiento del alcalde Fidel Valera en la construcción de una obra valorizada en 1 millón y medio de soles la cual no fue realizada por el alcalde (cargador frontal, moto niveladora, rodillo, dos volquetes y un vehículo de carga). También hay protestas por el incumplimiento de los ofrecimientos de la empresa minera Yanacocha plasmadas en un acta de fecha 17 de mayo del 2006.

Hechos. En asamblea del 21 de enero del 2007 se decidió empezar un paro en contra de la empresa minera y la Municipalidad por considerar un abuso el incumplimiento de los acuerdos y las obras ofrecidas. El paro se realizó 30 de enero, se movilizó un contingente policial de 50 efectivos de Dinos, para resguardar la seguridad de la empresa y evitar un posible bloqueo de la carretera Cajamarca – Bambamarca sin embargo dicha manifestación no llegó a mayores.

El 14 de febrero se tomó conocimiento que un grupo de pobladores de la comunidad de Chanta Alta ingresaron a la propiedad de Minera Yanacocha (Calera China Linda) y les pidieron que se retiren del lugar. En tal intervención se produjo un enfrentamiento entre los pobladores y Forza, producto de este enfrentamiento se destruyó cinco unidades de Maquinaria pesada de la empresa Yanacocha; además uno de los dirigentes manifestó que se están plegando más centros poblados a este reclamo.

Por su parte Minera Yanacocha desmintió esta información manifestando que habían sido solamente 6 personas las que habrían estado tirando piedras contra la calera China Linda provocando la ruptura del parabrisas de una de las camionetas de la empresa.

Últimos acontecimientos. El 26 de febrero se realizó una reunión con representantes de la empresa y autoridades de Chanta Alta para tratar el tema de las obras pendientes y tomar acuerdos acerca de la ejecución de obras de electrificación, la construcción de una carretera (desde Chanta Alta hasta San Antonio) y la ampliación del sistema de agua potable. La policía de Cajamarca se retiró el 2 de marzo del ex campamento minero en La Encañada, luego de áridas negociaciones con los pobladores de la zona y las autoridades, que protestaron por los daños causados a su comunidad tras el retiro intempestivo de insumos químicos que se encontraban en esa zona.

HUANCAVELICA

10. Distrito de Acoria, provincia de Huancavelica

Actores. Alcalde de Acoria, Leonidas Bendejú Fernández; ex – alcalde, Silvano Huamán Sedano; Comité anticorrupción, liderado por Alejandro Aclari tiellacuri, Julio García, Nicolás Cusi Delgado, Héctor Taipe Cárdenas y Leoncio Taipe.

Antecedentes. La población sostiene que se han dado actos de corrupción durante la gestión anterior. Además se cuestiona al ex alcalde y al alcalde electo por no ser oriundos de Acoria, sostienen que el ex alcalde es de Huancayo y el alcalde electo de Junín.

Hechos. En las elecciones regionales y municipales llevadas a cabo el 19 de noviembre del 2006 salió electo el Sr. Leonidas Bendezú quien se había desempeñado como director municipal durante la cuestionada gestión anterior. Un sector de la población se pone a la gestión del alcalde electo y por ello tomaron la municipalidad el día 21 de noviembre.

El 3 de enero del 2007 los pobladores de Acoria bloquearon la vía férrea Huancayo – Huancavelica y la Huancayo – Acoria, bloqueando el tránsito de personas y de vehículos. Los pobladores exigen la presencia de la CGR para que se realice una auditoría. El 9 de enero un equipo de la CGR llegó a Acoria pero no pudo realizar las actividades que tenían previstas así que se retiraron luego de levantar un acta junto con el fiscal de prevención del delito. Luego de ello, el alcalde electo y el alcalde del CP menor de Lamina convocaron a una asamblea multicomunal de la margen izquierda del río Acoria. El tema a tratar era el proyecto de descentralización de la municipalidad. Se decidió postergar dicha asamblea para el día 4 de febrero sin embargo ese día se registró un enfrentamiento entre las comunidades, lo cual dio como resultado a nueve personas heridas (8 civiles y un policía). El 12 de febrero se convocó a una reunión de presidentes de comunidades campesinas y centros poblados menores en Acoria pero no se realizó. La DP intentó retomar el diálogo luego de la reunión y convocó al alcalde de Acoria, los presidentes comunales y a los dirigentes del Comité anticorrupción. Se buscaba restablecer el funcionamiento de la municipalidad. Sin embargo los actores decidieron no participar en el diálogo. La posición del alcalde es resolver el conflicto por la vía judicial y el comité anticorrupción sostiene que es necesaria la vacancia del alcalde.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

LA LIBERTAD

11. Distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión

Actores. Rondas campesinas y juntas vecinales de cinco sectores de Huamachuco, mineros informales del sector de Alto Parashique (colindante con el cerro El Toro), Ministerio Público, PNP. Dirección Regional de Energía y Minas, Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión-Huamachuco

Antecedentes. Si bien el conflicto entre los pobladores y los mineros informales, que no ha podido ser controlado y/o solucionado por las autoridades competentes, no ha llegado al pico de violencia extrema esto no significa que no se trata de un conflicto que puede llegar a mayores dimensiones cuando la población está soportando la contaminación de las aguas con elementos de alta toxicidad como cianuro con el riesgo de la salud. Además en el Cerro El Toro, existen más de 3000 mineros informales que también están realizando actividades de extracción de oro usando cianuro el mismo que termina contaminando las cuencas de los ríos que proveen de agua a la ciudad de Huamachuco.

Si ya hubo una reacción de la población ante la aparente inacción de las autoridades esta latente un nuevo enfrentamiento con los mineros del cerro mencionado.

De acuerdo a lo manifestado por el Sr. Oscar Quiroz de La Cruz, encargado de Medio Ambiente de la Municipalidad de Huamachuco, la población con esta acción en Alto Parashique manifiesta su hartazgo frente a la inacción de las autoridades y decide hacer justicia por sus propias manos destruyendo las pozas de cianuración del sector y lo mismo podría suceder en el Cerro El Toro.

Hechos. El 17 de febrero del 2007, más de 500 personas integrantes de las Rondas Urbanas y Juntas Vecinales de cinco sectores de Huamachuco, con palos, picos y palanas, desalojaron a mineros informales que desde hace un año se han establecido en el Sector Alto Parashique para con métodos rudimentarios extraer oro. La población quemó las pertenencias de los mineros informales y destruyó 17 pozas de cianuración, principales fuentes de contaminación. El presidente del “Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huamachuco” ha manifestado que los pobladores, oportunamente, denunciaron el peligro de contaminación por el uso ilegal y rudimentario de sustancias tóxicas pero que las denuncias se “encarpetaron” en la Fiscalía Provincial de Sánchez Carrión. El párroco de la zona señala que advirtió oportunamente que la población se levantaría al no obtener respuesta de la autoridad.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

12. Distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco

Actores. Rondas Campesinas del distrito de Huaranchal, con una fuerte presencia de ronderos de Chuquizongo. Empresa minera Sienna Minerals S. A. C.

Otros. Bases ronderas de caseríos y Centros Poblados de la zona. Dirección Regional de Minería de La Libertad.

Antecedentes. El 10 de septiembre, el diario *La Industria* de Trujillo informó que, el día 9, aproximadamente 500 ronderos de Barro Negro y Huaranchal atacaron el campamento de Sienna Minerals S.A.C., ubicado en el caserío Igor, distrito de Huaranchal, provincia de Otuzco. Se informó que las acciones de las rondas campesinas se debían a las protestas por la contaminación de las aguas debido a las actividades mineras. La información periodística señaló que todo el campamento fue destruido aunque no se registraron daños personales. Se mencionó toma de rehenes, quienes fueron conducidos a pie hasta la localidad de Huayobamba. En otra nota periodística (*La República-Regional* del 14-9-6), el Gerente de Logística de la empresa minera, Manuel Higuera Cortés, manifestó “que las amenazas de desalojo se iniciaron el mes de julio del presente año, agregando que las acusaciones de contaminación son falsas, pues actualmente sólo viene realizando labores de exploración y no de explotación, por lo cual no utilizan ningún insumo químico”. En la nota se precisó que la fase de exploración debe terminar en tres o cuatro años, aproximadamente. En Radio Chami de Otuzco se informó que, el 15 de junio, el presidente de la base de las rondas campesinas de la localidad notificó a la empresa, dando un plazo de 15 días para desalojar la zona. Señaló que los daños materiales causados por los ronderos ascienden a la suma de S/. 40,000. Asimismo se informó que la Juez de Paz de Huaranchal constató que se había cortado en forma violenta el cableado de la antena parabólica del sistema de telefonía fija, que se ocasionaron desperfectos en el grupo electrógeno de la empresa, violentándose la puerta de acceso de la Oficina de Geología de la minera, y que habían desaparecido lámparas de carburo, entre otros. En este mismo reporte periodístico se señaló que el dirigente rondero Wilmer Herrera manifestó que no se realizó ningún desalojo y que mediante una Asamblea pública en la plaza de armas de Huaranchal se había otorgado el plazo de tres días para el desalojo de la empresa minera.

Hechos. La DP visitó el lugar de los hechos el 13 de septiembre y constató que: 1. El campamento no fue destruido en su totalidad, pero sí afectado. De estos hechos se hizo cargo la Juez de Paz de Huaranchal, quien levantó el inventario de daños. Asimismo, la PNP de Otuzco terminó el día 19 el Atestado Policial que fue derivado a la Fiscalía Provincial Mixta de Otuzco para determinar si se formula o no la denuncia respectiva. 2. Fueron aproximadamente 500 ronderos los que realizaron estas acciones y fueron las Rondas de Chuquizongo las que azuzaron a las rondas de los caseríos vecinos para llevar adelante la toma del campamento. 3. De la entrevista con el Jefe de Seguridad quedó establecido que fue secuestrado junto a un ingeniero, siendo conducidos –a pie– hasta la localidad vecina de Huayobamba, en un recorrido que duró cerca de nueve horas. 4. Hay una fuerte acción de los movimientos ronderiles de la zona contra la actividad minera, aduciendo la contaminación de aguas y cultivos. Existe la posibilidad de que haya influencia de movimientos ecologistas, de apetitos privados entre empresas mineras o de remanentes de SL.

Las investigaciones sobre los hechos se están llevando adelante en la PNP de Otuzco y el Atestado ha sido remitido a la Fiscalía Provincial Mixta de la localidad. El 13 de octubre, la DP recibió la queja de personal de PNP al que se le adeudaría dinero por los servicios de seguridad prestados a la empresa Sienna Minerals, quienes laboran ahí durante sus vacaciones y días libres. El día 18, la empresa informó a la III Dirtepol que había efectuado depósitos de dinero mediante los cuales cancelaría los montos adeudados. El día 30, la DP recibió información de que posiblemente el 5 de noviembre se estaría realizando una nueva incursión de las bases ronderas de la zona de Huaranchal en el campamento minero de Igor. Acerca del proceso penal, el Fiscal en investigación preliminar ha solicitado al Juzgado la detención preliminar de los denunciados. Además, el Juzgado Provincial Mixto de Otuzco ha declarado improcedente el pedido de detención preliminar. El proceso está en trámite. El 28 de noviembre, la DP participó en una reunión convocada por el Frente de Defensa de los Intereses de Huaranchal para conocer los avances sobre el tema ambiental, la cual se llevó a cabo en el auditorio de la Municipalidad de Huaranchal. Estuvieron presentes el Gobernador, el Juez de Paz, representantes de las Rondas Campesinas de Huaranchal y representantes de Sienna Minerals. Se ha programado una reunión para el día 7 de diciembre en Huaranchal (no en Otuzco, como propuso el MEM). La DP también se reunió con ronderos de Huayabal (zona baja de Huaranchal), quienes manifestaron su descontento por mantenerlos al margen de las reuniones. Se ha realizado una reunión el 7 de diciembre, en la cual se acordó formar una mesa de diálogo y se formó 3 comisiones: 1. Ordenamiento Territorial, 2. Minería Informal y 3. Monitoreo de Agua. Además se acordó realizar una reunión el 19 de enero del 2006, sin embargo esta reunión no se llevó a cabo y fue reprogramada para el 4 de febrero en Huayobamba. Se busca formalizar la ronda de Huaranchal (es muy probable que esto radicalice su posición).

Durante el mes de febrero del 2007, la DP entrevistó al coordinador general de las rondas campesinas de Chuquizongo y Huaranchal y con el presidente de la federación regional de rondas campesinas de La Libertad quienes se reafirman en su oposición a la exploración minera. El 8 de febrero la DP organizó una reunión con el representante de Sienna Minerals, se hizo evidente la preocupación por el retroceso en el diálogo entre las partes. Manifestó que se continúan las labores de exploración.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

LAMBAYEQUE

13. Distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo

Actores. Empresa Agroindustrial Cayaltí, pobladores de Cayaltí, COFIDE, Sindicato de Trabajadores repuestos y representantes de trabajadores firmantes del acuerdo conciliatorio.

Hechos. La disputa por el control de la Empresa Agroindustrial Cayaltí produjo, en febrero del 2004, enfrentamientos entre los propios pobladores. El 28 de mayo, el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, con apoyo de la PNP y presencia de la DP, instaló al Directorio de la empresa, bajo la presidencia de COFIDE. Unos 60 accionistas minoritarios protestaron, pero fueron dispersados por la PNP; cuatro personas fueron detenidas durante la protesta, pero posteriormente fueron liberadas. El 15 de junio, unas 100 personas desalojaron de las instalaciones de la Empresa Agroindustrial Cayaltí al Directorio instalado por mandato del PJ. Al día siguiente, aproximadamente 500 trabajadores y pobladores de Cayaltí ingresaron a las instalaciones de la empresa y desalojaron al grupo opositor a COFIDE. No se produjeron heridos y la PNP solicitó el apoyo de más efectivos. La empresa se encuentra a cargo de COFIDE. Al haberse aplicado la suspensión de labores por parte de la Dirección Región de Trabajo-Lambayeque a 522 trabajadores de la empresa que no firmaron el Acuerdo Conciliatorio propuesto por COFIDE, el Centro de Salud de Cayaltí-EsSalud habría restringido la atención médica a los trabajadores como asegurados de EsSalud, lo que originó su protesta ante COFIDE. Dicha situación fue superada a raíz de las gestiones realizadas por la DP ante EsSalud-Lambayeque. A la fecha, los enfrentamientos por el control de la Empresa Agroindustrial Cayaltí han cesado y la actividad que prosigue desarrollando COFIDE en dicha empresa se viene ejecutando de manera normal. El 25 de febrero del 2005 se llevó a cabo la Asamblea General de Socios de la empresa Agroindustrial de Cayaltí, que firmaron la Carta de Conciliación con la empresa fiduciaria que actualmente se encuentra a cargo de la gestión y administración de los activos y pasivos de la referida empresa Agroindustrial. En dicha asamblea se aprobó el Reglamento General y el Calendario de Elecciones que deberá aplicar el Comité Electoral para elegir a la Comisión de Fiscalización que se encargará de supervisar la operación y manejo que está efectuando la fiduciaria sobre la empresa. Habiéndose determinado la participación de tres listas hábiles de candidatos, el Comité Electoral señaló el 19 de marzo del 2005 como día de la elección, además de la publicación de resultados, proclamación de la lista ganadora y entrega de credenciales. En dichos actos participó la DP, un representante del GR Lambayeque y personal de la ODPE-Lambayeque, con la finalidad de acompañar el proceso y brindar asistencia técnica. El proceso electoral se llevó a cabo sin ningún inconveniente, para cuyo efecto se levantó el acta de conteo general, la cual fue suscrita por los miembros de las entidades antes citadas y el Juez de Paz del Distrito de Cayaltí, resultando como ganadora la lista N° 2, que conformará el Comité de Fiscalización con un período de un año. Con la elección democrática del citado comité de fiscalización de la empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A, que tendrá como función verificar la operación y manejo de la fiduciaria, han cesado las protestas y reclamos por parte de los trabajadores sobre presuntas irregularidades en la administración de la citada empresa agroindustrial por parte de la fiduciaria. Durante el mes de septiembre se han llevado a cabo reuniones entre los representantes del Sindicato de trabajadores (los cuales serán repuestos por sentencia del Tribunal Constitucional), los representantes de los trabajadores firmantes del acuerdo conciliatorio de la empresa Cayaltí, la DP y 60 personas aproximadamente. Dichas reuniones se organizaron a raíz del conflicto suscitado por: 1. La ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda de amparo presentada por el Sindicato de Trabajadores de la empresa contra el fideicomiso de Gestión y Administración de los pasivos y activos de la empresa. Se ordenó que la demanda reincorpore en sus puestos de trabajo a los afiliados al sindicato. 2. Se originaría desigualdad debido a la ejecución de dicha sentencia y a que los empleados que firmaron el acuerdo conciliatorio dispusieron la capitalización de sus adeudos laborales y sacrificaron sus condiciones de trabajo, lo cual ha permitido la recuperación económica de la empresa. Durante la reunión se expusieron los puntos de vista de cada uno acerca de la reposición de los trabajadores. Así, los representantes de los trabajadores firmantes del acuerdo conciliatorio sostuvieron que no se oponen al mandato judicial de reposición, pero es necesario que suscriban el acuerdo conciliatorio. De otro modo no permitirán su ingreso (afirman que lo impedirán incluso con la fuerza), ya que consideran que no habría igualdad laboral para todos los trabajadores. Por otro lado, los representantes de los trabajadores a ser reincorporados sostienen que la reincorporación se deberá hacer sin ningún condicionamiento que implique el desconocimiento de derechos laborales (como la firma del acuerdo conciliatorio). La posibilidad de llegar a un acuerdo está supeditada a lo que se determine en la asamblea de asociados (que se realizaría durante la primera semana de octubre. Los resultados serán comunicados a la DP). Además, se tiene conocimiento de que la empresa ha contratado personal de vigilancia (200 personas, aproximadamente) para proteger sus instalaciones ante posibles actos de violencia que se podrían generar al ejecutar la sentencia, la cual se daría aproximadamente en dos semanas, ya que el expediente se encuentra

en el Tribunal Constitucional debido al recurso de aclaración de sentencia presentado por COFIDE. Según información proporcionada a la DP por el asesor legal del Fideicomiso de Gestión y Administración de los Pasivos y Activos de la empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A., el expediente de amparo, hasta el mes de enero, se encuentra en el juzgado de origen para su ejecución.

El 30 de enero del 2007 el sexto juzgado de paz emitió una resolución mediante la cual ordena la reposición de 79 ex trabajadores de la empresa (primera lista) en mérito a la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta resolución ha sido apelada por el fideicomiso, la cual ha sido concedida si nefecto suspensivo. Por ello, el Juzgado Civil notificó mediante exhorto a la empresa a través del Juez de Paz de Cayaltí, la citada reunión para que de cumplimiento sin embargo por una omisión procesal notificó la resolución que ordena la reposición de los trabajadores en una dirección distinta a la señalada por la empresa, motivo por el cual, el fideicomiso ha planteado la nulidad de la notificación y ha solicitado se proceda a notificar conforme al Código Procesal Civil. Así, el recurso de nulidad y el de apelación se encuentran pendientes de resolución. La reposición de los 79 trabajadores podría producir enfrentamientos debido a la contraposición de las partes, es por ello que la DP se encuentra realizando las coordinaciones correspondientes para que se tomen las medidas de seguridad en la ejecución de la resolución.

Últimos acontecimientos. El 8 de marzo el Juez de paz de primera nominación del distrito de Cayaltí llevó a cabo la diligencia de reposición de 79 trabajadores despedidos por la empresa, sin embargo esta diligencia fue interrumpida debido a que un grupo de trabajadores, que se oponían a la reposición, se atrincheraron en el local de la referida compañía y quemaron llantas. Así, la diligencia fue suspendida por el Juez de paz, la cual ha sido reprogramada para las siguientes semanas, se ha solicitado mayor apoyo policial.

LIMA

14. Distrito de Huampará, provincia de Yauyos

Actores. Población del distrito de Huampará; presidente de la comunidad de Huampará, Sr. Pablo Ballarta; alcalde reelecto, Sr. Luis Beltrán Ponce Martínez, de partido político "Somos Perú"; candidato del partido político "Perú Posible", Sr. Luis Alberto Pérez Tomas.

Antecedentes. Los pobladores afirman que el alcalde no tuvo una buena gestión.

Hechos. El 19 de noviembre del 2006, luego del conteo de votos de las elecciones regionales y municipales, se determinó que ganó el candidato del partido político "Perú Posible" con un voto de diferencia ante el candidato del partido "Somos Perú". Al enterarse de esto, un grupo de pobladores ingresó al local municipal y destruyó las actas. Ante ello, la DP, solicitó la nulidad de la elección la cual se declaró el día 14 de diciembre mediante resolución N°479-2006-JEE/YAUUYOS. Sin embargo el 28 de diciembre el personero de Somos Perú interpuso recurso de apelación declarándose válida la elección distrital (mediante resolución N° 479-2006-JEE/YAUUYOS). Ante esto los pobladores deciden tomar el placio municipal e impedir el ingreso de la autoridad edil. La DP ha mantenido continuas comunicaciones con pobladores del distrito quienes han manifestado que continuarán con esta medida. El candidato perdedor ha interpuesto una demanda ante la Fiscalía Provincial Mixta de Yauyos contra el alcalde reelecto y otras personas por delitos contra la voluntad popular, corrupción de funcionarios, contra la fe pública y contra la tranquilidad pública en agravio del partido político "Perú Posible". La DP ha solicitado información sobre la denuncia, sin embargo aún no se ha podido obtener alguna.

El 28 de marzo del 2007 la DP se comunicó con el presidente de la comunidad quien confirmó que el palacio municipal continúa cerrado. No funciona ni la oficina de registro civil, por lo cual no se pueden inscribir nacimientos, obtener copias de partidas o celebrar matrimonios.

MOQUEGUA

15. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo

Actores. Población de Ilo y Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua (dirigentes: Oswaldo Luque y Leonel Villanueva) y la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation.

Antecedentes. Desde el año 1995 no se paga el Canon y desde el 2005 las regalías. Existe, entonces, un período de tiempo en que no se ha compensado adecuadamente a la población por la explotación de recursos.

En el 2004 se conformó una Mesa de Dialogo constituida por representantes de la Sociedad Civil, la Empresa SPCC, el Gobierno Regional, el Gobierno Local y el Ministerio de Energía y Minas. Las reuniones tenían como objetivo determinar el modo en que la Empresa colaboraría con el desarrollo social de la Provincia. Luego de casi dos años de reuniones, la Empresa aprobó los expedientes técnicos para el desarrollo de obras que representaban el costo de aproximadamente siete millones 200 mil soles.

Hechos. El 19 de septiembre del 2006 se reunieron los representantes de la Mesa de Diálogo y los pobladores (más de 3,000 pobladores de Ilo y los representantes de la sociedad civil a la Mesa de Diálogo). El día 20, los pobladores decidieron ejercer medidas de fuerza, obstaculizaron las vías del tren que traslada el mineral (proveniente de Cuajone) a la Fundición de la SPCC en Ilo. Los pobladores nombraron a los dirigentes del Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Ilo, encargados de organizar las medidas de lucha. El día 22 se solicitó la presencia del Primer Ministro y del Ministro de Energía y Minas mediante un oficio cursado por el Gobierno Regional. Ese mismo día, el MEM emitió respuesta al documento recibido manifestando su disposición de recibir a los dirigentes siempre y cuando se cesase el bloqueo de las vías del tren. No se obtuvo respuesta de la PCM por lo que se convocó a un paro general de 24 horas. Durante la madrugada del 22 se produjo la detención de Oswaldo Luque, dirigente del Frente. Además, hubo un enfrentamiento entre la PNP y la población al haber procedido los primeros a retirar las piedras colocadas por los manifestantes en las vías del tren. La PNP procedió a tirar bombas lacrimógenas. Los congresistas por Moquegua remitieron un documento a la PCM solicitando su presencia en Ilo. El Primer Ministro contestó el documento en el mismo sentido que el MEM el día anterior, citando a los dirigentes para el día 26 de setiembre en Lima. Se decidió levantar la medida de fuerza en tanto se realizase la reunión con el Primer Ministro y el MEM a las 12:00 p.m. El 23 se produjo una reunión entre los dirigentes del Frente para elegir a los representantes que viajarían a Lima a la entrevista, disponiendo que viajaran los señores Oswaldo Luque, Leonel Villanueva y Margarita Chávez Flores. El 26 se llevó a cabo la reunión en la PCM, que contó con la participación del Primer Ministro, el Ministro de Energía y Minas, el congresista Washington Delgado, la señora Cristala Constantinides Rosado, Presidenta Regional de Moquegua, y los dirigentes del Frente. Se acordó que el Premier y el Ministro de Energía visitarían Ilo el 6 de octubre. El 27 de setiembre se tomó conocimiento a través de los medios de que en la Audiencia Pública (que se efectuaría el 28) se pensaba desautorizar a los representantes del Frente de Defensa en tanto se conoció que el señor Leonel Villanueva y Margarita Chávez Flores son candidatos a regidores por Ilo. El 23 de noviembre se programó una reunión entre el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Ilo y representantes de la compañía Southern Perú. Uno de los temas propuestos es comprometer a la compañía minera con el pago de 400 millones de dólares por daños ambientales. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la compañía minera señaló que su empresa no pagará los 400 millones de dólares que se les demanda por daños ambientales porque su compromiso empresarial es aportar para el desarrollo sostenible de la provincia de Ilo, que se traduce en obras y proyectos. El 5 de diciembre se informó acerca de un paro de 48 horas convocado por el Frente de Defensa de los Intereses de Ilo debido a que la empresa aún no paga las compensaciones por los daños ambientales. El día 6 decidieron suspender el paro programado debido a que recibieron una carta del Presidente del Consejo de Ministros, en la cual informa que viajará a la zona el 18 de enero. El 6 de febrero del 2007 los delegados del Frente tuvieron una reunión de delegados en la que se trató de reorganizar el Frente con la inclusión de nuevos miembros (algunos integrantes han perdido legitimidad). Se designó a Percy Villavicencio Rojas como vice – coordinador, pero esta designación no ha sido avalada aún por la comunidad en Asamblea Popular. El accionar de la mesa de diálogo se ha quebrado debido a que los representantes de la PCM, el presidente regional y los alcaldes de la provincia han determinado un plazo de seis meses para que una comisión multidisciplinaria e interinstitucional efectúe las evaluaciones necesarias y emita el informe preliminar acerca de los daños ocasionados al medio ambiente, esto contradice el compromiso asumido por el presidente de PCM en Ilo de solicitar una auditoría internacional para determinar el grado de contaminación.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

PASCO

16. Distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco

Actores. Población de los distritos de Chaupimarca y Yanacancha, compañía minera Volcan S.A.

Otros. Frente Amplio de Defensa de los intereses de Pasco (FADIP), Centro de Cultura Popular Labor (ONG), municipalidad provincial de Pasco, trabajadores de la compañía minera Volcán.

Antecedentes. El 26 de mayo del 2005, la Federación de Trabajadores de la compañía Minera Volcan S.A. demandó parte de las utilidades de las ganancias que la compañía Minera Volcan S.A. ganó durante el año 2004. Entre las medidas tomadas por la Federación de Trabajadores se registran el bloqueo de la entrada a la minera e incluso el ataque a las instalaciones de la compañía, razón por la cual la minera evacuó al personal y demandó resguardo policial. El 1 de junio, las partes acordaron el cese de la medida de fuerza por parte de los trabajadores y el pago, por parte de la empresa minera, de 1,000 soles (700 soles en calidad de bono extraordinario y 300 soles como pago anticipado a cuenta de participación de utilidades normada por el D.L. N° 892).

Incumplimiento del programa de adecuación y manejo ambiental por parte de la compañía minera Volcan S.A. No respetar el acta de fecha 20 de mayo de 1998 y resolución del INC–Pasco del año 2002. El primero

estableció ya no conceder más áreas urbanas para efectos de expansión minera y el segundo declaró patrimonio cultural diversas zonas del distrito de Yanacancha. Refieren los pobladores que la compañía Volcán, por acción de su superintendente, viene adquiriendo diversas viviendas aledañas al anillo del tajo abierto a efectos de lograr su expansión. Esto se produce desde hace más de tres años.

Hechos. Desde 1998, fecha en que la empresa minera Centromín Perú fue privatizada y comprada por la compañía Volcan S.A., ésta ha pretendido lograr la expansión del tajo abierto "Raúl Rojas" a efectos de continuar con la extracción de minerales. Así, la empresa emprendió una campaña de compra de diversos terrenos y viviendas aledañas al anillo del tajo. Desde el año pasado y a inicios del presente surgió un conflicto en la venta de viviendas ubicadas en el distrito de Chaupimarca, las cuales habían sido declaradas Monumento Integrante del patrimonio cultural por el INC (mediante Resolución Directoral N° 1031 del 29 de octubre del 2002). Así, la empresa planteó su plan de expansión ante el MEM. El 16 de mayo del 2006, la MP de Pasco emitió la Ordenanza Municipal N° 019-2006-CM,-HMPP, mediante la cual se permite que los espacios y terrenos de la ciudad sean solamente de uso comercial y residencial mientras no se elabore el plan de desarrollo urbano concertado de la ciudad de Cerro de Pasco. Los terrenos que sean utilizados de un modo distinto serán expropiados. Ante esto, el 26 de junio del 2006 el MEM convocó a una reunión informativa del Plan de Expansión Minera de la compañía Volcan S.A., la cual contó con la presencia de gran cantidad de pobladores. En esta reunión, los representantes de la compañía expusieron su plan de expansión, el cual incluía afectar el 1.5% del área urbana del distrito de Chaupimarca. Se acordó absolver las consultas de los pobladores el día 18 de julio. Sin embargo, esta reunión se vio frustrada porque no asistió el representante del MEM. Además, la empresa alegó que no había condiciones de seguridad para realizar la referida audiencia. Actualmente, la empresa sigue comprando algunas viviendas sin respetar las ordenanzas emitidas por la municipalidad. El 31 de agosto hubo una reunión en la que se dejó entrever que las causas de alta contaminación de plomo en la sangre no son responsabilidad de la compañía minera, sino que, su fuente principal está en el terreno donde se encuentran ubicadas las viviendas, toda vez que tienen altos contenidos de plomo. Por ello se convino con los presentes que era necesario realizar un estudio sobre cuán mineralizado de plomo estaba el suelo de los lugares donde más se habían sobrepasado los niveles máximos permisibles. Los resultados serían expuestos en la reunión del 15 de septiembre. Los días 1 y 2 de septiembre se reunieron en Lima representantes de los seis sindicatos de la minera Volcan y del Ministerio del Trabajo para buscar evitar el enunciado paro de los trabajadores. El MEM convocó a una reunión el 15 de septiembre en la Sala de Regidores del Municipio Provincial de Pasco. Asistieron el Ministro de Energía y Minas, la viceministra de Minas, el Superintendente de la compañía Volcán, el presidente del Gobierno Regional, el alcalde provincial de Pasco, la alcaldesa de Yanacancha, la directora Regional de Salud, congresistas de Pasco, el Director Regional de Energía y Minas, representantes de la sociedad civil y la DP. En esta reunión se expusieron diversos temas: 1. Se pudo comprobar que existen cantidades que sobrepasan los límites permisibles de plomo en sangre. Hay personas que tienen hasta 120.00 ug pb/dL, cuando lo permisible es hasta 20 microgramos de plomo por decilitro de sangre en adultos (estudio realizado en una muestra representativa de 26 pobladores de Cerro de Pasco, el 25 de agosto del presente año). En 1999 se hizo un análisis similar con una muestra de 530 personas, en el cual el valor mínimo fue de 1.9 y el máximo de 45.5 ug pb/dl. Asimismo, en el 2002 se hizo un estudio en Champamarca y Quiulacocha en 170 personas, que dio por resultado valores elevados de plomo. (Al respecto se añadió que el SIS no atiende a personas afectadas por plomo. Respecto de esto se llegó a acordar la realización de un estudio integral de plomo en sangre en el más breve plazo), 2. Necesidad de la pronta elaboración del plan de desarrollo urbano de la Provincia de Pasco. Se informó que el 26 de junio se formó el Convenio de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan Urbano conformado por profesionales independientes y que va a incluir a un técnico de la compañía Volcán. 3. La DREM expuso un informe sobre el cumplimiento de los compromisos ambientales de la compañía minera Volcan. Se destacó que son 11 proyectos PAMA-Centromín Perú, de los cuales ocho han sido transferidos a Volcan y tres han quedado como pasivos ambientales de Centromín Perú. El depósito de relaves de Quiulacocha ha sido ejecutado sólo en un 50%. Se informó que la recuperación del lago Junín y el río San Juan tiene un avance del 97%. Según los representantes de la sociedad civil, dicho informe no coincide con la realidad. Asimismo existe una contradicción respecto de la laguna Yanamate: su recuperación natural tardaría 100 años. Respecto del depósito de desmonte de Rumiallana, en época de estiaje se genera polvo y en época de lluvias se producen lluvias ácidas. Asimismo, refirió el Director Regional de Energía y Minas que la explotación a tajo abierto genera también el desplazamiento de polvos. Manifestó que no hay normas que regulen post-PAMA, que se permita fiscalizar los problemas que se generan luego de las actividades que ha realizado la empresa. 4. Al respecto, la viceministra presentó los resultados oficiales del cumplimiento del PAMA de Volcán y CENTROMÍN PERÚ. Acotó que los resultados presentados por la DREM no son oficiales y que distan de los que se maneja en el MEM. Además aclaró que no es cierto que no existan normas post-PAMA, ya que están vigentes el D.S. 016-93-EM y los planes de contingencia en los Estudios de Impacto ambiental. 5. El Director de fiscalización minera dio a conocer los resultados recientes de los Proyectos: a. Abandono de relaves de Quiulacocha. b.

Cierre de minas de Goyllarisquizga y c. Recuperación del lago (Proy. PAMA) que están a cargo de CENTROMÍN PERÚ. Así, con relación a los puntos a y c, se está en proceso de avance de acuerdo con la normatividad vigente. Respecto al punto b se ha tenido que replantear el cierre de la mina ya que se ha detectado que existen otros pasivos, los cuales han dado lugar a desarrollar dos proyectos adicionales. Respecto de los proyectos de Volcán, se informó que se está cumpliendo según los objetivos. Sin embargo, respecto a la planta de tratamiento, el proceso de fiscalización debería ser más eficiente. 6. La Viceministra añadió que respecto de la responsabilidad de remediación del lago Junín, la empresa Centromín Perú tiene responsabilidad de 38%, la Compañía minera Brocal de 26%, Volcán de 26% y la minera Aurex del 19%. Además de ello se precisó que, según últimos estudios, también se ha determinado que existe un gran porcentaje de contaminación causado por la presencia de residuos domésticos, 7. Se conformará una comisión presidida por el Director de fiscalización que realizará un inventario de los problemas ambientales en Pasco. 8. El Director Regional de Vivienda informó sobre el problema de viviendas afectadas por las explosiones realizadas por la compañía Volcán, y estimó que asciende a unas 1180 viviendas afectadas por la expansión del tajo abierto. Además, dijo que se desconocen los límites máximos permitidos de vibraciones producto de las explosiones realizadas. Respecto de ello, el secretario de Defensa Civil informó que las viviendas evaluadas y declaradas en emergencia son 333. 9. Por su parte, el Superintendente de la empresa Volcán refirió que la vida del tajo abierto es de dos años; además, que se vienen ejecutando varios proyectos como: 1º Separación de aguas neutras de mina. 2º Construcción de canales de captación de aguas ácidas. 3º Construcción de sistema de canales de aguas de escorrentía. 4º Construcción de planta de neutralización. Respecto de la laguna de Yanamate, sostuvo que se está considerando el plan de cierre. Respecto de los procedimientos de atención de las viviendas afectadas, señaló que se ha realizado un estudio de geomecánica cuyos resultados coinciden con un informe presentado por Defensa Civil, en el sentido de que su destrucción se debe a las malas construcciones y terrenos no compactados. Respecto del plomo en sangre alegó que el problema reside en que es el mismo suelo el que tiene alto contenido de plomo y que, en todo caso, las viviendas no debieron ser construidas en el lugar. Los representantes de la sociedad civil manifestaron disconformidad con las presentaciones de la empresa minera Volcán. El alcalde provincial solicitó que se retiren las tuberías que conectan a la laguna Yanamate, pues no se utilizan. El Presidente Regional propuso una auditoría ambiental, una propuesta de expansión minera no de tres o cuatro años, sino de 20 a 40 años. El Ministro sostuvo que la participación de la empresa Volcán en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano es importante. Además de ello se propuso la descentralización de funciones del MEM. El 20 de octubre se llevó a cabo la segunda mesa de diálogo en la Sala de Regidores de la Municipalidad de Pasco. Asistieron el Director General de Medio Ambiente, el alcalde provincial de Pasco, representantes de la compañía minera, representantes de las Direcciones Regionales de Salud, Minería y Vivienda, la DP, trabajadores de la empresa minera y algunos pobladores cuyas viviendas han sido afectadas. Se trataron los siguientes temas: informes de la sub comisión de salud sobre contaminación de plomo en sangre, informes de la Dirección Regional de Energía y Minas sobre el cumplimiento del programa de adecuación y manejo ambiental por parte de las empresas Volcan Y CENTROMÍN PERU, informes por la Dirección Regional de Vivienda sobre el problema de afectación de casas por explotación minera y el tema de expansión minera requerida por la compañía minera VOLCAN. Respecto al problema de sangre en plomo, se ha determinado que son seis niños los que tienen alta concentración de plomo en sangre. Además, se debe realizar un estudio para determinar las causas directas de la contaminación de plomo. Para ello se ha designado presupuesto por parte de la empresa minera y el MEM. Respecto de la dirección de vivienda, se presentó un informe preliminar de visitas realizadas a las viviendas afectadas. El informe fue cuestionado por el Director General de medio ambiente, quien afirmó que se trataba de un informe de gabinete y solicitó que se corrigiera el trabajo para la próxima reunión, toda vez que el informe brindado son sobre estudios cuyos resultados ya se conocían anteriormente. La Comisión conminó a la empresa minera a que en la próxima reunión debe plantear la solución definitiva al problema de viviendas afectadas. Por otro lado, el sector de energía y minas refiere que se está en proceso de recolección de información. Los cuatro proyectos asumidos por la compañía Volcán (Separación de aguas neutras de mina, construcción de canales de captación de aguas ácidas, construcción de sistema de canales de aguas de escorrentía y construcción de planta de neutralización) han sido cumplidos en un 100%. Además, se informa que el mayor incumplimiento viene por parte de la compañía minera Centromín Perú, quienes se encuentran fuera del plazo concedido en los proyectos de mitigación, sin embargo se refiere que no se han encontrado daños ambientales. Al respecto la DP planteó la necesidad de contrastar dichos datos con los manejados por el MEM ya que es la misma información vertida en reunión pasada y que fue cuestionada por la entonces Viceministra de energía. Respecto a la Comisión que informaría sobre los avances del proyecto de expansión minera, se refirió que la MP de Pasco, unilateralmente en sesión de Consejo, acordó suspender las funciones de dicha comisión, debido a que se tratará el tema cuando se haya desarrollado el Plan de ordenamiento urbano para la provincia. Este hecho produjo malestar en los funcionarios de la compañía minera Volcán, quienes refirieron que no se puede esperar a que se realice dicho plan. Asimismo

se refirió que la dirección de catastro de la MP no cuenta entre sus documentos con ningún plan o proyecto de expansión minera. Si bien este ya había sido expuesto anteriormente, no se contaba con el documento físico en la municipalidad porque la empresa no ha enviado una copia. El alcalde provincial refiere que el plan de ordenamiento urbano se presentará en el mes de diciembre. La compañía minera mostró su información ante este hecho. Cabe resaltar que en esta reunión, un poblador hizo pública una grabación en la que supuestamente se escucha a personal de la compañía Volcán hostigar y amenazar al mencionado poblador para que éste le venda su propiedad. Se fijó una reunión para el día 14 de noviembre. Durante el mes de noviembre, mineros de la compañía Volcan anunciaron una huelga debido a que la empresa no cumple con retirar la denuncia interpuesta contra cuatro trabajadores de dicha empresa.

La labor de la comisión central se ha suspendido. El 19 de diciembre del 2006, se publicó la Ordenanza Municipal N° 057-2006-CM-HMPP, mediante la cual se dispone: 1. Incluir a la empresa Minera Volcan como agente participante (informando y opinando) en la elaboración del plan de Desarrollo urbano de Cerro de Pasco y el plan de Acondicionamiento territorial. Asimismo queda incorporada su propuesta de ampliación del Tajo abierto, 2. La empresa Minera asumirá el costo que ocasione la expansión de las áreas que se encuentren en la zona periférica y del pan "L" de agua, desagüe, pistas, veredas, parques, plazas y otros afines para ubicarlos en la otra zona de la ciudad. Para este efecto se firmará un acta, 3. Asimismo la empresa minera debe comprometerse a colaborar con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. 4. Hágase conocer a la dirección Regional de Minería del MEN a Volcán compañía S.A.A. autoridades y municipios distritales. Además, en disposición complementaria establece derogar todas las ordenanzas que se opongan a la presente. Esta ordenanza ha generado malestar en la población y otros actores; porque la MP de Pasco cambia de posición, ahora a favor de la empresa, además no ha contemplado nada sobre el resarcimiento de daños a la salud y propiedades, inclusive no se toma en consideración que el área que se pretende afectar ha sido declarada patrimonio histórico de la nación por el INC. Por ello, el 10 de enero del 2007, la nueva gestión edil en sesión de consejo ha dispuesto volver a organizar el comité central y derogar la ordenanza emitida, la cual será publicada el día 12 de enero. Asimismo se acordó una reunión del comité central con participación de la DP, para el día 25 de enero, en la cual se analizarán los informes de las sub comisiones.

El 25 de enero del 2007 se llevó a cabo una reunión de trabajo de la comisión central, en la cual se integró a los nuevos representantes de la comisión central (alcalde de Yanacancha, alcalde de Simón Bolívar). Se solicitaron informes de los avances de las subcomisiones: La sub comisión de vivienda no pudo exponer nada debido a que no contaba con representantes en la reunión, la sub comisión de salud informaron que se continúa con el plan integral de vigilancia de Quiulacocha y Champamarca. No se ha podido avanzar en el caso de Yanacancha debido a que el presupuesto recién fue asignado en el mes de febrero. Se hizo presente que la compañía Volcan se comprometió el 20 de diciembre del 2006 en coordinar un proyecto de investigación de determinación de plomo en la sangre en Chaupimarca y Paragsha, sin embargo no se ha cumplido. Además queda pendiente la realización de un estudio amplio de riesgo a la salud en Cerro de Pasco y se está incluyendo un análisis de suelo que se encuentran ocupando los pueblos jóvenes. Se solicitó además información sobre los avances de la sub comisión de expansión de tajo abierto, por lo que se programó una reunión para el 28 de febrero.

Últimos acontecimientos. Se tenía prevista una reunión del comité central el día 23 de marzo donde se daría cuenta de los avances alcanzados por las comisiones, sin embargo, la Municipalidad Provincial de Pasco suspendió la misma por falta de quórum. No se tiene fecha para la próxima reunión.

PIURA

17. Distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba

Actores. Rondas campesinas de Huancabamba y Jaén, radios locales, empresa minera Majaz, alcaldesa, Ananías Velásquez Torres por Somos Perú (20.71% de los votos) obtuvo cuatro regidores y uno es de Perú Posible, Diócesis de Chulucanas, Vicariato Apostólico de Jaén, MEM.

Hechos. En abril del 2004, organizaciones ronderas acusaron a la alcaldesa Distrital Ananías Velásquez Torres (Somos Perú) de colaborar con la compañía minera Majaz. El 7 de julio, miembros de la CC Segunda Cajas impidieron el tránsito de la carretera que conduce a Carmen de La Frontera, una de las vías de acceso al campamento de la minera. Los ronderos informaron que buscaban prevenir y controlar la tala indiscriminada y el transporte de madera, y contribuir a la lucha contra el abigeato. La población teme que el proyecto minero Río Branco, desarrollado por esta minera, genere impactos negativos en el medio ambiente. El 5 de mayo, autoridades regionales de Energía y Minas, autoridades locales y organizaciones campesinas acordaron la creación de un Comité Técnico para recoger información técnica especializada sobre la actividad minera en el sector. La Comisión concluyó que la actividad minera no afectaría el medio ambiente. Posteriormente, como parte del acuerdo, se conformaron mesas técnicas especializadas en

Desarrollo Social, Comunicaciones, Medio Ambiente. La minera expresó su disposición a dar participación a la población de los beneficios que obtenga de la explotación, además del pago de canon. El 6 de septiembre se conformaron tres Mesas Técnicas: Seguimiento al EIA, Desarrollo Sostenible y Comunicación, las cuales realizaron charlas informativas dirigidas a diferentes públicos involucrados en el tema minero. El 20 de diciembre, en presencia de Juez, Fiscal, Subprefecto, PNP y la Asamblea de rondas campesinas de Huancabamba se acordó sancionar a “cadena ronderil” al dueño de Radio Centinela, Dúber Mauriola Labán, acusándolo de reclutar campesinos pobres para apoyar a la empresa (y que habrían atacado en noviembre las instalaciones de Radio La Poderosa, del periodista Federico Ibáñez, la cual transmitía información favorable al medio ambiente y era tribuna de los opositores a la actividad minera). El locutor Mauriola fue capturado el 27 de diciembre y cumplió su sanción durante tres noches. El 28 de diciembre, el Obispo de Chulucanas solicitó la intervención de la DP. Ese mismo día, un grupo encabezado por dirigentes comunales favorables a la empresa minera, retuvieron por unas horas a la dirigente Josefa Ramírez en el local de Radio Centinela; luego de ser liberada, fue detenida con otras tres personas por la PNP bajo la acusación de secuestro. El día 29, el Prefecto convocó a una reunión en la que participaron representantes de la Subprefectura, PJ, MiP, MuP, PNP, Iglesia Católica, rondas, MCLCP y LA DP. En ella se conformó una comisión integrada por el Prefecto, el MiP y la DP que iría a la CC Huancacarpa a encontrarse con el locutor retenido. El viaje no se realizó porque la PNP informó, en la madrugada del 30 de diciembre, que esta persona regresaba a Huancabamba, a donde llegó a las 5:00 a.m. El 2 de febrero del 2005, la Segunda Sala Penal dispuso la libertad de Josefa Adrianzen y Federico Ibáñez, permaneciendo bajo comparecencia restringida. El día 4, ambos fueron puestos en libertad. El 24 de febrero, el 22 de marzo y el 15 de mayo se reunieron representantes de los actores involucrados para recibir informes de las mesas técnicas conformadas. En este proceso, la Mesa Técnica del Estudio de Impacto Ambiental acordó explicar los procedimientos de una concesión minera, elaborar un boletín informativo, realizar visitas al campamento minero previa coordinación con la empresa, formar grupos de monitoreo, aprobar el monitoreo participativo. Por su parte, la Mesa Técnica de Desarrollo Sostenible, la Diócesis de Chulucanas y el GR Piura se comprometieron a proporcionar información sobre instituciones que canalicen recursos de cooperación internacional. Finalmente, la Mesa Técnica de Comunicaciones acordó difundir los contenidos de las mesas técnicas en las escuelas de Huancabamba y a través de la radio, así como las conclusiones del Taller de Periodismo de Investigación, Ética y Desarrollo realizado el 30 de abril. El 19 de julio se realizó la octava reunión de la Mesa de Concertación del Proyecto Río Blanco. Allí se acordó: monitoreo del trabajo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos y de las Mesas Técnicas; conformación de un Comité de Gestión integrado por representantes de la Mesa de Concertación; demandar a las CC de Ayabaca y Huancabamba que se mantenga un clima de paz y diálogo en el proceso de elaboración del EIA del proyecto Río Blanco. En dicha reunión, el Asesor del Ministerio de Energía y Minas informó que las rondas campesinas de Yanta estaban organizando una movilización desde el Portachuelo de Yanta hacia el campamento de la minera Majaz. El 26 de julio, unos tres mil campesinos de la provincia de Ayabaca se reunieron en Yanta para iniciar la marcha. El día 27, el Viceministro de Minas anunció la formación de una comisión para dialogar con los campesinos movilizados. Los días 27 y 28 de julio, la PNP sobrevoló en helicóptero los territorios de las CC Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) para un reconocimiento del área. El día 29, un comisionado de la DP se desplazó a Huancabamba. El 1 de agosto se produjo un enfrentamiento entre ronderos y PNP, con un saldo de 32 personas detenidas (incluyendo a tres periodistas de Radio Cutivalú), cinco heridos (dos ronderos y tres policías) y una persona muerta. Representantes del MEM, minera Majaz, PNP, GR, DP y rondas campesinas acordaron conformar una comisión de diálogo, cuya primera reunión está programada para el 3 de agosto en la ciudad de San Ignacio. El 3 de agosto se reunieron representantes del MEM, minera Majaz, DP, el Obispo Turley, entre otros, en la parroquia de San Ignacio, acordando: a) conformar una comisión de ayuda humanitaria; b) conformar una comisión investigadora no jurisdiccional presidida por la DP para aclarar la situación jurídica de afectados e implicados; c) solicitar al MEM la derogatoria del D.S. N° 023-2003 que autoriza los trabajos de exploración minera en la zona; d) solicitar el retiro de efectivos PNP de la zona de Río Blanco. El día 4 se determinaron las zonas donde se encontrarían los supuestos afectados. El día 5, un representante de la DP se trasladó a las instalaciones de la empresa minera para recoger información sobre el enfrentamiento entre ronderos y PNP; la misma operación se realizó en el distrito Carmen de la Frontera, sin mayor resultado. El día 8, DIGESA Lima informó que todos los parámetros analizados se encontraban dentro de los límites establecidos en la Ley General de Aguas, desestimando la versión de la contaminación del río Quiroz. El día 18, las rondas campesinas de Segunda y Cajas, Quispampa y Santa Cruz Huamán realizaron una marcha pacífica demandando el retiro de la minera Majaz y la salida del Fiscal Provincial de Huancabamba. El 25 de agosto se reunieron representantes del MEM, GR Piura, PUC, MINAG, PNP, MEF, DP. El 9 de septiembre no se llevó a cabo la reunión programada por la Comisión Multisectorial entre los representantes del Ejecutivo y rondas campesinas. El mismo día, en la plaza de armas de Huancabamba se realizó una concentración, en la que participaron autoridades provinciales y de los distritos de Jaén, Namballe, El

Carmen de la Frontera. El día 14, el Primer Juzgado Mixto de Huancabamba abrió instrucción penal contra 23 dirigentes de las rondas campesinas que participaron en las protestas, y contra los alcaldes Provinciales de Ayabaca y Huancabamba por malversación de fondos. Los días 28 y 29, las rondas campesinas realizaron una movilización pacífica. El 19 de octubre, el juez provincial mixto de Huancabamba informó a la DP que los inculpados no colaboran en los procesos judiciales. El día 26, el Grupo Macroconsult presentó el informe referido al Impacto Económico Regional del proyecto minero Río Blanco. El 20 de diciembre, el juez Edwin Culquicóndor Bardales informó a la DP que el expediente está en revisión para dictar sentencia al final de este mes. En enero del 2006, el Juzgado Mixto de Huancabamba absolvió a los policías acusados de la muerte de una persona durante los enfrentamientos del 1 de agosto del 2005. El 24 de enero del 2006 se llevó a cabo una reunión sobre el Proyecto Río Blanco entre representantes del MEM, Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (Alcalde de Jaén, San Ignacio, Ayabaca, Regidor de Huancabamba) y rondas campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura), Jaén y San Ignacio (Cajamarca). También, estuvieron representantes de ONG, representantes de la Iglesia y el congresista Javier Diez Canseco. Se acordó: 1. Conformar una comisión de diálogo integrada por miembros del Frente de Desarrollo Sostenible por la Frontera Norte, representantes de los Ministerios de Energía y Minas, del Interior, Salud, Educación y Agricultura, además de miembros de la Iglesia, los mismos que participarán como invitados. 2. Se determinó un plazo de cinco meses para determinar la viabilidad del proyecto minero. Además se adelantó que en la próxima reunión, en febrero, girará en torno a la situación legal de la minera Majaz, entre otros temas. El 14 de febrero, la prensa local informa que se instala la comisión investigadora de las denuncias del caso Majaz. El día 20, el Coronel Antonino Lazarte Dextre solicita la intervención de la DP en el secuestro de seis comuneros por los ronderos de la comunidad campesina de Yanta. Los ronderos habían trabajado para la minera Majaz el mes de Noviembre. El día 21, la DP se comunica con el Coronel Lazarte, el cual informa que la PNP envió el día 20 a 60 efectivos, los cuales no pudieron ingresar a la comunidad de Yanta. Sin embargo, los comuneros han sido liberados. No se registran heridos. Actualmente la Fiscalía se encuentra investigando sobre el caso. En el mes de febrero, se conformó una comisión organizada por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, conformada por el MI, MEM, el Obispado de Chulucanas y de la CNDH para que recogiera testimonios que ilustren la violencia suscitada en las provincias de Huancabamba y Ayabaca. La DP ha realizado viajes para recoger estos testimonios, el día 15 de mayo a Huancabamba (Cajas Canchaque, Comenderos Bajo, Rosarios Bajos y Huancabamba) y el día 19 a Ayabaca (Portachuelo de Yanta). El 16 de junio se llevó a cabo el Foro: "Piura: Desarrollo Sostenible y Minería" organizado por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, en el que se trataron temas concernientes a minería y desarrollo sostenible, propuesta de desarrollo para Piura, protección del medio ambiente y la biodiversidad, la organización de la población en defensa de la vida y el medio ambiente, consentimiento previo, libre e informado, ilegalidad de la presencia minera Majaz en Huancabamba y Ayabaca, derechos humanos y comunidades campesinas. Se le solicitó a la DP: 1. Un informe sobre ilegalidad del ingreso de la mina en las Provincias de Ayabaca y Huancabamba. 2. Un informe sobre los hechos de violencia ocurridos en las Provincias de Ayabaca y Huancabamba tras la desintegración de la Comisión. 3. Las propuestas hechas por Representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible. 4. La realización de una consulta popular sobre la actividad minera en las Provincias de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio. 5. El envío de un memorial al alcalde de la MP de Huancabamba para invocar su participación en el tema. 6. Evaluar la posibilidad de llevar a la Corte Interamericana el caso de la muerte del rondero Reemberto Herrera Racho. El 10 de julio en la DP se reunieron 18 comuneros de Yanta que habían laborado en el Proyecto Minero Río Blanco, quienes manifestaron una serie de atropellos y abusos cometidos contra ellos por los miembros de las directivas comunales de rondas de la CC Yanta. Se les explicó las competencias de la DP y se aseguró que a más tardar el día 17 de julio se iría a la CC para verificar el trámite de las denuncias presentadas ante la Comisaría de Ayabaca y para sostener una reunión con los dirigentes de la CC. Por otro lado, en Huancabamba la DP se entrevistó con el Juez Mixto de Huancabamba para conocer los avances de los procesos judiciales seguidos en torno a los hechos de violencia ocurridos. Se encontró que aún se siguen recogiendo las inestructivas de los inculpados y se obtuvo copia del expediente originado por la muerte del rondero Melanio García. El día 17 en Ayabaca, en el local de la Parroquia, la DP se reunió con dirigentes de la CC de Yanta y ronderos campesinos (Senecio Jiménez Peña, Presidente de la Administración de la CC de Yanta, Bernabé Chanta Jiménez, Secretario de Medio Ambiente del Frente de Defensa y Miguel Arriola Ruiz, teniente gobernador del caserío San Sebastián. Se acordó que transmitirían a la asamblea de comuneros la preocupación de la DP por el trato recibido por los comuneros de Yanta que han laborado en la empresa minera y la necesidad de llevar a cabo una reunión con los miembros de la asamblea en el mes de agosto para tratar el tema relacionado con derechos y deberes de los comuneros. Además, se comprometieron en entregar una copia de los documentos que acrediten la institucionalidad de la CC de Yanta. Durante el mes de noviembre se produjo un enfrentamiento entre comuneros del caserío Hormigueros y vigilantes de la minera, lo cual dejó como saldo un herido. El 20 de noviembre la DP remitió a la Vice Ministra de Minas el

Informe 001-2006-ASPMA-MA. El 26 de noviembre, la CC decide poner una tranquera en Cajas Shapaya (Huancabamba). El día 29, en vista de esta decisión de la Comunidad, la empresa minera, suscribe un acta de reunión en que se compromete a traer una Comisión de Alto Nivel para consolidar una Mesa de Diálogo, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días. El 5 de diciembre, la empresa minera Majaz, solicitó a la DP, asistir a una reunión en la ciudad de Huancabamba el 7 de diciembre, la cual contaría con la presencia de las organizaciones sociales de base y de la sociedad civil de la zona, MEM, Ministerio de Agricultura, CONAM e INDEPA. Reunió que se frustró por la inasistencia de las reparticiones estatales invitadas. El 13 de diciembre, la empresa minera Majaz, solicitó a la DP acudir a una reunión en la ciudad de Huancabamba el 18 de diciembre, dicha reunión había sido solicitada por la comunidad local y coordinada con el MEM y contaría con la presencia de las organizaciones sociales de base y la sociedad civil de la zona. Así, el 18 de diciembre se asistió a la reunión, sin embargo los representantes de los comuneros se negaron a participar, en el entendido que la Minera Majaz no había cumplido con el compromiso de traer una Comisión de Alto Nivel de Lima (Incluyen a funcionarios del Ministerio) y por la extemporaneidad de la reunión (fuera del plazo de compromiso). La Dp conversó con algunos representantes de la comunidad indicándoles que no es posible la restricción de la libertad de tránsito en Cajas Shapaya. Las comunidades no quieren mantener diálogo con la empresa minera quien habría ingresado a sus territorios ilegalmente.

El 17 de enero de 2007, la DP se reunió con la Vice Ministra a propósito del Informe Defensorial presentado en el mes de noviembre de 2006. El 22 de enero, se publicó un pronunciamiento de empresa minera Majaz en el cual afirman los permisos obtenidos por su predecesora (Minera Coripacha) serían válidos y sustentan sus actividades de exploración en la zona. Para sustentar ello, se basan en la emisión de un Informe de Asesoría Legal del MEM. Esto ha causado desinformación en la ciudadanía, situación que no contribuye al clima de conflicto latente en la zona. El 15 de febrero un promedio de 60 comuneros y ronderos de la comunidad de Segunda y Cajas se reunieron para protestar en la inauguración de la Institución Educativa 14413 "Señor cautivo", el cual ha sido construido por la minera Majaz. El 17 de febrero se reunió el Frente por la frontera norte para contemplar el caso de la explotación minera que se pretende realizar en Rio Blanco. Participaron Carlos Martínez, el presidente del Frente, los alcaldes de Carmen de la Frontera, el teniente alcalde de Huancabamba, el presidente de Segunda y Cajas y el delegado de la comunidad de Yanta. El Frente mostró su disconformidad por la falta de diálogo existente sobre el tema y anunciaron el inicio de una consulta ciudadana sobre el tema.

Últimos acontecimientos. El proceso de consulta ciudadana viene siendo impulsado por varios gobiernos locales, entre las que están las Municipalidades provinciales de Ayabaca y Huancabamba, ambas de Piura, y la Municipalidad Provincial de San Ignacio, de Cajamarca. Por otro lado, la población de Yanta mostró su preocupación por el traslado de un destacamento del Ejército a esa localidad, considerando que la incursión militar pretende reprimir la oposición a la presencia de la empresa Minera Majaz, aunque las autoridades militares negaron el hecho señalando que el traslado se realizaba para el reconocimiento de hitos.

PUNO

18. Distrito de Arapa, provincia de Azángaro

Actores: alcalde Jorge Roselló Calapuja (Lista Independiente por el Desarrollo Comunal de Arapa, 24.39%, con cuatro regidores y uno del Movimiento Independiente Unidad y Trabajo); Comité de Lucha, presidente: Simón Quispe Torres, Frente de Defensa por la Paz con Desarrollo de Arapa, presidente: Sebastián Quispe Mamani; Gobernador, Enrique Arratia Quispe; Centro de Desarrollo Humano, David Danz; Párroco del distrito, Marcos Degen; Contraloría General de la República; Jurado Nacional de Elecciones.

Antecedentes: En marzo del 2005, la población exigió al alcalde que se presentara en asamblea popular y allí se comprometiera a la realización de un cabildo abierto, en el cual realizaría su rendición de cuentas (no había rendido cuentas en dos años). Dos semanas después se convocó a esta reunión pública. El alcalde llevó a algunos pobladores y otras personas desconocidas que le sirvieron como respaldo. La rendición de cuentas expuesta por el alcalde no satisfizo las dudas de los pobladores.

Meses después se conformó el Comité de Lucha que, junto al Frente por la Paz con Desarrollo de Arapa y otras organizaciones, convocó a una asamblea popular el 22 de marzo de 2006. En ella, el alcalde, por temor a una toma del local municipal, pidió la presencia de un importante contingente policial y también la del Fiscal Provincial. Los dirigentes informaron sobre malos manejos de la administración edilicia de Arapa (la ejecución de sólo el 40% de la electrificación con respecto a expediente técnico aprobado, obras no realizadas, pero informadas como ejecutadas dentro del presupuesto de los tres años anteriores, etc.). Se realizó una marcha pacífica.

Hechos: El 29 de marzo de 2006, el alcalde convocó a una nueva asamblea con la finalidad de responder las denuncias vertidas en la asamblea anterior. En esta ocasión, una vez más, el alcalde llevó a pobladores de su comunidad para que lo respaldaran.

Adicionalmente, pidió la presencia de periodistas de Juliaca. En el curso de la asamblea, los pobladores de Arapa reaccionaron ante algunas afirmaciones del alcalde, quien no respondió directamente a las acusaciones hechas la asamblea anterior, sino que más bien hizo declaraciones que provocaron a la población. En la reunión existía el compromiso de sostener un diálogo abierto. Sin embargo, el alcalde no dio la palabra a las personas que lo solicitaban y dio por terminada la asamblea de manera arbitraria, retirándose inmediatamente hacia el local municipal junto a periodistas. Esa actitud enardeció a los pobladores, quienes se congregaron en las puertas del local municipal, originándose forcejeos entre los pobladores que había llevado el alcalde y los pobladores que en ese momento afirmaban sus intenciones de tomar el local. Se realizó una manifestación por las calles del distrito, que poco después retornó a las puertas del local municipal. Se originó, así, una trifulca en la que resultó herida una de las pobladoras. Luego, los manifestantes se apostaron en las afueras del local municipal, impidiendo la salida del alcalde y los periodistas. Aproximadamente a las 10 de la noche llegó un contingente policial de Azángaro. En la plaza pública se realizó una negociación con los dirigentes, quienes, luego de firmar un acta, procedieron a lacrar las puertas del municipio, así como de los almacenes (puertas soldadas). El alcalde y los periodistas se retiraron con la policía hacia Azángaro. Los dirigentes exigieron la intervención de la CGR. El día 30 de marzo, la DP, recogiendo la demanda de la población de interceder ante la CGR, se hizo presente en la Oficina Regional de esa entidad. Sin embargo, los miembros del Comité de Lucha ya se habían presentado ante la CGR en Lima 10 días antes. Cuando la DP se acercó a la oficina regional de la CGR, se indicó que ya tenía conocimiento de la denuncia hecha en Lima, pero que dicho trabajo de auditoría requería que el municipio recobrase su actividad normal. Los días 11 y 18 de abril se convocó a reuniones en Azángaro y Arapa. Sin embargo, el alcalde no se presentó. El día 20 se movilizaron alrededor de 1,500 pobladores de Arapa a la ciudad de Puno para protestar contra el alcalde. Se produjeron algunos disturbios enfrente de la casa del alcalde. El 21, en la subprefectura de Juliaca se realizó una reunión, en la cual el alcalde se comprometió a presentar su solicitud de licencia por 30 días durante la sesión de Concejo que se realizaría el 27 de abril. El día 27, el alcalde designó al regidor Santiago Ayamamani Calapuja como encargado de la municipalidad. Ese día se reabrió el local municipal en presencia del Ministerio Público, el Prefecto Regional, un representante del GR y de la PNP. La CGR solicitó la información necesaria, pero no se encontró dentro del local. Entonces, el alcalde denunció a los dirigentes por la presunta sustracción de los documentos (su referencia es el acta levantada por la fiscal en la reapertura del local, en la cual se verificó que en la oficina de tesorería se encontraba abierta una ventana y se encontraba roto el candado de uno de los muebles). El alcalde ha denunciado a 18 dirigentes por los siguientes delitos: Robo Agravado, Usurpación de funciones y Hurto calificado, Lesiones graves y otros, Contra la tranquilidad pública, Daño y peligro para las personas, Contra el patrimonio y coacción, Apropiación ilícita y otros, Disturbios daños simples y coacción y Agresión física. El 30 de mayo, el Gerente Zonal Sur de la CGR, Hugo Saldarriaga Ortiz, puso en conocimiento la suspensión del examen especial a la MD Arapa por las siguientes razones: 1. La MD no se encuentra en funcionamiento, 2. Las oficinas internas de las respectivas unidades orgánicas se encuentran lacradas, 3. No se encontró la información requerida por la Comisión de Auditoría y 4. No existen garantías suficientes para los funcionarios de la municipalidad ni para los auditores. El 20 de junio, los cinco regidores de Arapa presentaron sus solicitudes de licencia al alcalde señalando problemas de salud y familiares. El 21 se realizó un paro para exigir solución al problema, la entrega de la documentación que requiere la CGR, y se anunció una movilización hacia Azángaro el día 27. El 7 de julio, el JNE constató en Arapa el funcionamiento actual de la MD. Se reunieron con alrededor de 200 pobladores que se quejaron de la gestión del alcalde. El JNE no se pronunció sobre el caso. Actualmente no hay atención en el MD, salvo Registro Civil. El alcalde no se ha vuelto a asumir su cargo por falta de garantías. La DP está investigando la denuncia contra los dirigentes de Arapa en la Fiscalía Provincial de Azángaro, la cual ha sido derivada a la PNP. El 24 de julio, el alcalde intentó retomar sus funciones y volvió a la comunidad de Apise en un camión en el que trasladaba postes de electrificación. Se produjo un enfrentamiento, no se registraron heridos. El alcalde escapó. El 25 se produjo un enfrentamiento entre los pobladores y el alcalde en Esquinapata (comunidad perteneciente a Arapa). Resultaron heridas 11 personas y se quemó el local comunal (desde donde presuntamente atendía el alcalde). Se levantó un acta exhortando a los pobladores a evitar enfrentamientos. El 26, el alcalde, personal de la fiscalía de Azángaro y la PNP realizaron la constatación en el CC de Esquinapata. El 27, los dirigentes de Arapa presentaron la solicitud de vacancia al JNE en Lima por ausencia injustificada del alcalde y regidores desde el mes de marzo del 2006. El 8 de agosto, la población emitió un "Reglamento de Autogobierno", el cual fue enviado al Presidente de la República, solicitándole una solución al conflicto. La situación continuó tensa y a la espera de la resolución del JNE. El 6 de septiembre, un grupo de aproximadamente 30 pobladores de Arapa realizó una protesta enfrente del local del JNE en Lima. Apoyaban la gestión del alcalde y manifestaron que estaba haciendo una obra de electrificación. El día 12, pobladores de CP Kurayllo retuvieron por algunas horas a 11 personas de la facción opositora del alcalde (entre ellos Simón Quispe, dos jueces de paz y un efectivo policial). Se presumía que iba a inaugurar dos aulas en Kurayllo. Esta retención se hizo porque los pobladores

presumieron un enfrentamiento violento, para liberarlos fue necesaria la intervención del representante del Ministerio Público y efectivos policiales. Se firmó un acta para comprometer al grupo opositor a no seguir exigiendo la vacancia del alcalde. Además les exigieron que el 21 de septiembre informasen sobre las acciones que tomarían sobre ello. Por la tarde, la Fiscal Adjunta de Azángaro, el Comandante PNP y un grupo de efectivos policiales verificaron los hechos. No se registraron actos de violencia ni agresiones físicas; tampoco se recibieron denuncias. El comisario expresó su preocupación por la reacción de los miembros del Comité de Lucha. El JNE publicó un edicto el 14 de septiembre en el diario local "Correo", en el que se concedieron siete días hábiles para que los regidores presentasen su escrito de contestación a la petición de vacancia (descargos). Además solicitó a la CGR un informe detallado respecto a algún proceso investigador del manejo económico de la municipalidad y solicitó el descargo del alcalde ante el pedido de vacancia. Tendrá siete días hábiles para presentarlo (el plazo venció el 11 de septiembre). El 12 de diciembre el JNE convoca a la vista de causa para tratar la vacancia del alcalde Jorge Rosselló, sin embargo no emitió ningún pronunciamiento al respecto. El 22 de diciembre, tres sujetos desconocidos ingresaron al domicilio del Párroco del distrito (acusado por el alcalde de ser el autor intelectual de la protesta del pueblo de Arapa). Los dirigentes y pobladores expresaron su preocupación debido a que consideran que se podría intentar un atentado contra la vida del sacerdote. Los presuntos delincuentes no llegaron a cometer acto alguno, ya que fueron sorprendidos por los trabajadores de la parroquia quienes fueron agredidos por los sujetos, logrando escapar en un vehículo con dirección a Juliaca. El 17 de enero de 2007 se reunieron en Arapa los presidentes de los comités de electrificación del distrito de Arapa (alrededor de 54 comunidades) para protestar contra la obra de electrificación inaugurada en el mes de diciembre por el alcalde Jorge Roselló Callapuja en la comunidad de Esquinapata, ya que a los tres días de inaugurada la obra se han producido desperfectos (voladura de aproximadamente 15 pararrayos) que han dejado sin electricidad a varias comunidades. Los pobladores han tomado la camioneta de Electro Puno y han intentado retener a un funcionario, se han declarado en rebeldía y desconocen la actual autoridad del Estado, solicitan además que se forme una comisión de alto nivel para tratar los siguientes temas: 1. Exigir una resolución del JNE ante el pedido de vacancia del ex alcalde. 2. Problemas de corrupción del ex alcalde, los cuales han sido denunciados ante el PJ. 3. Denuncias hechas, por el ex alcalde, en el PJ contra los dirigentes del Comité de Lucha de Arapa. 4. Transferencia de cargo con dificultades. 5. Problemas con la obra de electrificación. 6. Devolución del dinero cobrado por Electro Puno a los comités por derecho de instalación (alrededor de 15,000 nuevos soles).

A pesar que Arapa cuenta con nueva autoridad, quedan temas pendientes como el pronunciamiento por parte del JNE sobre la vacancia del ex alcalde, así como la intervención de la CGR sobre la gestión municipal cuestionada. Además las denuncias en proceso de investigación tanto contra el ex alcalde como contra los dirigentes. Los pobladores consideran que su lucha por el momento no tiene los resultados esperados por la inacción del JNE, MP y CGR y amenazan en declararse en rebeldía contra toda autoridad del Estado con la finalidad que el Gobierno nombre una Comisión de Alto Nivel que de solución a los problemas del distrito reclamados desde hace mucho tiempo.

El proceso de transferencia en el distrito de Arapa no se ha realizado debidamente, salvo aquellos bienes patrimoniales y la oficina de Registro Civil. El ex alcalde solicitó que la transferencia se realizara en la CC de Esquinapata pero no fue aceptada por el alcalde entrante, Cesar Torres Rosselló.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

19. Distrito de San Gabán, provincia de Carabaya

Actores.

Hechos. El día de las elecciones Regionales y Municipales 2006, un grupo de pobladores de San Gabán, destruyeron el material electoral alegando que hubo fraude. Se enteraron que en 4 de las 8 mesas iba ganado el alcalde Adolfo Huamantica Huamantica que postuló a la reelección por el Partido Político "Fuerza Nacional", hecho que habría ocurrido a las 5:00 p.m. En el local de votación se encontraban 8 miembros del Ejército y 4 de la PNP, el personal de la ONPE y JNE se refugiaron, en el Centro de Acopio. Los pobladores quemaron el material electoral en el patio del local de votación. A las 10:00 p.m. llegó la Fiscal Provincial de Carabaya, Dra. María Meyra con 25 efectivos policiales, a quién le entregaron 4 actas, y ésta a su vez la entregó al primer miembro del JEE Azángaro, quién a su vez lo remitió a la ODPE Azángaro. Un Fiscalizador del JNE realizó una investigación sobre la presunta existencia de 250 votantes golondrinos, quién al constituirse al lugar habría determinado la existencia de aproximadamente 100 electores golondrinos. Ese informe fue enviado a Lima, pero se desconocen los resultados. Se tomó conocimiento que el Alcalde reeleccionista hizo cambiar domicilio a sus trabajadores, para que sufraguen en San Gabán. Los pobladores del distrito de San Gabán solicitan la nulidad de las elecciones y han anunciado un paro general indefinido en el distrito a partir del 22 de enero del 2007. Han amenazado bloquear la Carretera Interoceánica así como soldar los puentes Langacuni y San Juan, cortando el acceso a Mazuco y Madre de Dios. También existe la amenaza de tomar la Hidroeléctrica de San Gabán.

Por información de trabajadores del municipio de San Gabán, el alcalde Huamantica se encontraría en la ciudad de Lima, y se encuentra realizando sus actividades municipales en el Centro Poblado de Lechemayo y que por seguridad muchos pobladores simpatizantes del actual alcalde se habrían retirado a sus chacras por haber sufrido agresión personal y material a sus domicilios en San Gabán por parte de los quejosos.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes

20. Distrito de Usicayos, provincia de Carabaya

Actores. Williams Sotomayor Guerra (Partido Aprista Peruano), Jesús Gonzales Leque (Partido Nacionalista)

Hechos. Luego del cómputo de los resultados de las elecciones regionales y municipales del distrito de Usicayos, un grupo de pobladores expresó su disconformidad, refiriendo que hubo alteración de los resultados por parte de la ONPE, realizaron actos de protesta en Usicayos. No hubo destrucción de material electoral. Los pobladores no están de acuerdo con la elección del burgomaestre proclamado (del Partido Aprista Peruano) y aseguran que el legítimo ganador es otro candidato (del Partido Nacionalista). El 26 de noviembre se formó una Comisión encargada de solicitar la nulidad de las elecciones y la convocatoria a elecciones complementarias. El día 30 de noviembre se trasladaron a Azángaro el para exigir ante el JEE la nulidad de las elecciones, la cual fue declarada improcedente. Además solicitaron un recurso de nulidad que fue declarado procedente como trámite de solicitud pero infundado en la petición de nulidad por el JNE (Resolución N°4624-2006-JNE).

El 10 de enero del 2007 la DP tomó conocimiento de que la municipalidad se encontraba tomada por un grupo de 10 a 15 personas y que el alcalde buscaba el diálogo con los pobladores. No se registraron actos de violencia. El 12 de enero un grupo de pobladores solicitó, en Lima, la intervención de una comisión de alto nivel para la resolución del conflicto. Para el día 15 de enero la municipalidad seguía tomada, de los cuatro canales de TV, solo 1 funciona. El 26 de enero la DP visitó la zona para explicar las posibilidades de reclamo de los pobladores y los efectos de sus posibles medidas de lucha. El 8 de febrero se llevó a cabo una reunión de autoridades y pobladores de Usicayos, cuyo objetivo era consultar a 289 pobladores del distrito acerca de la apertura del local municipal y de la asunción del cargo por parte del alcalde. Se realizó una votación a mano alzada, cuyos resultados fueron 233 pobladores a favor y 56 en contra. Ese mismo día el fiscal, el alcalde, la PNP y otras autoridades se encontraban haciendo el inventario de los bienes del municipio. El alcalde se habría comprometido a retirar las denuncias presentadas contra algunos dirigentes. Existen, por otro lado, denuncias presentadas por los dirigentes por presunto fraude.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

SAN MARTIN

21. Distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres

Actores. Alcalde de la municipalidad distrital de Campanilla, Humberto Puelles Olivera; Agrupación Política Nueva Amazonía; Comité de Defensa de los intereses de Campanilla; pobladores del distrito; dirigentes cocaleros; rondas campesinas y PNP.

Hechos. El 19 de octubre del 2006, durante las elecciones, la Agrupación Política Nueva Amazonía y simpatizantes de otras agrupaciones políticas sustrajeron y quemaron las actas de votación de la Institución Educativa Luisa Aliaga Gonzales. El 29 de diciembre la DP tomó conocimiento que un grupo de pobladores del Distrito de Campanilla, provincia Mariscal Cáceres de la Región San Martín tomaron la parte externa de la Municipalidad Distrital de dicha localidad para no dejar ingresar al alcalde. Los pobladores, organizados a través de un Comité de Defensa de los Intereses de Campanilla, están solicitando la nulidad de las elecciones municipales ya que consideran que el reelecto alcalde no ganó las elecciones de manera transparente. El 12 de enero del 2007 los pobladores denunciaron ante la Fiscalía Provincial Mixta de Mariscal Cáceres y CGR al alcalde, sin embargo no pudo darse la intervención debido a la falta de pruebas. El 2 de febrero el alcalde fue al distrito, en donde fue agredido, por lo cual tuvo que permanecer en su domicilio durante aproximadamente una semana. Luego, empezó a despachar desde Juanjuí. El 12 de febrero se solicitó el incremento del resguardo policial en la zona y el restablecimiento del principio de autoridad.

Últimos acontecimientos. El 8 de marzo se realizó un enfrentamiento entre los simpatizantes y los opositores del alcalde distrital de Campanilla, el cual tuvo como resultado un fallecido y un herido (con pérdida del ojo izquierdo y lesiones en tronco y cabeza). El 12 de marzo la DP entrevistó al abogado del Frente de Defensa de Campanilla quien informó que la población estaba considerando tomar la carretera para solicitar se atienda su pedido de intervención de la CGR. El 22 de marzo el abogado de Frente de Defensa comunica a la DP que se ha acordado una mesa de diálogo el 24 de marzo en la iglesia matriz de Campanilla. El 24 de marzo se llevó a cabo la mesa de diálogo en la que se acordó lo siguiente: 1. Reinicio de las labores en la municipalidad desde el día 28. 2. La Oficina de Control Interno del GR realizará una

auditoría del periodo 2003-2006. 3. El reinicio de las labores será supervisado por el Fiscal de Juanjuí. 4. El alcalde se compromete a informar sobre las actividades realizadas en enero y marzo del 2007. 5. No se tocarán los documentos de la municipalidad hasta la llegada de la entidad controladora. 6. Se formó un comité de fiscalización que supervisará las actividades de la municipalidad desde el miércoles.

TACNA

22. La Yarada, Provincia de Tacna

Actores. Federación Agropecuaria e Industrial “Fronteras Vivas del Sur” (FEAGROSUR), Presidente: Policarpo Catacora López, Vicepresidente: Teófilo Tejada Manzilla. Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna, Administrador Técnico: Amílcar Celso Ticona Gutiérrez.

Antecedentes. Desde hace aproximadamente 20 años, un grupo de agricultores, posesionarios de terrenos ubicados en La Yarada, sin licencias, viene explotando aguas subterráneas de pozos informales. La Administración Técnica del Distrito de Riego de Tacna ha establecido en total que 152 pozos (al 6 de noviembre del 2005: 95 pozos, al 7 de noviembre del 2005: 42 pozos más y en lo que va del año 2006: 15 pozos más). El 7 de noviembre del 2005, el Ingeniero Evert Castro y Céspedes sufrió una agresión física de parte de un sector de estos agricultores cuando cumplía con el sellado de pozos.

Hechos. El 18 de octubre del 2006 se produjo un enfrentamiento entre unos 200 agricultores y los efectivos de la PNP. Se quemó maquinaria del PETT (pala mecánica). No se registraron heridos ni detenidos. Este enfrentamiento se produjo cuando las autoridades responsables del manejo de aguas (Dirección Regional de Agricultura y Administración Técnica del Distrito de Riego de Tacna), contando con la presencia del MP y de la PNP, se encontraban sellando dos pozos en el sector conocido como Rancho Grande. Ante ello, la DP convocó a reuniones con los dirigentes de esta organización campesina, con el Administrador Técnico de Distrito de Riego y con los abogados de esa instancia administrativa. El mes de diciembre se propuso que el GR de Tacna y al Proyecto Especial Tacna sean las instituciones a cargo del conflicto (mediante D.S. 065-2006). Estas entidades mantienen su posición de continuar con el sellado de pozos. La población se mantiene a la espera de otras decisiones al respecto.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

23. Comunidad de Vilavani, distrito de Palca, provincia de Tacna

Actores. Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna (Presidenta: Ing. Nora Melchor Cohaila). Empresa minera MINSUR.

Antecedentes. La empresa minera MINSUR ha venido efectuando labores de exploración en la comunidad de Vilavilani, distrito de Palca, provincia de Tacna, las cuales han concluido. La empresa tiene intención de explotación y cumpliendo con la R.M. 596-2002-EM/DM que aprueba el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de aprobación de los Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas, se convocó durante el presente año a los talleres de consulta previa.

Hechos. A través de medios radiales comenzaron a aparecer a fines del mes de agosto declaraciones de ciudadanos que manifestaban estar en contra de las empresas mineras pues consideran que traerían problemas de contaminación. El 5 de septiembre del 2006 se difundió la creación del Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de la Región Tacna, quienes estarían alerta contra todo tipo de contaminación. Se encuentran promoviendo reuniones y convocando a la ciudadanía para que se unan a su reclamo. Han llevado a cabo una marcha de protesta por la ciudad el día 22 de septiembre. Las audiencias públicas establecidas por ley (donde se presentará el Estudio de Impacto Ambiental) fueron fijadas inicialmente por la empresa MINSUR para los días 22, 23 y 24 de septiembre pero han sido pospuestas para fecha aún no determinada. El 25 de septiembre, el Frente de Defensa presentó un memorial dirigido a diversas autoridades, entre ellos a la DP. Se tuvo una reunión, en la que se estableció que la DP tramitaría como pedido de intervención dos aspectos: 1. Refieren que se pretendería que la audiencia pública se lleve a cabo en Lima y no en la ciudad de Tacna y 2. Que durante las audiencias públicas se les dé más tiempo de intervención a los participantes. La fecha que se señaló para la Audiencia Pública es el 5 de enero del 2007. Ese día el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna convocó a un paro regional. La Audiencia Pública se suspendió porque no había garantías para su desarrollo debido a las movilizaciones, en las cuales participaron los alcaldes distritales de Alto de La Alianza, Ciudad Nueva, Calana, así como la Junta de Usuarios de Magollo, Asociación de Comerciantes de la Zona Franca, y el denominado Frente de Defensa. A las cinco de la tarde, hora señalada para el inicio de la Audiencia, un grupo aproximado de 150 personas se apostaron en la puerta del Auditorio para impedir que se lleve a cabo. Además el Presidente del GR dispuso no abrir las puertas del Auditorio donde estaba programada la audiencia.

Últimos acontecimientos. Se llevó a cabo una audiencia regional el 24 de febrero para tratar el proyecto de Minsur y la posible afectación del recurso hídrico de Palca, con participación del Gobierno regional y las

principales autoridades locales. Por otro lado, el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente solicitó a la DP interceder para que se lleve a cabo una audiencia ambiental en la ciudad de Tacna. Consultada la autoridad regional de minería señaló que no hay comunicación de la empresa minera sobre la audiencia e indicó que la misma debía ser convocada con 40 días de anticipación a su realización.

ANCASH**24. Distrito de Jangas, provincia de Huaraz**

Actores. Minera Barrick Misquichilca S.A., SUNAT, Comité de Lucha.

Hechos. En el año 2003, la Minera Barrick Misquichilca S.A. interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal contra las Resoluciones de Intendencia N° 0150140000157, emitidas por la SUNAT –que declara fundado en parte el reclamo contra las Resoluciones de Determinación N° 012-03-0002334, 012-03-0002335 y 012-02-0007442– y las Resoluciones de Intendencia N° 012-4-10574/SUNAT y 012-4-10576/SUNAT sobre el pago de impuesto a la renta. El 21 de septiembre del 2004, mediante Resolución N° 07112-1-2004, el Tribunal Fiscal declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la Minera Barrick S.A, resolución que no fue apelada por la SUNAT por no contar con autorización del MEF. El alcalde Provincial de Huaraz y representantes de algunas organizaciones sociales, reunido en el Comité Regional de Lucha 7 de marzo, expresaron su disconformidad con este fallo, criticaron la no autorización del MEF y la opinión a favor de la minera del Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero del MEF. Por ello, conformaron un Comité de Lucha Regional presidido por el alcalde Provincial, quien ha convocado un paro provincial el siete de marzo (amenazan con tomar las instalaciones de la mina Pierina), con la siguiente plataforma de lucha: crear un Fondo con los US\$ 290 millones dejados de pagar a la SUNAT que sirva de contrapartida para obras de impacto ambiental; realizar una auditoría ambiental externa de tercer nivel a ambas compañías mineras, con participación del Colegio de Ingenieros y UNASAM; sanción a funcionarios de la SUNAT, Tribunal Fiscal, Ministro de Economía y congresistas de Ancash; e inversión en la región del 50% de utilidades de la compañía Antamina. El 22 de febrero, en reunión convocada por el Prefecto, representantes de entidades públicas (MD, GR, DP), minera Antamina y sociedad civil acordaron conformar una Comisión de Acercamiento a las partes en conflicto, la cual quedó integrada por la DP, la Prefectura y CODISPAS (posteriormente se incorporó un representante del GR). Esta Comisión se reunió el día 23 con el Comité de Lucha. Aunque no estuvo presente el alcalde Provincial, esta organización manifestó su acuerdo con el diálogo en las siguientes condiciones: con altos directivos de las mineras, en base a la Plataforma de Lucha presentada, y en la Plaza de Armas de Huaraz (posteriormente, el alcalde señaló que sólo dialogarían después del paro). El 1 de marzo, la Comisión se reunió con representantes de las mineras, quienes señalaron su disposición a un diálogo sin condicionamientos, y en el que no se discuta la decisión del Tribunal Fiscal. La DP exhortó al MiP y la PNP a actuar según sus competencias para prevenir acciones violentas durante el paro. El Prefecto solicitó refuerzos policiales. La DP invocó al Comité de Lucha a realizar una protesta pacífica e informó que supervisaría la actuación de las fuerzas del orden para evitar que vulnerasen derechos de los manifestantes. El paro se realizó los días 7, 8 y 9 de marzo en la ciudad de Huaraz. Los pobladores bloquearon las carreteras de acceso a la ciudad y las actividades comerciales paralizaron. El día 9, la Comisión de Acercamiento se reunió con las partes, las cuales manifestaron su disposición a establecer una Mesa de Diálogo; también acordaron solicitar a Monseñor Eduardo Velásquez Tarazona, Obispo de Huaraz, que actuase como moderador. El día 11, en una nueva reunión realizada en ausencia del Obispo, los representantes del Comité de Lucha y de las mineras acordaron: aceptar las condiciones propuestas por el Obispo (conformar un equipo técnico de apoyo, otorgarle un plazo prudencial para informarse del tema, mantener el clima de paz). Se programaron reuniones sucesivas entre el Obispo y las empresas Barrick (miércoles 16) y Antamina (jueves 17) para escuchar las propuestas de las empresas e iniciar el diseño de una agenda de trabajo. Luego del diálogo, la empresa Barrick ofreció la construcción del Centro Materno Infantil de Huaraz. Por su parte, la población espera una nueva resolución del Tribunal Fiscal que dé solución al conflicto. El 14 de julio, el Comité de Lucha realizó una movilización en Huaraz con poco impacto.

Dentro de las negociaciones que se efectuaron por intermediación del Comité de acercamiento se llegó a dos acuerdos básicos entre pobladores y la Minera Barrick: 1) la construcción de un mercado en la ciudad de Huaraz y 2) la construcción de un centro materno infantil. Actualmente, esta última obra podría realizarse, gracias a la gestión por parte de los funcionarios del Hospital Víctor Ramos Guardia para obtener el espacio físico para la construcción del centro dentro del Hospital. Sin embargo, el equipo y el personal del hospital se encuentran todavía a la espera de la elaboración del expediente técnico para ello. En el caso del mercado, esta construcción se ha paralizado por incompatibilidades entre las asociaciones de comerciantes y el alcalde.

Por otra parte, respecto a las apelaciones al fallo del Tribunal Fiscal, el 14 de marzo del mismo año, el congresista Luis Heysen Zegarra interpuso una acción de Amparo ante el Primer Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Ancash, contra la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07114-1-2004, Expediente N° 4675-2003. En este recurso de Amparo, la demandante solicita “declarar inaplicable, nula y sin efectos la

Resolución del Tribunal Fiscal N° 07114-1-2004”, reponiendo las cosas al estado anterior a la misma: el pago de tributos de la Minera Barrick Misquichilca S. A. (antes Acuarios Minera y Exploradora), derivados desde su exploración desde 1996 en Ancash; la percepción del Canon Minero por los gobiernos locales; la eventual devolución de pago de tributos a la Minera Barrick Misquichilca S. A. por aplicación de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07114-1-2004. Luego de haberse subsanado la demanda, con Resolución N° 2 del 14 de abril del 2005, se corrió traslado a los demandados. Posteriormente, la minera Barrick Misquichilca presentó una excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, la cual fue declarada fundada por el juez oportuno en sentencia del 2 enero del 2006. Finalmente, el 26 de enero, luego de presentado un recurso de apelación por parte de la Congresista, se le concedió el recurso con efecto suspensivo.

El día 4 de mayo del 2006, un aproximado de 20 CC, caseríos y anexos del distrito de Jangas, convocaron a un paro para protestar por los bajos montos que recibían por jornal diario de la empresa ADECO (service de la Mina Pierina), la DP supervisó el cumplimiento de funciones por parte de la PNP y evitó cualquier tipo de enfrentamiento y vulneración al derecho a la libertad personal. Se constató el bloqueo de dos vías de acceso a la Mina Pierina, una por Jangas y la otra por la localidad de Palmira. Se impedía así la entrada y salida de vehículos, el libre tránsito de los trabajadores de la compañía minera. A las 15:00 horas, la DP asistió a una reunión junto con los dirigentes de la compañía minera, aproximadamente 300 comuneros, el Prefecto de Ancash y el sacerdote de la comunidad. Se expresó el siguiente pliego de reclamos: 1. Eliminación de los services, exigiendo un contrato directo con la minera (solicitando aumento de sueldos); 2. Capacitación, entrenamiento e inmediata contratación de electricista, operadores y otros; 3. Apoyo social a las comunidades en cuanto a la construcción de estructura, tomándose en cuenta la contratación de adultos mayores; 4. Destitución de malos funcionarios y empleados por los abusos en la contratación de personal; 5. Disminución del caudal del agua y de los diferentes puntos de captación, no interrumpir el normal caudal del agua, específicamente en la zona de Yarcoc; 6. Solicitan garantías a todos los participantes en el paro. El día 5 se acordó reunirse en el local de la parroquia, en la cual participaron: el sacerdote, el Prefecto de la Región y un notario público. Los comuneros no participaron, exigían que fuese en otro lugar y con la presencia de las comunidades. La DP exhortó a las partes a llevar a cabo la discusión, apelando a mecanismos que demostrasen transparencia en el proceso. En ese sentido, los representantes de la minera deseaban continuar el diálogo en el lugar neutral acordado. Luego, ocurrió un enfrentamiento en el CP Shecta entre la PNP (División de Operaciones Especiales) y miembros del CP, lo cual obligó a suspender las negociaciones. Los comuneros habían secuestrado a siete policías, robándoles cuatro fusiles AKM. Las consecuencias del enfrentamiento: un muerto y 19 personas heridas (10 comuneros, nueve de la PNP).

En enero del 2007 Barrick obtuvo la concesión de exploración de una parte del cerro denominado “Condorhuain”, cercano a su actual lugar de explotación, esto originó el reclamo de parte de varios caseríos que se encuentran en la faldas del cerro, pues consideran que esta labor de exploración afectará los cauces de agua utilizadas para consumo humano y para regadío. Han presentado su queja ante la DP, quien junto con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), y la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) procedió a efectuar una visita a la zona, llegando a determinar que los afloramientos de agua donde nacen los cauces de los riachuelos que llegan a la parte baja no se encuentran dentro del área de concesión y que el EIA establece que sus plataformas de exploración están alejadas de estos afloramientos, además, existe el compromiso por parte de la empresa de no utilizar dichas aguas. Las quejas de la población originaron que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas hiciera una inspección en la zona llegando a las mismas conclusiones. Ambas conclusiones se pusieron en conocimiento de la población en general indicando que no existe la posibilidad de afectar los afloramientos de agua ni los causes.

El 16 de enero de 2007, se reunieron la ONG CORECAMI, el presidente regional de Ancash, Sr. César Alvarez (el año 2006 el Presidente Regional fue el Ing. Ricardo Narváez Soto). Solicitaron su posición sobre la probable contaminación que se estaría originando en los manantiales del cerro Condorhuain. En esta reunión se llegó al acuerdo de convocar a una reunión de trabajo a las diferentes entidades del Estado que han tenido participación en este asunto para el día 29 de enero de 2007, para que se informe sobre la real situación del cerro Condorhuain y la probable contaminación en dicha zona. El día jueves 25 de enero se tuvo una reunión previa convocada por el Ing. Aynor Villanueva, Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash, en la que han participado la Dirección Regional de Energía y Minas, la Administración Técnica del Distrito de Riego de Huaraz, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y la Defensoría del Pueblo. En dicha reunión las entidades entregaron nuevamente los informes en los cuales se indica que no existe utilización de los ojos de agua existentes dentro del área de concesión de MBM. Tampoco existe el desvío de los cauces o contaminación alguna hasta el momento, inclusive se informó que MBM ha perforado 8 pozos de los 13 que tienen proyectado, y que las aguas siguen discurriendo normalmente. En dicha reunión la DP solicitó al Gobierno Regional no crear falsas expectativas en la población y actuar de forma responsable en este tema, teniendo en cuenta los informes técnicos sobre

el caso. Además, debía fijar su posición frente a los reclamos de la población en torno a la contaminación que originan algunas compañías mineras en especial la pequeña minería y la minería artesanal las que en un 80% son informales, siendo las más contaminantes. Se ha anunciado que de no lograr el apoyo del Gobierno Regional, se iniciará un paro el día 30 de enero.

Últimos acontecimientos. El día 05 de Marzo de 2007 el Presidente Regional de Ancash acompañado de una delegación de personas que reclaman la paralización del proyecto de exploración en el cerro "Condorhuain" se reunieron con el Ministro de Energía y Minas, Arq. Juan Valdivia, quien les manifestó que a consecuencia de un recurso de apelación presentado en contra de la Resolución que autoriza la exploración en esta zona, se ha impuesto la medida cautelar de paralización de dichos trabajos hasta que se resuelva la apelación presentada. El día 29 de marzo de 2007 el Consejo de Minería ha programado la vista de la causa de este procedimiento administrativo.

25. Caserío San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, provincia de Huari

Actores. Pobladores/as del Caserío "San Antonio de Juprog", Compañía Minera "Antamina" S.A. y Policía Nacional del Perú- DIVOES (LIMA)

Antecedentes. El caserío y la compañía han venido sosteniendo reuniones periódicas a fin de concertar temas prioritarios en beneficio de la comunidad, razón por la que se ha firmado una serie de actas con compromisos entre las partes. Sin embargo, los pobladores del caserío refieren que algunos de los acuerdos no han sido cumplidos.

Hechos. El 13 de septiembre del 2006, el caserío y la compañía minera acordaron sostener una reunión para tratar distintos temas, entre los cuales se encontraban temas laborales. La comunidad se sintió burlada porque recibieron una carta en la cual postergaban la reunión. Además, alegaban que la minera cursó un documento ofertando puestos de trabajo, demasiado tarde. Esto motivó que los representantes del caserío se dirigiesen al campamento minero. Los efectivos de la PNP instalados en el campamento repelieron mediante la fuerza a los manifestantes, ante la amenaza de ingreso a las instalaciones de la minera. Estos hechos dejaron como consecuencia ocho personas heridas (cinco de parte de la comunidad y tres efectivos de la PNP). El 15 de septiembre del 2006, personal la DP se presentó en el caserío "San Antonio de Juprog", logrando coordinar una reunión con los pobladores y la minera. En esta reunión se acordó instalar una mesa de dialogo, para cuyo efecto la minera asumió el compromiso del traslado de los comuneros hasta la ciudad de Huaral. Además asumiría los gastos de atención médica de los heridos. Ambas partes se comprometieron a mantener un clima de paz y tranquilidad en tanto dure el proceso de dialogo. El 18 de septiembre, cuando se instaló la mesa de dialogo, la DP fue elegida por las partes como intermediario y facilitador de este proceso. Además se contó con la presencia de representantes del Gobierno Regional de Ancash, quienes funcionaron como veedores. Se adoptaron varios acuerdos. Continuó el 19 de septiembre y se suspendió hasta el 28 de septiembre del 2006. El 5 de diciembre del 2006, en la última reunión de la mesa de diálogo, se revisó el cumplimiento de los acuerdos de las reuniones anteriores y se comenzó el proceso saneamiento físico legal y posterior trabajo de desarrollo sostenible. Aquella reunión informativa bajo el auspicio de la DP se llevó a cabo el día 17 de diciembre, quedando la población informada sobre los alcances del proceso de titulación PETT y a la espera de los trabajos. El 5 de enero del 2007 la CMA informó a la DP que los técnicos del PETT habían iniciado los trabajos de "geo-referenciación" en la zona del caserío de Juprog. Se tiene prevista la siguiente reunión de la mesa de dialogo el día 1 de Febrero de 2007 para evaluar el proceso de titulación de los "poseionarios" del caserío San Antonio de Juprog.

Últimos acontecimientos. La mesa de dialogo sigue reuniéndose cada semana. Actualmente se esta evaluando los criterios más adecuados para la reubicación de la población, tomando en consideración que los terrenos no se encuentran saneados, respecto de lo que hay posiciones encontradas sobre las ventajas y desventajas de la titulación individual.

APURÍMAC

26. CC Lliupapuquio y Ancatira, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas

Actores. CC Lliupapuquio y Ancatira.

Hechos. En julio del 2004, con presencia de la DP y el PETT, las CC Lliupapuquio y Ancatira acordaron que, en un plazo de ocho meses, 35 comuneros de Ancatira que poseían parcelas en la CC Lliupapuquio (sector Huaribamba) dejarían sus terrenos. Estos campesinos eran cuestionados por no participar en las faenas comunales y no realizar los aportes exigidos por la asamblea de la CC Lliupapuquio. El 13 de octubre del 2005, los 35 comuneros afectados por el desalojo intentaron retomar sus terrenos, produciéndose un enfrentamiento entre ambas CC, en el que tres personas resultaron heridas. El día 18, representantes de la Subprefectura, MD San Jerónimo, el PETT y la DP se reunieron con las autoridades de ambas comunidades; cada CC se comprometió a convocar una asamblea para definir una solución pacífica, las que se

programaron para el domingo 23 (CC Lliupapuquio) y el lunes 24 (CC Ancatira). En ambas CC se acordó respetar el acuerdo del año 2004 (Lliupapuquio no devolverá las parcelas, los comuneros de Ancatira no las reclamarán), pero en la asamblea de Ancatira se acordó también desalojar a comuneros de Lliupapuquio que tienen terrenos en Ancatira y no autorizar la construcción de la carretera Lliupapuquio Cupisa, que pasa por Ancatira.

Al mes de febrero del 2007, se están respetando los acuerdos. Respecto a los 35 comuneros que fueron excluidos de la comunidad de Lliupapuquio, no se les considerará como comuneros eventuales. Con respecto a los comuneros de Lliupapuquio que poseen parcelas dentro de la comunidad Ancatira, hasta la fecha son respetados los derechos de posesión debido a que dichos comuneros cumplen con las obligaciones de comuneros eventuales y participan en las diferentes faenas que la comunidad de Ancatira, desarrolla.

Debemos agregar que para la construcción de la carretera San Jerónimo Lliupapuquio – Cupisa (la cual, de acuerdo a los trazos realizados, tiene que pasar por la comunidad de Ancatira) se ha ejecutado la construcción solamente hasta los límites de la frontera de la comunidad de Ancatira, Lliupapuquio. Durante el mes de junio del 2006 se intentó persuadir a las autoridades de la comunidad de Ancatira a que acepten la construcción de dicha carretera, no se logró persuadirlos por lo que la construcción se encuentra detenida.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

27. Distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas

Actores. Organizaciones gremiales y civiles de Cotabambas y Grau, Federación de Campesinos de Cotabambas, Directorio del Comité de Fideicomiso de la minera Las Bambas, Proinversión,

Hechos. A inicios de agosto del 2005, diversas organizaciones gremiales y civiles de las provincias de Cotabambas y Grau, entre ellas la Federación de Campesinos de Cotabambas, anunciaron la realización de un paro de 72 horas, que se iniciaría el día 27, para exigir la reestructuración del directorio del Comité de Fideicomiso que administra el fondo proporcionado por la explotación minera de Las Bambas. En particular, demandan una mayor presencia de autoridades locales en la mencionada instancia, así como el retiro de Proinversión de la Presidencia de dicho Comité. El día 22, un equipo de la DP viajó a la zona. Durante la visita, el funcionario encargado de la MuP y el Gobernador señalaron que la paralización se realizaba por intereses políticos, mientras que un dirigente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito explicó las razones de la protesta. El día 27 se inició el paro (cuya duración fue extendida a cinco días), liderado por la Federación de Campesinos de Cotabambas, con el respaldo de diversos gremios. El día 28, unos 2,000 campesinos realizaron una movilización pacífica en la Plaza de Armas de Tambobamba; sus dirigentes exigieron la presencia de una comisión de alto nivel para tratar el tema. Según la prensa, el día 29 se produjeron bloqueos en las vías de acceso a varios distritos y un enfrentamiento entre campesinos y policías en Tambobamba luego de que los primeros tomaran los locales de la MuP y la iglesia; ocho personas habrían resultado heridas y la PNP habría detenido a seis personas. Sin embargo, según la información recogida por la DP (entrevistas con el Prefecto, PNP y pobladores), el paro se había desarrollado en forma pacífica, con poca presencia de campesinos, sin detenidos ni hechos que lamentar. El mismo 29 por la noche, autoridades locales y dirigentes de la protesta se reunieron y acordaron suspender la paralización y dar una tregua de 20 días al Gobierno (exigieron la presencia en Tambobamba de una comisión de alto nivel). Por su parte, la Presidenta Regional de Apurímac anunció la instalación de una mesa de diálogo en los primeros días de septiembre. El día 15 de septiembre se instaló la Mesa de Minería que busca fortalecer la institucionalidad en la Región y el desarrollo de la región. Según la prensa, el 19 de enero del 2006, los pobladores tomaron la plaza de Chuquibambilla para exigir el retiro de Pro Inversión y la presencia de una comisión de alto nivel. Durante la segunda semana de febrero, la Presidenta de la Región Apurímac y el alcalde de la Provincia de Abancay, acompañados por una delegación de comuneros, llegaron a Lima para reclamar el retiro de Pro Inversión del Consejo Ejecutivo del Fideicomiso Social.

Al mes de febrero del 2007, la reestructuración del Comité se ha dado únicamente con el cambio en la presidencia. Se ha reemplazado Proinversión por el Alcalde Provincial de Cotabambas; Luis Alfredo Calderón Jara; No se han registrado manifestaciones conflictivas de parte de la población, sin embargo aun queda pendiente el requerimiento de la población de que se integre en el Comité a Representantes de las comunidades campesinas. Actualmente con el cambio de autoridades regionales, provinciales y locales la conformación del Comité es tal como sigue: Presidente Darío Chauca Carrasco (Alcalde Provincial de Cotabambas) Vicepresidente: David Salazar Morote (Presidente Regional); Alfredo Pareja Ayerbe (Alcalde Prov. Grau); Líbano Valencia Castro (Alcalde dist. Chalhuanhuacho); Walter Bocangel Gamarra (Alcalde dist. Ccoyllurqui); Tomas Huañec Huañec (Alcalde dist. Progreso); Rildo Guillen (consejero regional cotabambas); Danilo Jorge Campana (Representante Pro inversión); y Domingo Lagos Salcedo (Representante Xstrata). Aun no hay representantes de los campesinos, tal como pedía la población.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

AREQUIPA

28. Distritos de Paucarpata, Socabaya, Sachaca y Jacobo Hunter, provincia de Arequipa.

Actores. Comité Ampliado de Defensa de los Intereses de APIMA y zonas aledañas. Municipalidad Distrital de Paucarpata, Población de los distritos de Paucarpata, Hunter, Socabaya y Hunter.

Antecedentes. El Comité Ampliado de Defensa de los Intereses de Apima y Zonas Aledañas (CAD) presentaron una carta abierta al alcalde de la MD de Paucarpata para expresar su desacuerdo y protesta por la instalación de antenas para telefonía móvil, por parte de las empresas CLARO y NEXTEL que no cuentan con licencias de construcción, a pesar de que se convocó a sesión ordinaria de concejo, para tratar el dictamen de la comisión de salud respecto del Proyecto de Ordenanza que prohíbe la instalación de antenas de telefonía celular, en la cual participaron los pobladores. No se llegó a ningún acuerdo. Es más, rompieron el diálogo, expresando su disconformidad con la forma en que la Municipalidad estaba tratando el tema al no ordenar el retiro de las antenas.

Hechos. En 8 de mayo del 2006, la DP convocó a una reunión a las partes involucradas. Se concluyó lo siguiente: 1. La creación de una mesa de trabajo para tratar la problemática de la Instalación de las antenas para telefonía móvil, la cual estaría presidida por la DP y conformada por la Dirección Regional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección Regional de Salud, Municipalidades Distritales de Socabaya, Sachaca, Paucarpata, el Comité Ampliado de Defensa de los Intereses de Apima y Zonas Aledañas (representantes de pobladores de los distritos antes aludidos). 2. Debe entenderse que las entidades competentes deben actuar partiendo del Principio Precautorio y Principio de Cautela. 3. El alcalde de Paucarpata ofreció gestionar conjuntamente con el MINSa la atención médica de los pobladores supuestamente afectados del Pueblo Joven Israel (Paucarpata) por las radiaciones no ionizantes de las antenas, teniendo como objetivo establecer científicamente si existe la relación de causa-efecto. El Viceministro de comunicaciones dispuso las mediciones en Arequipa a cargo de la Dirección General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones. Asimismo se dictó una conferencia sobre el tema dirigido a la ciudadanía en general. El 26 de junio, el MTC publicó un comunicado a la opinión pública en los diarios locales con los resultados de las mediciones, los que muestran valores hasta mil veces menores que los límites máximos permisibles establecidos en el D.S. 038-2003-MTC y recogidos a nivel internacional, por lo que el nivel de exposición poblacional encontrado no debe causar alarma a la población arequipeña. El 13 de julio del presente, el MTC realizó una nueva medición de antenas en los lugares donde habría mayor descontento de la población. Esta medición se hizo con presencia del MP, DP, MINSa, MTC. El resultado: las radiaciones no ionizantes están muy por debajo de los límites máximos permisibles. El 22 de agosto se reunieron en Arequipa (local de Editora Perú) la DP, el Representante de la Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos (ADEPSEP), el representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la representante del CONAM, el representante del INDECI, el representante de DIGESA, el representante del MINSa, la Fiscal de Prevención del Delito, el Representante del MTC, el representante del INDECI, el alcalde de Sigüas, el representante de la Municipalidad de Socabaya, el alcalde de la MD de Sachaca, el representante de la Municipalidad de Alto Selva Alegre, la representante de la Municipalidad de Cerro Colorado, la representante del Comité Ampliado de Arequipa y representantes de Comités de distintas Zonas de Arequipa. La Mesa de Diálogo culminó con la suscripción de un Acta de Compromiso, la cual fue suscrita por los asistentes, excepto los representantes de los comités ampliados. Ese mismo día, la DP emitió una nota de prensa sobre los resultados de la mesa de trabajo.

Los días 1 y 2 de febrero del 2006 se organizó una reunión en la que participaron las partes en conflicto.

Últimos acontecimientos. En el mes de marzo el CAD sostuvo reuniones con la Defensoría del Pueblo para recoger información adicional de las antenas. También en el mes de marzo, el CAD se reunió con la empresa Claro, y recibió una comunicación escrita con el compromiso de la empresa de retirar cinco antenas, ubicadas en: 1. Calle Hipólito Unanue 200, Urb. Progresista, distrito Paucarpata. 2. Av. Kennedy 418, distrito de Paucarpata. 3. Calle Progreso 137, distrito de Paucarpata. 4. Calle Morro de Arica 113, distrito Jacobo Dickson Hunter. 5. Av. Ferrocarril 303, Sachaca.

AYACUCHO

29. Distritos de Sivia y Llochegua, provincia de Huanta

Actores. Pobladores de San Gerardo, Comandante EP Germán Reyes Salazar (Base militar contrasubversiva N° 42 de Pichari-La Convención).

Hechos. El 2 de julio del 2005, 32 efectivos militares ingresaron a la localidad de San Gerardo con la intención de incautar armas de guerra. Durante esta incursión se produjo un enfrentamiento. La DP inició una investigación de los hechos. Los representantes de Paz y Desarrollo, Visión Mundial, el PETT, la Dirección Agraria y la DP conformaron un Comité Permanente de atención a conflictos de tierras en el Valle de los ríos Apurímac y Ene. El 14 de julio, el ciudadano Alfredo Cavaría Sedano presentó una denuncia contra el comandante EP Germán Reyes Salazar (Base Militar Contrasubversiva N° 42 de Pichari-La Convención) por el delito de homicidio calificado en contra de otros tres ciudadanos. Por su parte, dicho oficial formuló también denuncia contra los ciudadanos Carlos Morales Vargas y Damasino Candotti, a quienes acusó por el delito de terrorismo. El 21 de julio, la DP entrevistó a pobladores de Villa Mejorada; también programó una visita a la zona para intermediar en el conflicto. La DP solicitó al Fiscal Provincial Mixto de Ayna San Francisco información sobre el estado de los procesos seguidos. No se obtuvo ninguna respuesta. De acuerdo a información obtenida del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de San Francisco, Freddy Gutiérrez Crespo, el 8 de febrero del 2006, se formalizó la denuncia penal contra el comandante EP Germán Reyes Salazar, sin embargo, el Juez Mixto emitió un auto de devolución el día 22 de febrero argumentando que se debe ampliar la investigación por falta de elementos probatorios. Dicha resolución fue apelada por la Fiscalía y la Sala Superior Mixta de Ayacucho confirmó tal resolución el 3 de julio, devolviéndose los actuados a la Fiscalía el 1 de agosto, fecha en la que se iniciaron las investigaciones ampliatorias.

Al mes de enero del 2006, se siguen realizando las investigaciones ampliatorias.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

CAJAMARCA

30. Distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc

Actores. Compañía minera Coymolache, Frente de Defensa de Ecología y Medio Ambiente de Catilluc, MD Chugur.

Antecedentes. El 21 de noviembre del 2001, la MD Chugur emitió la Ordenanza Municipal N° 001-2001-CMDCH que declara dicha zona como intangible y zona reservada protegida de las actividades mineras. La compañía minera Coymolache ha intentado desarrollar el Proyecto Cerro Tantahuatay, pero la ex alcaldesa de Chugur y la población impidieron a la empresa realizar sus actividades. En junio del 2002, la empresa tuvo que paralizar sus actividades ante las protestas de los pobladores que generaron algunos enfrentamientos.

Hechos. La población se opone al proyecto minero por temor a la contaminación, y por ello rechaza los intentos de la empresa de retomar sus actividades. El 20 de agosto, la MD emitió la Ordenanza Municipal N° 001-2004-CMDCH que reitera la intangibilidad de la zona. Durante enero del 2005, la población y sus autoridades mantuvieron sus cuestionamientos a las actividades de la empresa minera. El 21 de abril del 2005, representantes de la población, empresa, Prefectura, DP, Direcciones Regionales de Agricultura y Energía y Minas, entre otros, coincidieron en la necesidad de una solución dialogada al problema de adquisición de tierras por parte de la minera. Acordaron una nueva reunión entre representantes de la MD, comunidad y empresa minera para el 5 de mayo en el local de la DP. Además, las partes solicitaron al MEM la remediación de pasivos ambientales en la zona de Chinchao, en coordinación con la MD y la sociedad civil. Asimismo, en el cierre técnico de trincheras, plataformas y accesos en territorio de Chugur, Tantahuatay y Ciénega, la empresa dará preferencia a mano de obra de Chugur, cuyos trabajadores serán seleccionados en coordinación con el alcalde y dirigentes de la comunidad. La población de Chugur aceptó que el MEM realice un taller informativo en la localidad, el cual se programó para los días 3 y 4 de junio. Finalmente, acordaron reunirse nuevamente el 4 de julio en Cajamarca. El 5 de mayo se reunieron los representantes del distrito de Chugur y de la minera Coymolache. No llegaron a ningún acuerdo respecto a la problemática originada por la adquisición de tierras por parte de la minera. Sin embargo, la empresa se comprometió a constituir un fondo a favor de la comunidad para el financiamiento de actividades de desarrollo social, adicionalmente a lo ofrecido el 18 de febrero. El 20 de junio, representantes de Chugur manifestaron su negativa a la ejecución del proyecto de desarrollo que la empresa se comprometió a realizar para el mejoramiento de la agricultura y ganadería, mientras no se resuelvan los conflictos sobre adquisición de tierras; además, solicitaron a la empresa que devuelva los terrenos, y que desarrolle un estudio y monitoreo de la zona a cargo de una consultora internacional. Por su parte, los representantes de la empresa exhortaron a los dirigentes de Chugur cumplir con los acuerdos referidos al cierre de trincheras y reposición de la geomembrana. El 21 de julio, el Frente de Defensa de Ecología y Medio Ambiente de Catilluc, 600 pobladores del centro Poblado de Quilcate, Catilluc, Tongod, Yauyucán, Pulán, entre otros, realizaron una marcha al campamento de la compañía minera para protestar contra las actividades de exploración que ésta realiza. El 25 de agosto, el MEM realizó un taller informativo en Chugur. El 8 de

septiembre, representantes del distrito y funcionarios de la compañía minera solicitaron al MEM prorrogar por 30 días las negociaciones. El día 19, los pobladores solicitaron conformar una comisión para revisar el expediente técnico del Plan de Restauración de las áreas afectadas por las actividades de exploración del Proyecto Tantahuatay. El mismo día, un funcionario de la Dirección General de Minería informó a la DP que habían solicitado a la compañía minera el cumplimiento de las recomendaciones registradas en el Informe N° 634-2005-MEM-DGM, en el que se fija el 19 de septiembre como fecha límite para iniciar las actividades de remediación ambiental y el cierre de trincheras en el área de Ciénega y Tantahuatay. El día 26, la Dirección General de Minería refirió a la OD que la compañía Coymolache solicitó una prórroga de 30 días para el inicio del cierre de las trincheras, siendo el 19 de octubre la nueva fecha para el inicio de estas operaciones. Los días 7 y 12 de octubre, la compañía Coymolache realizó un taller informativo sobre el plan de restauración de las áreas afectadas por las actividades de exploración en los distritos de Chugur y Ninabamba. El día 18, representantes del distrito de Chugur, MEM y compañía minera acordaron ampliar el plazo y la fecha final para recibir los expedientes de empresas especializadas en trabajos de restauración. Entre otros acuerdos destaca la conformación de una comisión fiscalizadora de los trabajos de restauración de las trincheras, accesos y plataformas integrada por la MD y dirigentes de la comunidad. El 19 de noviembre, representantes del distrito de Bambamarca, Dirección Regional de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, compañía minera y DP acordaron reunirse el 15 de diciembre con autoridades del distrito de Chugur para seleccionar a la empresa encargada del cierre técnico de trincheras y del problema de las tierras. Sin embargo, el 15 de diciembre el alcalde distrital suspendió la reunión programada. Según información proporcionada por la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, se ha reanudado el diálogo con los representantes de la Mu de Chugur, y se ha logrado elegir a la empresa que ejecutará el cierre técnico de trincheras. El 9 de junio del 2006 se intentó realizar una movilización para tomar las instalaciones de la empresa minera Coymolache. Esto no se logró debido a la intervención de la PNP. El 20 de julio se llevó a cabo una reunión con pobladores de Chugur, representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas y la empresa Coymolache Tantahuatay para tratar el tema de la elección de trabajadores. El día 22, hubo una nueva reunión en la que se concertó que la fecha para la entrega de la obra de cierre técnico de trincheras se llevará a cabo el 29 de agosto. El 22 de septiembre los pobladores de Chugur, encabezados por el presidente de Rondas Campesinas de Cajamarca, Gilberto Cayatopa; Segundo Barboza Díaz, presidente de Rondas Campesinas de Chugur y la presidenta de Rondas Campesinas Femeninas, ex alcaldesa Juana Díaz Díaz, realizaron una movilización contra las exploraciones mineras realizadas en Coymolache. Solicitaron la presencia del Primer Ministro y del Ministro de Energía y Minas para la instalación de una Mesa de diálogo el 25 de septiembre (en Chugur o Hualgayoc) y solucionar estos problemas, de lo contrario amenazaron con tomar medidas más drásticas. En comunicación telefónica con el fiscal adjunto de Bambamarca nos manifestó que se movilizo a la zona un contingente policial de 50 efectivos por las amenazas de quemar la mina si no se conseguía la reunión con las autoridades. La movilización se realizó de manera pacífica. No se reportó ningún acontecimiento violento. El director de la DREM- Cajamarca informó a la DP que la empresa sigue efectuando sus exploraciones. La DP ha recibido información acerca de una posible movilización el día 27 de noviembre debido a que la empresa continúa llevando a cabo sus exploraciones. Esta movilización estaría siendo organizada por un ex candidato de las elecciones regionales y municipales. El 5 de diciembre se llevó a cabo una reunión entre las autoridades y representantes de Chugur y los funcionarios de la compañía minera, en el hotel Las Américas. Allí se trataron tres puntos específicos: 1. Con relación al tema de Desarrollo Integral y Sostenible se propone contratar a profesionales que puedan elaborar y educar a la gente en temas de mejoramiento en agricultura, repotenciar la mini central hidroeléctrica, capacitación para la gente de la zona en manejo de maquinaria pesada, entre otros. 2. Incorporar a GRUFIDES en la mesa de negociación. 3. Tratar el tema de la Zonificación económica y ecológica. En la reunión se acordó la creación de comisiones encargadas de impulsar estos acuerdos. Los dos siguientes puntos quedaron pendientes para una próxima reunión, a realizarse en la segunda semana de enero del 2007.

El 25 de enero del 2007 se llevo a cabo una reunión en las instalaciones del Hotel las Americas, participaron representantes de la comunidad de Chugur, la DP, la empresa minera Coymolache, y representantes del MEM. En dicha reunión, el actual alcalde de Chugur pidió que se recomponga la mesa de dialogo con los verdaderos representantes de las comunidades de Chugur. Además solicitó que las reuniones se realicen en Chugur. No se llegó a ningún acuerdo. La fecha de la próxima reunión será fijada por el MEM.

Últimos acontecimientos. Aún no se tiene fecha para una próxima reunión. El 19 de marzo la DP ha solicitado a la asesora legal de la compañía las actas firmadas para poder realizar el seguimiento de su cumplimiento.

31. Distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz

Actores. Pobladores de Pulán, Minera Buenaventura.

Hechos. Entre 1999 y 2003, la compañía minera Buenaventura exploró las reservas auríferas de San Pedro Sur y Pampa Verde, proyectando dos tajos a cielo abierto para la extracción de 100 mil onzas de oro por año. Después de los trabajos de exploración, la empresa presentó el estudio de impacto ambiental (EIA) al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a las MuP de San Miguel y Santa Cruz. El estudio fue observado, por lo que la empresa presentó un nuevo EIA al MEM, el cual se encuentra en evaluación. La Dirección Regional de Energía y Minas informó que se organizaron talleres de participación ciudadana antes y durante la realización del EIA, pero no después de su presentación. Los pobladores afirman que, al estar ubicado en una cabecera de cuenca, el proyecto minero afectará a las provincias cajamarquinas de Santa Cruz, San Miguel y San Pablo, a los agricultores del valle Chancay (Lambayeque), y a las microcuencas de Chilal, Santa Catalina, San Pedro, Pisit y Chorro Blanco que alimentan a la central hidroeléctrica de Carhuaquero y al reservorio de Tinajones. El 5 de noviembre del 2004, la DP, en reunión realizada en la sede del GR, alertó sobre esta movilización a autoridades de la PNP, Comisión Ambiental Regional, Comité Multisectorial de Cajamarca y Dirección General de Minería del MEM. El día 16 se realizó una marcha de campesinos hacia el campamento del proyecto La Zanja. En el lugar, dieron un plazo de cuatro horas a trabajadores de la empresa para abandonar la zona. Vencido el plazo y ante la negativa de retirarse, los comuneros tomaron el campamento a pesar de que 45 policías intentaron dispersarlos lanzando bombas lacrimógenas. El campamento fue quemado y saqueado, quedando dañadas las unidades móviles y el mobiliario. Un campesino murió al recibir un impacto de bala; personal de la empresa y campesinos resultaron heridos. El Jefe de la Región Policial dispuso el inmediato traslado de 100 efectivos. El día 17, los pobladores se replegaron a sus comunidades. Llegaron a la zona representantes del MiP, Subprefectura, MuP y GR. La PNP y la Fiscal realizaron el levantamiento del cadáver, constataron daños e identificaron presuntos responsables. La PNP detuvo a 18 personas, entre ellas dos menores de edad, y las condujo a la comisaría de San Miguel. Los menores fueron liberados al día siguiente, y los restantes fueron trasladados al Juzgado Mixto. El día 21, la DP, reunida con pobladores y autoridades locales en Tongod, exhortó a emplear mecanismos institucionales. El 22 y el 23 se realizó un paro provincial para exigir al MEM la nulidad de la autorización de exploración del proyecto minero La Zanja. Una comisión de alcaldes viajó a Lima a expresar su oposición a la empresa minera ante congresistas de la región y funcionarios del MEM. Estos últimos anunciaron la conformación de una mesa de diálogo si la población levantaba la huelga. En diciembre, la MD Pulán emite la Ordenanza N° 003-2004-MDP creando el Área de Conservación Municipal Pulán sobre una superficie de 5,500 Ha. ubicadas en la zona de conflicto. El 29 de diciembre, un grupo de dirigentes ronderos y del SUTEP tomó la MD Pulán exigiendo al alcalde apoyar la lucha por anular las actividades mineras; en el hecho, sustrajeron documentos y enseres y paralizaron las obras de pavimentación de la Plaza de Armas. El alcalde indicó que ello se produjo porque no aceptó entregar dinero de la MD para solventar la defensa judicial de los ronderos procesados por los sucesos de noviembre. Otros pobladores denunciaron al alcalde por incumplimiento de obras y mal manejo de recursos. En enero del 2005, los alcaldes de la zona denunciaron haber sido amenazados de muerte por los ronderos. El alcalde de Pulán y su cuerpo de regidores abandonaron el local municipal. El día 10, las organizaciones se reunieron en Pulán para decidir qué acciones adoptarían. El 12 de enero, una comisión de alcaldes de la provincia, acompañados por la congresista Rosa Florián, se reunieron con el Defensor del Pueblo para solicitar su intervención. El día 19, la DP visitó Santa Cruz. En Pulán, encontraron que los ronderos rodeaban la MD, permitiendo la atención sólo en dos oficinas y exigiendo que el alcalde rindiese cuentas sobre su gestión. Mientras tanto, los documentos de la MD estaban bajo custodia en la Fiscalía de Santa Cruz. En esta ciudad se sostuvo una reunión con dirigentes locales, ronderos y un representante del GR. Los pobladores cuestionaron la actividad minera, presentaron sus demandas y manifestaron su disposición a participar en una mesa de diálogo convocada por la DP. Esta informó sobre el proceso de decisión para autorizar un proyecto minero y los procedimientos de información y consulta. El día 20, la DP se reunió con el Vicepresidente Regional de Cajamarca quien expresó su disposición a participar en una mesa de diálogo, aunque precisó que el Gobierno central es responsable de solucionar el conflicto. Por su parte, el congresista Manuel Bustamante también visitó la zona. El día 23, en Chiclayo, se reunieron representantes de las provincias de Santa Cruz, Chota, Cajamarca, San Miguel y Lambayeque, con representantes del Poder Ejecutivo y la DP. En dicha reunión se acordó conformar una comisión para revisar el EIA del proyecto La Zanja, realizar talleres informativos, fiscalización de las actividades de exploración minera, etc. La CGR informó que ha programado una intervención a la MD. El día 28 se realizó una marcha pacífica en Chiclayo en protesta contra los proyectos Cushuro y La Zanja, convocada por el Frente de Defensa de los Intereses de Santa Cruz, rondas campesinas, Junta de Regantes de la Cuenca de Chancay-Lambayeque y otros gremios. En febrero, los ronderos de Santa Cruz desconocieron el acta firmada el 23 de enero en Chiclayo, señalando que sus representantes la habían firmado sin la presencia y aprobación de la población. Por esta razón no se realizó la reunión programada para el 13 de febrero entre representantes de la población, Poder Ejecutivo y DP; más bien, ese día, el Frente de Defensa destituyó a Oscar Romero y Horacio Barreto de sus cargos, y eligió un nuevo dirigente (Odelmar Izquierdo Hernández). A pedido del MEM, la DP viajó a la zona y

dialogó el 14 de febrero con representantes del Frente de Defensa, rondas campesinas e Iglesia sobre posibles soluciones al conflicto. Los ronderos, por su parte, pidieron la vacancia del alcalde. El día 15 se reunieron con representantes del JNE, quienes los orientaron sobre los mecanismos a emplear dentro de la legalidad. El 22 de marzo, el alcalde solicitó al MiP la desmovilización de bienes de la MD. Ante el pedido de la Fiscal, el alcalde aceptó esperar la presentación del informe de la CGR, para no generar enfrentamientos contra la población. A inicios de mayo, la empresa minera retomó los trabajos de exploración; representantes de la población expresaron su oposición a estos trabajos, pero no se registró ninguna manifestación. El 19 de mayo, el JNE (Resolución N° 114-2005) declaró la vacancia del alcalde y dos regidores de la MD Pulán. El 3 de junio, ronderos, estudiantes y docentes realizaron una movilización pacífica en defensa del agua y en contra de la privatización de ésta. El 21 de julio, la CGR publicó la Resolución N° 320-2005 en la cual informa de presuntas irregularidades en la contratación de auditorías externas, por lo que autoriza la intervención del Procurador Público. El 9 de septiembre, un grupo de ronderos del distrito de Pulán retuvo a dos trabajadores de la Mina Buenaventura. Estas personas, que se encontraban realizando charlas de información y sensibilización en el caserío de San Juan de Dios, fueron liberadas luego de cinco horas. El 16 de noviembre, pobladores de Pulán y del caserío El Gordillo realizaron una movilización pacífica hacia el campamento minero La Zanja. En comunicación telefónica sostenida con la PNP se nos informó que el problema suscitado se mantiene estable. No se registran acciones recientes. El 24 de julio, la DP entrevistó al Directos Regional de Energía y Minas, quien informó que era posible que la empresa empiece a ejecutar su proyecto minero durante el mes de agosto. Actualmente, el proyecto minero La Zanja se encuentra paralizado. La población se encuentra en calma. El 16 de noviembre se realizó una movilización pacífica en la comunidad El Gordillo (cercana al campamento minero de La Zanja).

Últimos acontecimientos. El 5 de marzo, comunidades aledañas al proyecto minero hacen llegar a la DP un documento mediante el cual manifiestan su respaldo.

32. Provincia de Hualgayoc

Actores. Población de El Tingo, Minera San Nicolás. **Otros.** Junta de regantes Tingo Maygasbamba, Minera Gold Fields, alcalde distrital de Bambamarca.

Hechos. El 2 de febrero del 2005, 200 personas de la población de El Tingo se ubicaron en las inmediaciones de la compañía minera San Nicolás, impidiendo el libre tránsito de trabajadores, para exigir la remediación de zonas afectadas por la actividad minera. El día 4 se firmó en Bambamarca un acta que recogió las demandas y expectativas de la población. Luego, autoridades del MEM se trasladaron a El Tingo, donde se identificaron posibles fuentes de contaminación en la cuenca del río Tingo-Maygasbamba. Al concluir la jornada, representantes del MEM y pobladores reunidos acordaron volver a reunirse el día 22, en El Tingo, incluyendo a entidades involucradas en el tema (CONAM, DIGESA y ATDR) y conformar una comisión para realizar la inspección de las condiciones ambientales de las operaciones mineras en la zona. Luego de la reunión, los ronderos levantaron su medida de fuerza, haciendo hincapié en que de no cumplirse se procedería a reiniciar las acciones de protesta. El día 22 de marzo, como resultado de la reunión entre representantes de la población y autoridades, se conformó la comisión que participará en las tareas de manejo de remediación de la zona. El 25 de mayo se realizó una reunión en la que participaron representantes del MEM, empresa minera, alcalde provincial, la DP, CONAM y pobladores. La población pidió a las instituciones públicas información sobre los proyectos previstos y sus etapas. Se ha fijado el 14 de julio como plazo último en el que la empresa informará de los resultados de los monitoreos, así como los planes de remediación concretos. El día 3 de agosto, la Junta de Regantes Tingo Maygasbamba se opuso al uso de aguas de la cuenca por la compañía minera Gold Fields. Los días 15, 16 y 17, la mencionada Junta de Regantes, con participación de algunas autoridades locales, entre ellos el alcalde distrital de Bambamarca, realizó un inventario físico socio-ambiental y monitoreo del caudal de los recursos hídricos de la cuenca. A dicha actividad no asistieron autoridades del MEM, argumentando que ella no había sido programada por el Comité de Monitoreo Tingo Maygasbamba y que no se había coordinado con las autoridades de los sectores competentes. El 17 de noviembre, representantes del Comité de Defensa y Desarrollo, en presencia de la DP, expusieron las peticiones que están realizando a la empresa que efectuará el proyecto cerro Corona. El día 29, el Comité de Monitoreo de la Cuenca Tingo Maygasbamba y la MD Bambamarca convocaron una reunión en dicha localidad con los representantes del MEM. En esta reunión se expusieron las conclusiones de los estudios para la iniciación de los trabajos de remediación de pasivos en la cuenca. El 22 de mayo del 2006 se reunieron los pobladores del Tingo Maygasbamba, representantes de la Dirección General de Energía y Minas, MEM, FONAM y empresas privadas para tratar los pasivos ambientales. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo ya que los pobladores expresaron su rechazo cuando se les informó que la planta de tratamiento de agua sería ubicada en la parte alta del cerro. La propuesta de los pobladores es que ésta sea ubicada en la parte inferior del cerro. No se acordó fecha para una próxima reunión. Durante el mes de septiembre se inició la construcción de la planta de tratamiento de agua en la parte alta (zona del Chinchao), con la finalidad de que se pueda remediar la

contaminación existente en el río El Tingo. Además la empresa contrató a dos consultores, quienes trabajaron en la zona y dos pozas para la limpieza del Cerro Corona y San Nicolás. Durante el mes de diciembre se inició el diseño del proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas en la parte del Chinchao. Por otro lado, está pendiente la autorización de la población de El Tingo para el inicio de la construcción de un canal de recolección de aguas ácidas y la identificación de los propietarios para solicitar la servidumbre de dichos canales. De acuerdo a información brindada por FONAM-LIMA, el 26 de diciembre del 2006 se debió otorgar la autorización por parte de las autoridades.

Durante el mes de enero del 2007 se consiguió la autorización de la junta de regantes de la zona (liderada por el señor Silverio Bautista) así como también de la poseedora del terreno (Julia Gallardo) por donde pasara un canal de recolección de aguas ácidas. Los trabajos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas ácidas empezarán el lunes 29 de enero del 2007.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

33. Distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca

Actores. Minera Yanacocha, CP Ingatambo, Negritos, Lagunas, San Cirilo y Yanacachilla, Rondas campesinas.

Hechos. La empresa minera Yanacocha ha desarrollado trabajos de exploración en sectores que los representantes de estas poblaciones consideran vulnerables: centros poblados de Ingatambo, Negritos, Lagunas, San Cirilo y Yanacachilla. Por ello se realizó una asamblea general en abril del 2005, donde estuvieron presentes algunos funcionarios de la Minera Yanacocha. Allí, los pobladores manifestaron su preocupación por la contaminación del medio ambiente ocasionadas por las actividades de exploración y explotación minera, expresando su total desacuerdo con el desarrollo de las actividades mencionadas. Por otra parte, los funcionarios de Minera Yanacocha explicaron las acciones que desarrollan, manifestando que todo trabajo que realizan en las tierras, lo hacen con permiso del propietario, agregando que ellos podrían evaluar el apoyo y financiamiento a estas comunidades. El 9 de abril del se realizó una segunda asamblea que contó con los representantes de las Rondas campesinas y con las autoridades de los distintos caseríos, centros poblados, municipalidades distritales y provinciales que están en desacuerdo con las actividades mineras, participando también autoridades que no pertenecen a la zona del conflicto, pero que representan a poblados que también se consideran afectados. En esta reunión se declaró a la zona denominada "Las Lagunas" como zona intangible por constituirse fuente del recurso hídrico para varias provincias, a fin de no permitir la realización de trabajos de exploración y explotación por parte de Minera Yanacocha. El 8 de diciembre se realizó una asamblea extraordinaria en la que se acordó solicitar a la empresa Minera Yanacocha la paralización y retiro de sus trabajos de exploración en las zonas en conflicto (se debe resaltar la presencia del congresista Manuel Coronado Bustamante, quien asumió un compromiso de presentar documentos ante las autoridades del Gobierno central para promover que la realización de las actividades mineras se realicen cuando existe licencia social). El 14 de diciembre, el dirigente Genaro López Celis cursó una carta a la empresa minera solicitando paralizar sus actividades, bajo amenaza de emplear medidas de fuerza. Durante el mes de marzo del 2006, dicho dirigente coordinó con el Prefecto de Cajamarca, a quien le solicitó una reunión inmediata con autoridades locales, regionales y del MEM para ver alternativas de solución. El día 14, en protesta por la realización de actividades de exploración minera en San Cirilo y Yanacachilla, la Asociación de coordinadores de Defensa del Medio Ambiente de la Cuenca del Alto Llaucano y rondas campesinas bloquearon la carretera Cajamarca-Bambamarca; además, protestaron contra del desvío de las aguas del sector Las Lagunas. El 15 de marzo, por intervención del Prefecto, pobladores sostuvieron un diálogo con Minera Yanacocha, acordando realizar una inspección conjunta a la zona. Esta se realizó el 6 de abril, pero ninguna autoridad se hizo presente, por lo que al día siguiente el Frente Único en Defensa de la Vida y del Medio Ambiente de Cajamarca emitió un pronunciamiento exigiendo que Minera Yanacocha retirase sus máquinas y trabajadores de San Cirilo, Yanacachilla, Negritos y CP Ingatambo, señalando que la población no otorgará licencia social a las actividades mineras, y solicitando una comisión de alto nivel. El 17 de abril se realizó la inspección. El 23 de abril, los pobladores acordaron dar un plazo de cinco días calendarios para que la empresa minera retirase sus equipos de trabajo de la zona en conflicto. Los días 25 y 26 de abril, representantes de la población, MEM y minera Yanacocha se reunieron, pero sin llegar a algún acuerdo. El 5 de mayo se instaló la Mesa de diálogo integrada por funcionarios del MEM, representantes de la comunidad de Yanacachilla, la minera Yanacocha, la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca y la DP. Durante esta reunión, la empresa minera decidió suspender sus actividades exploratorias hasta el 19 de mayo. El día 19, en una nueva reunión, representantes de los Centros Poblados solicitaron que la empresa minera retirase sus máquinas; la empresa informó que sólo podían retirar la maquinaria de la zona de San Cirilo, aunque no de los otros poblados. El 6 de junio, ante la negativa de los representantes de Yanacocha de retirarse de las zonas del proyecto, los representantes de Yanacachilla rompieron el diálogo. La empresa minera se encuentra a la espera del pronunciamiento del MEM sobre los problemas socio-ambientales referidos al

proyecto de exploración “Solitario”. El día 16, el Frente de Defensa por la Vida y el Medio Ambiente de Cajamarca realizó una movilización pacífica hacia el cerro San Cirilo. El 16 de noviembre, pobladores de los distritos presuntamente afectados por contaminación manifestaron su desacuerdo con los estudios de evaluación ambiental. Por ello solicitaron que el MEM ordene el retiro de las maquinarias y el cese de toda actividad minera hasta que se realice la zonificación ecológica en el departamento. El Director Regional de Energía y Minas de Cajamarca informó que en el caso no ha sido necesaria una nueva intervención, ya que el conflicto se mantiene estable. La empresa minera no ha vuelto a poner sus maquinarias en la zona. Se mantiene un clima de tranquilidad. La población se encuentra tranquila.

Durante el mes de enero del 2007, el señor Genaro López en conversación con el Director Regional de minería manifestó que hay presencia de personal de Minera Yanacocha en la zona de San Cirilo y que siguen, de manera intermitente, con sus trabajos desde la segunda semana de enero.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

34. Caserío Quishuar Corral, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca

Actores. Minera Yanacocha, pobladores de Quishuar Corral.

Hechos. La empresa minera Yanacocha viene desarrollando actividades de explotación en zonas aledañas al caserío Quishuar Corral, lo que afecta –según los pobladores– la calidad del agua que consumen y causa problemas de respiración por el polvo provocado en época de estiaje. El 27 de marzo del 2005, los pobladores solicitaron la intervención del congresista Manuel Bustamante Coronado, quien informó al MEM la situación del caserío. El 1 de junio, representantes de la DREM, Consejo Nacional del Ambiente y la DP recorrieron la zona supuestamente afectada y recogieron las preocupaciones de la población con relación a la actividad minera (ampliación de los tajos en la zona Quinoa Sur y la iniciación del proyecto Carachugo). El día 10, con participación de representantes de las partes, el Director Regional de Energía y Minas manifestó que en 2003 se hizo una inspección ocular en la que no se evidenció contaminación. Sin embargo, se solicitó a la DGM que realice la fiscalización del caso. Los pobladores han expresado su desconfianza en la imparcialidad y transparencia de los monitoreos y fiscalizaciones hechas y del escaso conocimiento de los resultados que tienen hasta la fecha. El 24 de abril del 2006 en la DP se reunieron representantes del MEM, representantes del caserío y de la DP para tratar los siguientes temas: disconformidad con el proyecto de expansión minera de Yanacocha Oeste, ya que no se ha cumplido con lo ofrecido por la empresa (construcción de obras de electrificación, agua potable, carretera, reforestación, entre otros, a favor de la comunidad), que fueron ofrecidas por la minera ya que los caseríos Quishuar Corral–San José y el CP Río Grande habían sido afectados directamente con la explotación minera. Además, el MEM y la DP se comprometieron a mantener los canales de diálogo para llegar a un mejor entendimiento con la población y la empresa minera. El día 9, en el C.E. 821432 de Quishuar Corral se reunieron representantes de la empresa minera, la asociación de pobladores Quishuar Corral y autoridades del caserío para tratar los avances en el cumplimiento de los ofrecimientos de la empresa, según actas suscritas por ambas partes. En esta reunión se formaron comisiones para realizar gestiones ante las entidades competentes y agilizar el cumplimiento de las promesas efectuadas por la empresa minera en electrificación, construcción de posta médica y el centro educativo para la comunidad de San José. El día 13 de junio se llevó a cabo una reunión con los pobladores, los representantes de la minera Yanacocha y la DP, en la cual se informó sobre los requisitos y trámites que tenían que realizarse para la construcción de la posta medica y los avances en las gestiones para la electrificación, agua potable, reforestación y créditos autogestionarios a favor de los pobladores de la localidades antes mencionadas. Se programó para el 26 de junio una reunión en la DP para realizar una evaluación del cumplimiento de ofrecimientos de la empresa. No hay respuesta de las instituciones involucradas en el tema.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

CUSCO

35. Distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención

Actores. Municipalidad distrital de Santa Teresa, provincia de La Convención, Municipalidad provincial de La Convención, Municipalidad distrital de Machu Picchu, provincia de Urubamba, Municipalidad provincial de Urubamba, Unidad de Gestión de Machu Picchu (que agrupa a INC, GR Cusco, INRENA, MINCETUR), Perú Rail, Ferrocarril Trasandino.

Otros. Comisión Ambiental Regional (CONAM), CGR, Ministerio de Transporte, PJ, MP, PNP, Empresa Generadora de Electricidad de Machu Picchu SA (EGEMSA), Ministerio de RREE, Asociación de Agencias de Turismo de Cusco (AATC), Consorcio de Transportistas de Machu Picchu (CONSETUR), Cámara de Turismo del Cusco, Asociación de Hoteles y afines del Cusco.

Antecedentes. En 1998, el embalse del río Acobamba causó la desaparición de la vía férrea entre Machu Picchu, Santa Teresa, Santa María y Santa Ana, en La Convención. Este embalse también ocasionó la destrucción parcial de la Central Hidroeléctrica Machu Picchu, actualmente recuperada. Desde entonces, los Gobiernos correspondientes ofrecieron la reconstrucción de la vía férrea, sin haber concretado dicho ofrecimiento.

Hechos. En el año 1996 se han asfaltado 40 Km. de vía en la ruta terrestre Ollantaytambo–Abra Málaga, lográndose asfaltar así aproximadamente el 60% de la ruta total hacia Santa Ana (200 Km.). El acceso a Santa Teresa desde la vía principal de la carretera a Santa Ana es muy accidentada pues se trata de una trocha carrozable. En el año 1996 se abrió un proceso judicial por los delitos de Abuso de Autoridad y contra el patrimonio cultural contra el alcalde de Santa Teresa, y el Juez dispuso como medida cautelar el statu quo para evitar la instalación del puente. Luego de recorrer la zona, la DP ha evidenciado la situación de aislamiento de la provincia de La Convención y en especial del distrito de Santa Teresa (12 horas de viaje frustrado por carretera con derrumbes hacia La Convención obligaron a regresar a Ollantaytambo para abordar el tren). La posibilidad de extender la vía férrea por el trazo de la carretera existente entre la Central Hidroeléctrica EGEMSA y la cabecera del puente Carrilluchayoc requeriría de estudios geológicos debido a la situación de inestabilidad de los suelos (derrumbes). La posibilidad de extender la vía férrea desde la Central Hidroeléctrica EGEMSA hasta Santa Teresa y La Convención, por la anterior ruta, requiere de una inversión mucho mayor, en tanto la zona se ha tornado inestable por los incendios forestales y no existe plataforma. Tras la visita y las entrevistas realizadas se ha comprobado que el puente se encuentra listo para ser instalado en la zona, habiéndose construido las cabeceras del puente en ambas orillas del río Vilcanota. En las entrevistas han surgido dos posibles alternativas, sin estar aún consensuadas entre las partes: 1. Extensión de la vía férrea, desde el puente San Miguel –antes de ingresar a la Central Hidroeléctrica EGEMSA– por un trayecto de aproximadamente 2.5 a 3.5 Km. hasta la zona de “Enríquez”, con la construcción de una estación de desembarco y abordaje. Esta alternativa permitiría extraer el servicio ferroviario de la zona INTANGIBLE hacia la zona de AMORTIGUAMIENTO, la instalación del puente y el uso de la carretera fuera de la zona intangible y la seguridad de la central hidroeléctrica. Los estudios fueron realizados por EGEMSA. 2. La extensión de la vía actual desde la Central Hidroeléctrica, en 700 m. con la construcción de una estación cerrada, al interior de la central hidroeléctrica. Es la posibilidad más inmediata. Sin embargo, mantiene la situación de vulnerabilidad del Santuario y el uso de la zona intangible. El 12 de octubre, la DP solicitó el expediente técnico del puente a la Municipalidad de La Convención quien remitió copia del mismo. El día 18 se reunieron en el local de la PCM los representantes de diversas instituciones (PCM, INC, INRENA, MINCETUR, MTC) con el alcalde de Santa Teresa y el congresista Luis Wilson para llegar a acuerdos sobre acciones para lograr el desarrollo integral del distrito en armonía con el Santuario Histórico de Machu Picchu. Al finalizar la reunión se firmó un acta, en la cual se desarrolló un plan que abarca tres aspectos: 1. Desarrollo carretero. 2. Desarrollo ferroviario. 3. Desarrollo del sector aéreo. El día 25, la DP recibió una carta remitida por el despacho de la congresista Alda Lazo, en la que se señala el inicio de la construcción del puente Carrilluchayoq, el cual se estaría haciendo sin contar con el expediente técnico ni el Estudio de Impacto Ambiental. Ese mismo día, el jefe de la Región Policial Cusco solicitó la intervención de la DP ante el probable conflicto que surgiría a raíz del reinicio de las obras. Además se tuvo conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el asesor jurídico del INC habría solicitado la presencia de 100 efectivos de la PNP (Servicios Especiales) para impedir que la población cumpla con sus objetivos de lanzar el puente. El 26, la DP se comunicó con la DIRTEPOL, quienes informaron que un contingente policial se encontraba en Santa Teresa, pero que no se habían registrado hechos relevantes. La DP advierte que antes de empezar la construcción del puente se requiere una Evaluación de Impacto Ambiental que cuente con opinión favorable del INRENA. Esta EIA debería ser realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que se encuentra dentro de su competencia. Sin embargo, esta evaluación no es suficiente para determinar en su totalidad el impacto sobre el Medio Ambiente, así que se recomienda propiciar evaluaciones ambientales participativas que consideren impactos indirectos en el ecosistema y el lugar arqueológico. Durante el mes de noviembre, el INRENA interpuso una denuncia ampliatoria contra la alcaldesa de la provincia de La Convención, por considerar que atenta contra Machu Picchu al promover la construcción del puente Carrilluchayoc, por lo cual podría ser condenada a cuatro años de cárcel. La denuncia involucra también a quienes resulten responsables de los delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, usurpación de funciones, actos de violencia contra la autoridad y contra el medio ambiente en la modalidad de alteración del ambiente natural. El día 23 de diciembre, la alcaldesa de La Convención informó que ya se habían instalado las estructuras del puente y afirmó que estaría funcionando en 10 días.

El 14 de enero en el diario “Correo” el Presidente Regional, Hugo Gonzales, afirmó que en cuatro meses se hará una ampliación de línea férrea de Carrilluchayoc, para la cual el GR destinará cinco millones de dólares. El 19 de enero, mediante los medios de comunicación, se tuvo conocimiento de que el director del centro del patrimonio mundial de la UNESCO, Francesco Banderni, envió una carta al Presidente del

Consejo de Ministros, a los titulares del MTC, MINCETUR, INC, Pro inversión, INRENA y MEF, en la cual señala que dicha obra ocupa un área de especiales riesgos geológicos, que ya en la zonificación del Plan Maestro del Santuario se definía como área de protección especial debido a las nefastas consecuencias de huaicos anteriores. Es por ello, que el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, enviará una misión en abril próximo para examinar las posibilidades reales de implementación del Plan Maestro, las susceptibles mejoras en su zonificación y las implicancias que pudieran ocasionar en la conservación integral del Santuario, programas de desarrollo urbanístico, infraestructural, turístico o vial. El 25 de enero en el diario "Del Cusco" se comunicó que, en reunión sostenida entre el premier, el presidente regional, el alcalde de La Convención y alcaldes distritales de Santa Teresa y Echarati, se ha llegado a un acuerdo de dar atención a la construcción de la carretera Santa Teresa – Santa María, la cual facilitará el traslado de productos. Además, se acordó una próxima reunión en Quillabamba, a la cual asistirán los ministros de transportes, salud y educación (fecha aún sin confirmar).

El 30 de enero del 2007 el alcalde provincial de La Convención anunció que el tránsito por el puente Carrilluchayoc sería habilitado durante la última semana de febrero. El 6 de febrero la municipalidad provincial organizó una reunión para tratar la problemática integral de la zona y plantear una serie de propuestas de obras de impacto ante el presidente regional. El 24 de febrero se terminaron los trabajos en el puente Carrilluchayoc.

Últimos acontecimientos. El 24 de marzo se inauguró el puente Carrilluchayoc. La UNESCO ha anunciado la llegada de una comisión para verificar su construcción y las posibilidades de que la ciudadela mantenga su categoría de patrimonio cultural. Los resultados de la investigación que lleve a cabo dicha comisión se darán a conocer el mes de junio.

36. Distrito de Capacmarca, provincia de Chumbivilcas

Actores. Jaime Monge Araujo, alcalde distrital por el partido Inka Pachacutec (24, 03% de votos) obtuvo cuatro regidores, el otro regidor pertenece al Movimiento Nueva Izquierda.

Otros: Frente de Defensa de Capacmarca, CC Tahuay, Cancahuani y Sayhua.

Antecedentes. La MD Capacmarca compró un volquete por un valor de US\$ 75.000. La transacción se realizó mediante la ONG Plan Perú, cuyo representante (Feliciano Abarca) recibió el dinero y adquirió el vehículo que fue entregado en acto público. Posteriormente, la MD encargó a la misma persona adquirir un tractor (Plan Perú ofreció regalar adicionalmente una camioneta y computadoras para la MD y un centro educativo), dándole un adelanto de S/. 100.000 sin ninguna garantía. No se convocó a licitación pública para ninguna de estas operaciones, aunque para la segunda se formó una comisión de adquisición presidida por un abogado que no es trabajador de la MD y el proceso fue comunicado a CONSUCODE y CGR, y publicado en *El Peruano*. Posteriormente, el representante de Plan Perú recibió S/. 16.000 por gastos de traslado del tractor de Lima a Capacmarca. Transcurrido el plazo, Abarca informó que el tractor demoraría en llegar, por lo que entregó en señal de buena fe un tractor con el logo de Plan Perú y un operador, para lo cual se firmó un contrato de cesión en uso. Un mes después, personal de la MuP Quispicanchi llegó a Capacmarca a recuperar el tractor señalando que sólo lo habían alquilado al señor Abarca. Este visitó el distrito el 23 de octubre del 2005; luego de su informe, la población, liderada por dirigentes del Frente de Defensa intentó retenerlo. Ante esta situación, el señor Abarca ofreció devolver el dinero, para lo cual indicó que debía cobrar un adeudo en la MD Pomacanchi; lo acompañaron un regidor y un empleado municipal, los cuales fueron encerrados en la habitación de un hotel en Urubamba, lo que permitió la fuga del señor Abarca.

Hechos. El 25 de octubre del 2005, el Frente de Defensa exigió a los regidores declarar la vacancia del alcalde. El Concejo decidió suspenderlo por 30 días. El 22 de noviembre, el gobernador de Capacmarca solicitó la intervención de la DP para evitar un posible conflicto entre los seguidores del alcalde y sus opositores. El día 25, el alcalde retomó sus funciones y, mediante acuerdo de Concejo, decidió trasladar la sede de la MD a la CC Cancahuani por motivos de seguridad. El día 29, el alcalde solicitó la intervención de la DP para prevenir actos de violencia en contra suya. El Frente de Defensa denunció al alcalde por peculado y estafa, mientras que el alcalde denunció a Feliciano Abarca y al alcalde de Urcos por estafa. El 13 de diciembre, la DP solicitó información al juez del Juzgado Mixto de Chumbivilcas sobre el estado actual del proceso. Se nos informó que el proceso estaba en investigación y que se había abierto instrucción contra el alcalde por los delitos contra la fe pública, peculado, malversación de fondos y otros. Se solicitó la detención del alcalde.

Al mes de enero del 2007, no ha concluido el proceso judicial. La DP ha dejado de ser intermediario en el caso debido a que este pedido no fue solicitado por ambas partes (el Frente de Defensa no solicitó la intervención).

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

37. Distrito de Echarate, provincia de La Convención.

Actores. Transportadora de Gas del Perú Compañía (TGP), Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), Central de Comunidades Nativas Machiguengas Juan Santos Atahualpa (CECONAMA), Federación de Comunidades Nativas Yine-Yami (FECONAVY), Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba.

Antecedentes. Los días 22 de diciembre del 2004, 29 de agosto y 16 de septiembre del 2005 se produjeron fallas en el ducto que conduce el gas desde Camisea a la costa, en los puntos señalados como Kp 8+800, Malvinas, Kp 222+500 Pacobamba y Kp 200+700 Toccate, respectivamente.

Hechos. El 24 de noviembre del 2005, en la quebrada Tsirompia, se produjo la ruptura del ducto del gas de Camisea. El día 28, representantes del Programa de Monitoreo Ambiental Comunal exigieron una auditoría que esclarezca las causas del derrame y proponga las medidas convenientes para que este hecho no se repita. El 1 de diciembre, las CN del Bajo Urubamba realizaron un paro de 72 horas impidiendo el surcado de embarcaciones por el río Urubamba. El día 5, la DP recomendó a las autoridades regionales (GR, INDECI, CONAM, DIGESA) evaluar el daño al medio ambiente, determinar responsabilidades y atender a las comunidades afectadas. El día 12 se realizó una reunión entre representantes del Estado, empresas, CN y Comité de Gestión del Bajo Urubamba, en la que se acordó que: a) La TGP realizará una inspección ocular desde Malvinas hasta Apurímac, elaborará un proyecto productivo de piscigranja y dotará de medicamentos básicos a los centros de salud; b) Pluspetrol colaborará en las labores de logística de un estudio de prefactibilidad para obras de electrificación. Los días 13 y 15 de octubre del 2006 se llevaron a cabo audiencias públicas sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del lote 57, concesionado a las empresas Repsol y Burlington. El día 19, la DP recibió una carta remitida por el Consejo directivo de COMARU, en la que se manifestaba que no fueron invitados a dichas audiencias públicas, por lo cual consideraban que no son válidas. Así propusieron que se realicen nuevamente. Además sostuvieron que el resumen ejecutivo del EIA no está disponible en la página Web del MEM.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

38. Distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba

Actores. MD Machu Picchu, Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Machu Picchu, empresa de transportes TRAMUSA, Consejería y Servicios Turísticos.

Otros. GR Cusco, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco.

Hechos. El 6 de diciembre del 2005, representantes del Frente de Defensa realizaron un paro de 48 horas rechazando la gestión del alcalde. El mismo día, la PNP informó que los comuneros habían tomado la línea férrea, a la altura del Km. 88. El día 13, PerúRail S.A. suspendió el servicio de trenes hacia Machu Picchu. El día 14 se reunieron representantes de MINCETUR, OSITRAN, MTC, Prefectura. En la reunión se informó que se había solicitado a Perú Rail que trabajase normalmente. El día 15, la empresa volvió a suspender el servicio de tren argumentando riesgos a la seguridad. El prefecto encargado ha sostenido conversaciones con el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Machu Picchu para evitar que se vuelvan a tomar medidas de fuerza. Al cierre del reporte 32 (octubre), la determinación de la responsabilidad de encargar la concesión de la ruta entre el pueblo y la ciudadela de Machu Picchu recaía en el Juzgado Mixto de Urubamba.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

39. Provincia de Espinar

Actores. Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Empresa minera BHP Billington, Fiscal de Espinar.

Hechos. A mediados de mayo del 2005, FUCAE y FUDIE plantearon la revisión del Convenio Marco suscrito entre la empresa y la MuP con participación de las comunidades del entorno de la mina (en dicho Convenio, la empresa se comprometió a aportar 1.5 millones de dólares anuales para el desarrollo de la provincia). El 23 de mayo iniciaron un paro indefinido demandando, entre otros aspectos, la reformulación del Convenio Marco, incrementar a 20 millones de dólares el aporte anual de la empresa (actualmente es de 1.5 millones de dólares), el cierre o reubicación de la presa de relaves de Huanipampa, etc. El 24 de mayo, unos 2,000 pobladores incursionaron en las instalaciones de la empresa minera BHP Billington. La compañía paralizó sus actividades y trasladó a su personal, dejando el cuidado de las instalaciones a las fuerzas del orden. El 26 de mayo, una delegación de la DP llegó a la zona para propiciar el diálogo. Ese mismo día, una Comisión de Alto Nivel encabezada por el Viceministro de Minas llegó a Espinar. El 17 de junio se conformaron dos mesas de trabajo con presencia de la población de Espinar y representantes del Estado y de la empresa minera. La primera mesa abordó temas relacionados a educación, salud, transporte y agricultura, entre otros, mientras que la segunda se orientó a resolver la problemática existente ente la

población y la minera (la población reclama el aumento del monto asignado para la realización de obras sociales). El día 20, la empresa minera reanudó sus actividades. El 30 de junio se realizó una reunión para reevaluar el convenio marco y tratar las preocupaciones por los problemas ambientales de la zona. Se han iniciado investigaciones contra 28 personas por los hechos suscitados el 25 de mayo. El 8 de agosto, los pobladores pidieron nuevamente la revisión del convenio marco. El día 15, representantes de población solicitaron retirar la denuncia formulada contra 72 pobladores de la localidad. El día 22, el FUCAE acusó a la Fiscal de Espinar por haber atentado contra el principio de autoridad. El día 26, la población se reunió para tratar las mencionadas denuncias. El 6 de septiembre se realizó una reunión con el Viceministro de Energía y Minas para discutir el caso de BHP Billington Tintaya. Las conversaciones continuaron hasta el 21 de septiembre. En octubre, la comisión de alto nivel no visitó la provincia. El diálogo entre las partes se ha suspendido. Durante el mes de diciembre se están llevando a cabo procesos de elecciones de nuevos presidentes de comunidades y de dirigentes de organizaciones de base.

Últimos acontecimientos. El 8 de marzo al alcalde encargado de Espinar remitió una carta al director general de asuntos ambientales mineros del MEM mediante la cual expresa algunas observaciones (de la municipalidad, FUCAE, FUDIE y grupo de veedores) al informe preliminar de la evaluación ambiental. Solicitan la inclusión del contrato completo entre Xstrata y Walsh, la programación de la presentación preliminar los días 16 y 17 de abril y la entrega del informe final el 14 de mayo (en Espinar). El 12 de marzo se realizó el taller de presentación del informe preliminar de evaluación ambiental de Espinar. Antes de ello se reunieron: Cooperación, OXFAM América, la DP, MEM para determinar la agenda del taller: se entregaría la información necesaria (documento a color y CD) y expondrían dos especialistas (contratados por la alcaldía). La reunión terminó con los siguientes acuerdos: 1. se acuerda un plazo de 120 días calendarios para la revisión del informe preliminar de la evaluación ambiental (a partir del 12 de marzo). 2. el municipio se compromete a asesorar o brindar especialistas para asesorar a las instituciones y comunidades dentro del plazo de los 120 días. 3. El MEM se comprometió a disponer de especialistas dentro del plazo de 120 días. 4. Los talleres informativos de Walsh Perú dirigidos a las comunidades seguirán el cronograma establecido. 5. La explicación del contenido del informe se hará en un lenguaje sencillo. Los acuerdos se suscribieron mediante un acta que no fue firmada por el alcalde de la municipalidad ni sus regidores, quienes convocaron a otra reunión ese mismo día a las 5pm. En esta última reunión participaron además de las autoridades municipales, las organizaciones cooperantes (cooperación y OXFAM), el MEM y la DP. Se ratificó verbalmente lo ya acordado en la reunión anterior en los puntos 1 y 2, se agregó que el municipio elaborará una propuesta de cronograma de acciones en relación al proceso de entrega del informe de evaluación ambiental, que será enviado a todos los actores de la sub comisión de evaluación ambiental (sin plazo determinado) y que los talleres para explicar el contenido del informe de evaluación ambiental (convocados por Walsh) quedan suspendidos para poder hacer una reprogramación.

El FUDIE convocó a una asamblea popular el 27 de marzo, asistieron 350 pobladores y se desarrolló en la plaza de armas de la provincia. Se llegaron a los siguientes acuerdos: 1. Se acordó denunciar penalmente al ex alcalde por la irregularidades cometidas en su gestión. 2. Se acordó desconocer y rechazar los resultados de la evaluación ambiental realizada por la consultora Walsh. 3. Se acordó ratificar su posición en la reformulación del convenio marco (ya planteada en el 2005) 4. Se solicitará cambio de la actual fiscal y la fiscal adjunta, de un actual funcionario de la municipalidad por abuso de autoridad y de un policía de la comisaría de Espinar por maltrato. 5. Se acordó presentar queja ante ElectroSur Este por los constantes apagones.

HUANCAVELICA

40. CC Huayllarajra, provincia de Huancavelica

Actores. CC de Huayllarajra, EMAPA, Ministerio Público y PNP.

Antecedentes. En julio del 2004, la EMAPA adquirió 4.70 Ha. pertenecientes a la CC Huayllarajra con el propósito de construir una planta de tratamiento de aguas servidas. Esta venta, según los comuneros, fue realizada por los ex directivos de la CC sin consentimiento de la población. En agosto del 2004, la CC presentó una denuncia civil y penal.

Hechos. El 16 de noviembre del 2005, pobladores de la CC impidieron el ingreso de los representantes de la EMAPA y por consiguiente la evaluación de las tierras para la construcción de la planta. Del enfrentamiento con la PNP resultaron heridos tres pobladores y dos efectivos policiales. El día 17, los actuales representantes de la CC presentaron a la DP una queja contra la EMAPA. Al cierre de este reporte, el conflicto continúa activo.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

41. CC Santa Bárbara y Callquichico, provincia de Huancavelica

Actores. CC Callquichico y Santa Bárbara.

Hechos. El 14 de diciembre del 2005, los pobladores de la CC Callquichico se enfrentaron contra los pobladores de la CC Santa Bárbara, exigiendo la adhesión jurídica de esta comunidad y su respectiva distritalización.

Último acontecimiento. No se registran acciones recientes.

42. CC Santa Bárbara y Musoq Cancha, provincia de Huancavelica

Actores. CC Santa Bárbara, CC Musoq Cancha.

Hechos. Durante mayo del 2005, pobladores de la CC Santa Bárbara advirtieron la supuesta usurpación de terrenos que los habitantes de la CC Musoq Cancha estarían cometiendo, sin obtener respuesta por parte de las autoridades de esta comunidad. El 15 de agosto, autoridades de la CC Santa Bárbara intentaron dialogar con representantes de la CC Musoq Cancha, sin obtener resultados. En la misma fecha se produjo un enfrentamiento entre pobladores de ambas CC, resultando herido el Presidente de la CC de Santa Bárbara.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

43. Distrito de Acoria, provincia de Huancavelica

Actores. CP Ayaccocha, CP Muquiccalto.

Hechos. A fines de agosto del 2005, la población del CP Ayaccocha intentó apoderarse de la bocatoma de agua del CP Muquiccalto, produciéndose un enfrentamiento ya que los pobladores de Muquiccalto utilizan esta agua para las actividades agrícolas y ganaderas. Actualmente, la población ha entregado la bocatoma al usuario que construyó la toma de agua, habiendo pagado éste S/. 1,500 a la comunidad. Esta decisión, sin embargo, no satisfizo a todos los pobladores.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

44. Distritos de Huachos y Capillas, provincia de Castrovirreyna

Actores. Pobladores de Huachos, alcalde de Capillas, Israel Flores Rebatta por Unión Nacional (39.76% de los votos) obtuvo cuatro regidores y uno de Movimiento Independiente Capillas y anexos, y Presidente de la CC Ccochapampa.

Hechos. El 13 de junio del 2004, cerca de 200 pobladores de Huachos golpearon y secuestraron al alcalde de Capillas, Israel Flores Rebatta (Unidad Nacional) y al Presidente de la CC Ccochapampa. Los secuestrados, acompañados de otras personas, habrían bloqueado una carretera cuando los pobladores de Huachos construían un canal de regadío. El hecho fue denunciado a la Comisaría de Huachos, por lo que la PNP citó a los acusados para tomar sus manifestaciones. En ese momento fueron agredidos por unos 200 pobladores, por lo que se refugiaron en la Comisaría, donde sólo había dos efectivos. Un contingente de efectivos policiales se desplazó desde Huancavelica, logrando, luego de un diálogo, rescatar a las personas refugiadas. El 20 de julio, varias ONG y la DP organizaron una reunión en Chíncha en la que participaron autoridades locales, delegados de las comunidades y prensa. En dicha reunión, las partes demandaron que el PETT explique sobre el proceso de adjudicación de los terrenos en conflicto (el alcalde de Huachos señaló que la Resolución sobre dicha adjudicación no se habría realizado conforme a ley, y que las partes no fueron notificadas). También se informó que la construcción de la carretera Pucarumi–Capillas ha ocasionado la destrucción de canales de riego y daño a cultivos. Estos hechos motivaron procesos judiciales, pues cada parte cuestiona la legalidad de los títulos de propiedad sobre los terrenos que su contraria exhibe. Se acordó, aunque siguieran los procesos iniciados en el Juzgado Mixto de Castrovirreyna, permitir la continuidad de esta obra. No se llegó a suscribir un acta con estos compromisos pues el alcalde de Capillas y el Presidente de la CC Ccochapampa pidieron consultarlos con la comunidad, pero se acordó que, mientras dure la negociación, las partes evitarán enfrentamientos y no iniciarán nuevas acciones legales para efectuar el desalojo. La ONG CEDINCO se comprometió a gestionar la elaboración de un Proyecto Técnico Legal y a contactar con agencias de cooperación para apoyarlas en la negociación de proyectos de infraestructura. El 2 de agosto, comuneros de Capillas atacaron a similares de Huachos en la localidad de Pucapampa–Buena. Tres heridos fueron evacuados al Hospital de Chíncha y todos fueron dados de alta al día siguiente. El 3 de agosto hubo un nuevo enfrentamiento, esta vez iniciado por comuneros de Huachos, con el saldo de un muerto. Otras nueve personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. El alcalde de Capillas y el Fiscal Adjunto solicitaron a la Región Policial de Ica–Chíncha el traslado de una mayor dotación de efectivos policiales, pero no fueron atendidos porque la zona en conflicto no se encuentra dentro de la jurisdicción de la mencionada unidad policial. El 4 de agosto, personal de la DP se entrevistó con unos 60 comuneros de Capillas y con unos 80 de Huachos, pero ninguna de las partes cedió

posiciones. En el lugar se encontraban tres efectivos policiales de la Comisaría de Huachos, en tanto que el representante del MiP y la PNP se replegaron a Chíncha luego del levantamiento del cadáver de la persona fallecida. El Jefe de la Región Policial-Huancavelica informó a la DP que había enviado a tres efectivos policiales como refuerzo, y que el fin de semana enviará a 10 más, con la compañía de un representante del MiP. Esta respuesta, que no consideraba la gravedad del problema, motivó que la DP enviara un oficio al Jefe de la Octava Dirección Territorial de la PNP recomendando disponer a la brevedad la presencia de un contingente policial suficiente para superar la situación de conflicto. El 6 de agosto, la DP, el GR Huancavelica y dos ONG promovieron una reunión presidida por el Presidente Regional e integrada por alcaldes y delegados de ambos distritos. Allí se acordó instalar una Mesa de Diálogo, encargándosele a la DP la elaboración de su reglamento. Asimismo, las partes se comprometieron a continuar la construcción de la carretera Pucarumi-Capillas, no impedir el tránsito de vehículos, y respetar el fallo judicial que se emita. El GR solicitará opinión técnica legal de los expedientes alcanzados por ambas comunidades a dos instituciones especializadas e imparciales. Las partes no aceptaron dejar libre el área de conflicto porque no tenían clara la extensión de la zona, por lo que se pedirá apoyo técnico al PETT. El Jefe de la Región PNP Huancavelica informó que se instalará un destacamento policial permanente en el lugar y que rotará a los efectivos de la Comisaría de Huachos. El 21 de agosto se reunió la Mesa de Diálogo en Chíncha. Previamente, la DP elaboró su reglamento y la PNP instaló un destacamento con un patrullero y 12 efectivos. Ambos grupos se han replegado a una distancia de 1.5 Km., quedando el destacamento en un punto intermedio. Se instaló también una brigada de salud para prestar atención a los heridos y servicio integral a los comuneros. El 4 de octubre, pobladores de Huachos tomaron la carretera Chíncha-Villa Armas impidiendo el retorno del alcalde de Capillas a su localidad durante tres semanas. El 10 de octubre, comuneros de ambas CC se enfrentaron nuevamente en el sector de Buenavista, con un saldo de cinco heridos. El 22 de abril del 2005, un grupo de pobladores de Capillas, portando piedras, palos y fierros, se movilizaron para tomar el Fundo Quilca. Aunque no se produjeron enfrentamientos entre comuneros, la PNP permanece en situación de alerta, exhortando a los pobladores de ambas comunidades a evitar cualquier acto de violencia, teniendo en cuenta que el litigio entre ambas comunidades se ventila en el Juzgado Mixto de Castrovirreyna. En mayo, pobladores de ambos distritos indicaron que se sujetarán al dictamen del PJ. Mientras tanto, la PNP ha tomado medidas de seguridad para prevenir nuevos enfrentamientos. El 5 de octubre, pobladores de ambas comunidades se enfrentaron nuevamente. La PNP informó que un poblador de Capillas había sido herido de bala y otros cuatro fueron agredidos con arma blanca. El día 11, los efectivos de la PNP lograron restablecer el orden. El día 30 se produjo un nuevo enfrentamiento por la tenencia de las tierras en disputa. Actualmente hay 11 procesos judiciales. Pobladores de Huachos se movilizaron hacia Huancavelica para protestar ante el Poder Judicial y el PETT, debido a que consideran que hay retrasos en dichos procesos. El alcalde de Capillas respondió a esta protesta, a través de los medios de comunicación (noticiero del mediodía), amenazando a los pobladores de Huacho. Han solicitado la intervención de la DP, la cual está llevando a cabo investigaciones.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

HUÁNUCO

45. Naranjillo, distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado

Actores. Pobladores de Naranjillo, alcalde, Gunder Laffose Grijalva por el Movimiento de Integración de Alto Huallaga (18.66% de los votos) obtuvo cuatro regidores y uno de Unidad Nacional.

Hechos. El 17 de noviembre del 2004, pobladores de Luyando (Naranjillo) tomaron el local de la MD en protesta por la falta de celeridad del trámite de la denuncia contra el alcalde, por presuntos delitos de peculado, malversación de fondos, falsificación y otros. El 18 de noviembre, la DP exhortó a los pobladores a desocupar el local municipal. El 22 de noviembre, se programó una reunión con población y autoridades locales, pero esta no se realizó por la falta de colaboración de los regidores y los miembros del Frente de Defensa. La población continuó intentando la vacancia del alcalde, pero no lograron convencer a los regidores para votar a favor de esta medida. La sesión extraordinaria convocada para tratar el tema no se realizó porque la población demandaba que el alcalde abandonara el cargo. Hubo dos nuevos intentos (22 de octubre y 12 de noviembre), pero no se pudieron desarrollar las sesiones por inasistencia del alcalde. La DP recomendó a la Primera Sala Penal de Huánuco celeridad en el proceso que se le sigue al alcalde. El 3 de enero del 2005, el alcalde, en compañía de unas 20 personas, ingresó al local municipal para tomar posesión de su cargo. Una hora después, unas 200 personas provistas de palos y piedras cercaron el local municipal. La PNP y la Fiscal ingresaron a la MD, pero no pudieron evitar que la población apedrease el local, a pesar del diálogo que intentaron la PNP, MiP y la DP. En la tarde, con refuerzos de Tingo María, la PNP rescató al alcalde y a sus acompañantes. Sin embargo, los proyectiles lanzados por la población produjeron lesiones en algunos efectivos policiales y dañaron el vehículo de la PNP. El 4 de enero, el MiP

realizó una inspección para determinar los daños ocasionados y determinar la seguridad en la zona. Las investigaciones que involucran al alcalde y a pobladores se han ampliado por 60 días más. La MD funciona con normalidad, aunque el alcalde ha acondicionado una oficina de atención en el caserío de Mapresa. El día 22, pobladores de Naranjillo realizaron una marcha pacífica a Tingo María, realizando plantones ante los locales del PJ y MuP, exigiendo celeridad en el proceso judicial abierto contra el alcalde y la revocatoria del mandato de comparecencia. El 25 de marzo, la MD solicitó la presencia de la CGR en la localidad. El equipo de la CGR realizó su trabajo con regularidad. La Procuradora Anticorrupción formó parte del proceso, coordinando las diligencias dispuestas por el PJ. No se han realizado actos de violencia u hostilidad entre pobladores y alcalde. La DP explicó a dirigentes del Frente de Defensa la labor de la CGR y la Procuraduría Anticorrupción. El alcalde continúa despachando desde el caserío de Mapresa. El 04 de Mayo del año 2006 se recibió el pedido de información de la ciudadana Elmith Gonzales de Cevallos quien solicitaba conocer los resultados de la investigación de la CGR con relación a los exámenes practicados en la municipalidad. El 7 de Junio se recibió la respuesta, la CGR se encontraba en la etapa de evaluación y aprobación por parte de la institución. No había cesado aún el principio de reserva (previstos en el numeral 7.3.1 de la Directiva N° 003-2004-CG/SGE) y afirmaron que culminada la etapa darían la información pertinente, hecho del cual fue informada la ciudadana.

La DP informó al Frente de Defensa de los Intereses de Naranjillo acerca los resultados de la investigación, en la cual se dispuso que el Procurador de la Defensoría inicie las acciones legales ya que se había encontrado indicios de responsabilidad del ex alcalde Gunter Laffosse Grijalva. Así, se presentó la denuncia ante el MP, se formalizó la denuncia y se abrió la Instrucción signada con el N° 274-2006, que actualmente se encuentra en trámite ante el Juzgado Penal de Leoncio Prado. Se ha ordenado inclusive mandato de detención contra el ex alcalde quien al mes de enero del 2007 se encuentra como no habido. Cabe precisar que como resultado de las últimas elecciones municipales el actual alcalde es el Sr. José Santos Quiroz Alva. Al mes de febrero del 2007, con la apertura del proceso penal no existe ninguna novedad adicional, el ex alcalde sigue como no habido. De otro lado al haber obtenido respuesta el Frente de defensa con la denuncia formulada por el Procurador Público y encontrándose la investigación en sede judicial, se está a la espera de los resultados.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

46. Tingo María, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado

Actores. Director de la UGEL–Leoncio Prado.

Antecedentes. Denuncias penales contra el anterior director de la UGEL–Leoncio Prado, Manuel Melgarejo, por presuntos delitos contra la administración pública.

Hechos. El 7 de noviembre del 2006 en la mañana (a las 7 a.m., aproximadamente), personas desconocidas ingresaron violentamente al local de la UGEL, maniataron al vigilante y prendieron fuego a las instalaciones. Particularmente se afectó el área de Gestión Institucional (inclusive las computadoras), con lo cual se perdió toda la información de esa área. Las áreas del acceso principal no han sufrido mayor daño. Ante esta situación, el director ha dispuesto una evaluación de lo sucedido, cuya información será comunicada en una próxima reunión. Al cierre del reporte, el caso está siendo investigado por la PNP y el Ministerio Público de Leoncio Prado.

Al mes de enero del 2007, mediante resolución judicial, ha sido repuesto en el cargo el Lic. Manuel Melgarejo Gamboa, quien había sido removido de su cargo el día que sucedieron los hechos. Se encontraba entonces como director el CPC Ageleo Justiniano Tacto, quien tras la evaluación de los hechos realizó la denuncia ante el MP. Se ha dispuesto la investigación pertinente pero a la fecha no ha dado con los responsables del incendio, sin embargo el Sr. Melgarejo Gamboa ha responsabilizado, a través de los medios de comunicación, al CPC Ageleo Justiniano Tacto, por haber dispuesto que las labores de vigilancia sean realizadas por un servidor de más de 60 años de edad. La DP ha solicitado los informes pertinentes al Ministerio Público, quien nos informa que la investigación continúa.

Últimos acontecimientos. El 28 de marzo se llevó a cabo una reunión para tratar la problemática de la UGEL y la falta de pago de los haberes de los profesores contratados y parte de los profesores nombrados. Se llegó a los siguientes acuerdos: 1. Fijar el 4 de abril como fecha límite para que el GR adopte las acciones pertinentes y emita una respuesta sobre el petitorio de los maestros. 2. El GR y la DRE se comprometen a cautelar los procesos para el pago de la deuda de los docentes (la ampliación del calendario de compromisos se aprobo en marzo). 3. Los maestros se comprometen a suspender la medida de fuerza hasta el 4 de abril. 4. El GR dispone la incorporación de cinco representantes del gremio magisterial y autoridades para conformar el equipo tecnico que implementará los acuerdos arribados. Con esto se pudo reanudar las labores el 29 de marzo, se tiene el compromiso de recupera las clases perdidas y se está a la espera de los resultados (hasta el 4 de abril).

ICA

47. Distrito de Marcona, provincia de Nasca

Actores. Trabajadores de las COOPERATIVAS SERCOLIMA, Sto. Domingo Limitada y SOLAR COOPSOL (Cooperativa de Trabajo y Fomento del empleo), que prestan servicios a la Minera Shougang, Minera Shougang, PNP.

Antecedentes. Los trabajadores destacados de la minera Shougang Hierro Peru S.A. demandaron un aumento de 2.90 soles diarios a partir de julio del 2004 y una concesión de 60 casas. Ante ello, la empresa les ofreció un aumento de 2.60 soles y una concesión de 20 casas. Los trabajadores iniciaron una huelga el 1 de julio. Se colocaron en el Km. 2 de la carretera de penetración a Marcona impidiendo el tránsito de vehículos y trabajadores de la minera. Las protestas contaron con el apoyo mayoritario de la población. La DP recomendó a la PNP que su intervención no vulnerase la integridad física de los manifestantes; asimismo, sugirió que se agotasen las vías de diálogo. Se realizaron reuniones entre el Viceministro de Trabajo, la minera y los trabajadores, sin participación de la DP, en las cuales no se llegó a ningún acuerdo. La empresa otorgó, a partir del 24 de julio, vacaciones vencidas y adelantadas a 970 trabajadores (de un total de 1,099). El Ministerio de Trabajo no se puede pronunciar sobre la ilegalidad de la huelga de los trabajadores de la *service* porque se inició cuando sus empleados ya no tenían relación laboral. Tampoco sobre el aumento de sueldos, debido a que esta resolución tendría que ser producto de una negociación colectiva que nunca se inició. A inicios de septiembre, las negociaciones siguen sin prosperar, por lo que la paralización continúa. El Ministerio de Trabajo la considera ilegal. La empresa planteó un arbitraje, propuesta que será analizada por los trabajadores. La huelga fue levantada. Los trabajadores empleados y obreros de la minera Shougang S.A. llevaron a cabo una huelga en junio, de la que obtuvieron un aumento en sus haberes.

Hechos: Desde el 7 de agosto, los trabajadores destacados de la minera bloquearon el Km. 2 de la carretera conocida como Motor Pull, vía que conduce a la mina. Los huelguistas impidieron el tránsito de los vehículos de la empresa Shougang S.A. Ante ello, el 10 de agosto, la PNP efectuó una intervención con 100 efectivos policiales, la cual trajo como resultado ocho heridos (siete efectivos policiales, un civil herido con traumatismo leve, el cual fue trasladado al hospital Rebagliati) y tres civiles detenidos. Ante ello, la DP sostuvo una entrevista con el Comandante PNP el 11 de agosto para investigar sobre su intervención. También se conversó con Julio Ortiz y Andrés Rosado Caro, representantes del Sindicato de Obreros de la minera, quienes manifestaron que habían ido a corroborar el estado de las personas detenidas. Ellos señalan que su reclamo es contra las empresas SERCOLIMA, Sto. Domingo Limitada y SOLAR COOPSOL, por la vigencia de las negociaciones, pagos. Sus dirigentes fueron a Lima a negociar con dichas empresas. Indicaron que la situación es tensa, porque no se soluciona la huelga, y por la presencia de la PNP. A la fecha no se ha producido una nueva intervención policial. El 15 de agosto, representantes de las cooperativas SERCOLIMA, SOLAR COOPSOL y Santo Domingo Limitada firmaron un acta de cese de paralización de labores (iniciada el 7 de agosto) en la Oficina de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo. El 4 de septiembre, la DP recibió una carta del congresista Álvaro Gutiérrez Cueva, quien informó sobre un correo enviado por Rony Cueto Rivera, de SERCOLIMA, en el cual informó sobre la situación de los trabajadores destacados de la minera. El 13 de septiembre, la DP se comunicó con el Director Regional de Trabajo, Daniel Harvey, quien informó que en la fecha se encontraban en Marcona cinco inspectores de trabajo con la finalidad de verificar las condiciones de los trabajadores. El 2 de octubre, el Director Regional de Trabajo señaló que en Lima se estaría elaborando el informe de los eventos hallados durante la supervisión.

Últimos acontecimientos. El Ministerio de Trabajo canceló los permisos de funcionamiento de 300 'services' por incumplir las normas establecidas para una empresa de intermediación laboral, entre los que se encontraban algunas que prestaban servicios a la empresa minera Shougang. Así lo anunció el martes 20 de marzo la titular del sector, Susana Pinilla. Con esta acción, 162 trabajadores de la minera Shougang fueron incorporados directamente a sus puestos de trabajo sin un contrato de 'service'.

ICA Y LIMA

48. Pampa Melchorita, en el límite de las provincias de Cañete (Lima) y Chincha (Ica)

Actores. Empresa Purú LNG, MuP Chincha. Otros. CGTP, SUTE, Frente Regional de Defensa Territorial.

Hechos. La empresa PERU LNG decidió adquirir un terreno de 522 Hás para construir una planta de licuefacción de gas para su exportación, ubicado en Pampa Melchorita (Km. 169 de la Panamericana Sur), entre las provincias de Cañete y Chincha. Como se trata de terrenos eriazos que pertenecen al Ministerio de Agricultura (es decir, destinado a fines agrícolas), el área tuvo que ser transferida a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). El 27 de julio del 2003, una resolución autoriza la venta del terreno de la SBN a

Hunt Oil para la construcción de la planta. El Presidente del GR Lima, la SBN y representantes de la empresa acordaron que los terrenos se transfirieran al GR Lima en el marco del proceso de descentralización para que luego estos se los transfirieran al consorcio. Las normas emitidas por la MuP Chíncha (Ordenanza Municipal N° 043-2003-MPCH, del 22 de diciembre del 2003) y el GR Lima (Ordenanza Regional N° 001-2004-CR/RL del 7 de enero del 2004, que declara ineficaz la anterior) generaron un clima de enfrentamiento, pues la MuP Chíncha sostiene que la mencionada zona está dentro de los límites de Chíncha. El 8 de abril del 2004, la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la PCM (DNDT-PCM) emitió un informe técnico que establece la quebrada de Topará como límite entre las provincias de Cañete y Chíncha, por lo que la zona en litigio queda incluida en Cañete. El 3 de mayo se produjo un enfrentamiento entre los pobladores de Nuevo Ayacucho, ubicado en la zona en conflicto, por lo que un grupo de moradores solicitó resguardo policial a la Subprefectura de Chíncha. La PNP-Ica instaló una comisaría móvil en el lugar con 12 efectivos. El 11 de mayo, el alcalde de Chíncha convocó a una marcha, en coordinación con un grupo de alcaldes Distritales, distintos gremios (CGTP, SUTE), pobladores de Chíncha y los congresistas Miguel Devéscovi y Juan Ramírez Canchari. La marcha por la carretera Panamericana fue pacífica y se disolvió luego de una coordinación entre el alcalde de Chíncha y la PCM. El 5 de junio, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) convocó al alcalde de Chíncha a una reunión con organizaciones sociales para exponer su punto de vista. El 7 de junio, funcionarios de la DP sostuvieron una reunión con la DNDT-PCM para conocer su posición y sugerir que se informase a la población el contenido del Informe 001, cuestionado por las autoridades de Chíncha. El 10 de junio, el Presidente Regional de Ica convocó a una reunión de emergencia a autoridades de Ica, alcalde de Chíncha, organizaciones de base, y congresista Miguel Devéscovi. Allí se conformó el Frente Regional de Defensa Territorial, presidido por el Presidente Regional, e integrado por alcaldes Provinciales, gremios y organizaciones sociales. Este Frente convocó un Paro Regional de 24 horas para el día 22 de junio que fue acatado en toda la región (incluyendo instituciones públicas) con manifestaciones en todas las provincias de Ica lideradas por los respectivos gobiernos locales. En Chíncha, los manifestantes bloquearon la carretera desde la entrada de Grocio Prado hasta la salida de Chíncha Baja. No se reportaron detenciones ni acciones violentas. El día del paro, la PCM remitió al Congreso de la República un proyecto de ley, lo que causó malestar en la población por la coincidencia de fechas; por su parte, el congresista Ramírez Canchari informó que el Congreso ha conformado una comisión para revisar la actuación de la Oficina de Demarcación Territorial. La Comisión de Descentralización y Modernización del Estado del Congreso de la República archivó el proyecto de Ley que fijaba los límites territoriales entre Chíncha y Cañete al considerar sesgado el informe de la DNDT-PCM. El congresista Jorge del Castillo planteó que la planta de licuefacción del proyecto sea construida en la zona en conflicto considerando que la mano de obra vendrá de ambas provincias, aunque los tributos municipales serán cobrados por la MuP Cañete. Esta propuesta ha sido aceptada por las Municipalidades, pero el Frente de Defensa de los Intereses de Chíncha no lo ha aceptado. El 18 de octubre, congresistas de la Comisión Pro Inversión, Presidentes Regionales de Lima e Ica, alcaldes Provinciales de Chíncha y Cañete y representantes de la empresa Perú LNG, suscribieron un acta. En ella, entre otros temas, la Comisión Pro Inversión se comprometió a proponer un proyecto de ley de alcance general que permita solucionar disputas por predios ubicados en zonas cuya jurisdicción sea reclamada por más de un Gobierno regional. El 5 de noviembre se publicó la Ley N° 28374 que establece un mecanismo de distribución de recursos en el caso de adjudicación directa de predios en el ámbito de desarrollo de proyectos de interés nacional (como la instalación y operación de plantas de procesamiento de gas natural). En diciembre, el Congreso archivó el proyecto de ley N° 10861/2003-PE que establece la delimitación territorial entre Chíncha y Cañete. El Presidente Regional de Lima presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 28374 que dio solución al problema por demarcación, decisión que fue cuestionada por su partido. El 10 de enero del 2005, la Junta de Portavoces del Congreso de la República actualizó el proyecto de Ley que había sido archivado. El 17 de enero se realizó un paro en Chíncha en protesta por esta decisión. El Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente del GR Lima, contra los efectos de la Ley N° 28374, norma que garantiza el inicio de la construcción de la planta para la exportación de gas, hasta que se definan los límites entre Chíncha y Cañete. El TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley N° 28374 presentado por Miguel Ángel Mufarech en representación de 5,716 ciudadanos, por lo que dicho artículo mantiene su validez. El fallo, además, exhorta al Congreso de la República a emitir la ley de demarcación territorial en el plazo más inmediato posible para otorgar estabilidad jurídica a la inversión. El 28 de abril, la Comisión de Descentralización del Congreso encargó a una subcomisión mixta la elaboración de un nuevo proyecto de ley que determine la demarcación territorial entre las provincias de Chíncha (Ica) y Cañete (Lima). Con la finalidad de asegurar la imparcialidad de la nueva propuesta, se tendrá en cuenta que los legisladores del grupo de trabajo no pertenezcan a ninguna de las dos jurisdicciones. Además participarán en la comisión representantes de la Oficina de Demarcación Territorial de la PCM. Durante el mes de noviembre, el presidente regional de Ica anunció que demandará

la nulidad de la Resolución Suprema N° 065-2006 del MEM, mediante la cual se entrega la zona de Pampa Melchorita a la provincia de Cañete.

En el mes de febrero del 2007, el alcalde de Chíncha promovió y convocó a personas notables de la provincia para analizar el problema limítrofe.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes. El proceso de análisis del problema limítrofe continúa.

JUNÍN

49. Anexo Alto Unine, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo

Actores. Asociación Agroindustrial Ganadera Juan Santos Atahualpa, Asociación Agroindustrial Alto Unine.

Hechos. El 9 de noviembre de 1999, representantes de la Asociación Agroindustrial Ganadera Juan Santos Atahualpa denunciaron a un grupo de personas por delito de usurpación de terrenos. Después de las investigaciones, el Juez Mixto de Satipo condenó a Christian Aldunate Rivera, dirigente de los segundos, a dos años de pena privativa de la libertad. La sentencia fue apelada, pero el 30 de marzo del 2004 la Sala Mixta Descentralizada de La Merced la confirmó, por lo que dispuso el lanzamiento de las personas que ocupan los terrenos de la Asociación. En noviembre del mismo año, en cumplimiento de la sentencia judicial y con apoyo de la PNP, se intentó desalojar a la Asociación Agroindustrial Alto Unine. En el acto se produjo un enfrentamiento con el resultado de dos muertos y un herido. El 6 de diciembre, la DP promovió una reunión en la que participaron instituciones públicas involucradas en el problema de tierras (Agencia Agraria, PETT, INRENA, PNP, autoridades locales y prensa), en la que se acordó convocar por separado a los grupos en conflicto para proponerles fórmulas de conciliación. También se planteó que la MD Río Tambo elabore un Plan de Emergencia para solucionar, con el PETT, otros problemas similares. El 13 de diciembre, la DP y el MD se reunieron con la Asociación Alto Unine, y al día siguiente con la Asociación Juan Santos Atahualpa. Ambas partes aceptaron reiniciar el diálogo. El 16 de diciembre, la DP y el Comisionado por la Paz y el Desarrollo realizaron una visita conjunta al Anexo. La DP está recogiendo información (propiedad, posesión, concesión forestal) sobre los terrenos que constituyen materia de conflicto, la cual es aportada por las partes y las instituciones involucradas. Durante el mes de mayo, la Presidenta de la asociación Juan Santos Atahualpa solicitó a la DP su participación como intermediario con el fin de entablar un diálogo entre las partes y dar inmediata solución al conflicto. El 5 de mayo, la DP con los representantes de la MD, de la Oficina del Comisionado de la Paz y Desarrollo y el Gobernador del Distrito Río Tambo se reunieron con los representantes de la Asociación "Alto Unine", logrando como resultado a la apertura al diálogo. El 1 de junio, la DP acompañó al señor Pedro Unchupayco Camposo con el fin de que éste accediera a sus terrenos. Sin embargo, se tuvo conocimiento de que no se le permitió ingresar, siendo impedido de hacerlo por los participantes de la Asociación "Alto Unine", quienes desconocieron su compromiso asumido. Durante septiembre, la presidenta de la Asociación Juan Santos Atahualpa solicitó al juez el desalojo de los invasores.

Al mes de febrero del 2007, los miembros de la asociación Alto Unine continúan en posesión de las tierras en conflicto, en las que tienen plantaciones de café. Por otro lado, el presidente de la asociación Santos Atahualpa sigue realizando los trámites judiciales para desalojarlos. No se han registrado nuevos enfrentamientos.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

50. Distritos de Pangoa y Mazamari, provincia de Satipo

Actores. Pobladores de Pangoa y Mazamari.

Otros. INEI

Hechos. Los pobladores de Pangoa se manifestaron en contra de la realización del Censo Nacional que realizaba el INEI por considerar que el mapa censal utilizado mutilaba el territorio del distrito en unos 1,800 metros cuadrados. Por esta razón, el 18 de julio del 2005, los pobladores de Pangoa iniciaron un paro indefinido y se enfrentaron a los pobladores de Mazamari. El día 19 continuaron los enfrentamientos, dejando 39 heridos de Mazamari, 49 de Pangoa y 10 de la PNP. Todos los heridos fueron atendidos en el Hospital de Pangoa y el Centro de Salud de Mazamari. El INEI decidió suspender la realización del censo en ambos distritos. El 4 de agosto, el GR Junín convocó a una mesa de diálogo en la que participaron la alcaldesa de Satipo, los alcaldes de Mazamari y Pangoa con sus respectivas delegaciones, y funcionarios del Instituto Nacional Geográfico, Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, INEI y la DP, sin llegar a acuerdo alguno. El día 11, el Jefe del INEI anunció que dos funcionarios de dicha entidad viajarían a Satipo para proponer a los alcaldes que la zona de conflicto fuese censada por personal del distrito de Río Tambo y que los datos obtenidos quedasen en reserva hasta que se determinen definitivamente los límites

de los distritos. Estos funcionarios se contactaron con los alcaldes a partir del 19 de agosto, sin llegar a acuerdo alguno con las autoridades de Pangoa quienes insistieron en continuar con el censo empleando el mapa censal de 1993. El día 22, a petición de la MD Mazamari, el INEI reinició el censo en la zona urbana del distrito, no pudiendo ingresar a las zonas rurales porque la población de Pangoa había desplegado piquetes para impedir el ingreso de censadores a territorios que consideran suyos. Durante septiembre, el INEI suspendió indefinidamente los censos de población y de vivienda en Mazamari y Pangoa. La decisión se adoptó tras una larga sesión en la cual las autoridades de los dos distritos no se pusieron de acuerdo sobre las cuatro propuestas planteadas por el INEI para la reanudación del empadronamiento. El 11 de octubre, el INEI informó a la DP sobre las gestiones realizadas con la finalidad de superar el conflicto surgido entre ambos distritos y lograr el empadronamiento en el distrito de Pangoa, ninguna de las cuales logró el resultado previsto.

Al mes de febrero del 2007 no se han desarrollado gestiones o reuniones para resolver el conflicto. No existen enfrentamientos pero se trata de un tema susceptible que aún podría causar enfrentamientos. Los alcaldes de Mazamari y Pangoa han terminado su gestión desacreditados y con cuestionamientos a raíz de este conflicto.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

LA LIBERTAD

51. Distrito de Virú, Provincia de Virú

Actores. Comité Unificado de los Intereses de Virú (CUIVI) y Empresa Sedalib S.A. Pobladores de Virú

Hechos: En los primeros días de agosto del 2005, miembros del Comité Unificado de los Intereses de Virú-CUIVI tomaron los locales de la empresa Sedalib S.A., exigiendo asumir la administración del servicio del agua y alcantarillado, pues no están de acuerdo con las tarifas y las cuatro horas de abastecimiento del servicio de proporcionadas por la empresa. El 8 de agosto, la Fiscal Mixta Provincial verificó que, en estas condiciones, el agua era tratada por los propios pobladores, por lo que la DP recomendó la adopción de medidas convenientes para prevenir riesgos contra la salud. El día 11, Sedalib S.A. denunció, por daños a la propiedad, a los representantes del CUIVI y presentó una acción de amparo ante el Juzgado Mixto de Virú. La MuP Virú informó que, en julio, acordó iniciar los trámites para que la administración del servicio de agua y alcantarillado sea asumida por la MuP. Pese a los esfuerzos realizados, los integrantes del CUIVI continuaron con la toma del local. El día 12, la DP organizó un encuentro, pero el CUIVI se negó a participar. El día 23, integrantes del CUIVI bloquearon las calles principales de Virú durante 24 horas. Durante septiembre, la empresa SEDALIB S.A. se dedicó a organizar la transferencia de la administración del servicio de agua y alcantarillado a la MuP Virú, la cual emitió la Ordenanza Municipal N° 063-MPV que constituye una unidad de gestión para administrar el servicio de agua y alcantarillado. El 12 de octubre, un grupo encabezado por el alcalde intentó retomar el local municipal. El enfrentamiento contra los integrantes del CUIVI produjo daños materiales y dos regidores resultaron heridos. La Fiscal Provincial denunció penalmente a los integrantes del CUIVI y los responsables de la toma del local municipal, el cual continúa cerrado. El Fiscal Adjunto informó que presentó denuncia penal contra la empresa SEDALIB S.A. (por suministro de agua presuntamente contaminada) y contra los integrantes del CUIVI (por impedimento del ejercicio municipal). A solicitud del alcalde Provincial, la DP entró en contacto con las partes para conocer su disposición para la conformación de una mesa de diálogo. El 24 de enero del 2006 los trabajadores de la MuP, junto con el Notario Público de Virú, ingresaron pacíficamente a las instalaciones del local municipal. No hubo resistencia de los integrantes del CUIVI, quienes resguardaban el local. Se propuso reiniciar la atención municipal el 26 de enero. Los problemas de la administración del servicio de agua potable aún no se habían solucionado. El 27 de febrero, un funcionario de la MuP informó a la DP que actualmente en el local municipal están funcionando la Oficina de Registros Civiles, DEMUNA y Asesoría Legal. Las demás oficinas se encuentran funcionando en otro local (perteneciente a la MuP) mientras la Compañía de Seguros hacía el inventario de los daños.

En visita de supervisión realizada a la localidad de Virú, personal de la Defensoría verificó el funcionamiento de los locales municipales. Sin embargo, se recibió información de que SEDALIB S.A había interpuesto denuncia penal contra los integrantes del CUIVI por haber tomado sus instalaciones desde donde brindan el servicio de agua potable para la localidad. Si bien ya no existe enfrentamiento entre los representantes del CUIVI y la Municipalidad Provincial de Virú, consideramos que este conflicto debe ser considerado como latente por el grado de intransigencia de los primeros, que ante cualquier resolución judicial adversa retomarían acciones violentas a fin de persistir con el proceso de brindar el servicio de agua y alcantarillado a través de la denominada Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS).

Al mes de enero de 2007 la denominada JASS continúa administrando el servicio de agua y alcantarillado en la provincia de Virú, pues la denuncia realizada por la empresa SEDALIB S.A. aún esta en trámite. Ante

esta situación la nueva administración de la Municipalidad Provincial de Virú ha convocado a una reunión a los representantes del JASS y del CUIVI, a fin de proponerles nuevamente la constitución de una unidad de gestión para administrar el servicio de agua y alcantarillado, la cual estará conformada por representantes de la población, de la Municipalidad, JASS y CUIVI, de esta manera la administración de los servicios de saneamiento se realizarán dentro del marco legal. Esta reunión, se llevó a cabo a las 4:00 pm del día 22 de enero del 2007.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

LAMBAYEQUE

52. Provincia de Chiclayo

Actores. Municipalidad Provincial, comerciantes informales del Mercado Modelo.

Hechos. El 28 de abril del 2004, luego del desalojo de comerciantes del Mercado Modelo, los comerciantes informales secuestraron durante 20 minutos al Gerente de Servicio de Saneamiento de la MuP, exigiendo la paralización de los trabajos de remodelación en las inmediaciones del mercado. También intentaron tomar el local municipal. Semanas después, los comerciantes informales ocuparon nuevamente las calles de las que fueron desalojados. El 7 de junio, la DP recomendó al Alcalde convocar al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para tratar el tema. La Cámara de Comercio conformó una Comisión Multisectorial integrada por Colegios Profesionales, Defensa Civil, MuP, comerciantes y la DP. La Comisión evaluó la problemática y planteó alternativas de solución. Como los comerciantes continuaron ocupando las calles adyacentes al mercado Modelo, los trabajos de remodelación fueron paralizados. La MuP no intentó un nuevo desalojo pues se comprometió a no hacerlo hasta que la Comisión presentase su informe final. Este fue presentado el 30 de agosto. Una de sus sugerencias principales fue la reubicación de los comerciantes informales en un plazo de 90 días. El 13 de septiembre, la MuP creó una Comisión de Regidores encargada de implementar las recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión Multisectorial. Mediante Resolución de Alcaldía N° 1010-2004, la MuP dispuso la reubicación del comercio informal adyacente al Mercado Modelo. El 7 de enero del 2005, el Alcalde Arturo Castillo Chirinos (por Acción Popular) convocó a una reunión de la Comisión Multisectorial para comunicar la propuesta de reubicación de los comerciantes informales elaborada por la Comisión de Regidores. Allí se acordó otorgar un plazo de 72 horas a los comerciantes informales para que iniciasen dicho proceso, pues de lo contrario serían desalojados. Los comerciantes informales declararon inaceptable esta decisión y solicitaron la ampliación del Mercado y la formalización de los comerciantes; también realizaron marchas de protesta por las la ciudad manifestando su rechazo a la reubicación. La MuP no ejecutó ninguna acción de desalojo. Por su parte, la Federación de Comerciantes Ambulantes de Lambayeque inició, en febrero del 2005, el proceso de asignación a sus miembros de lotes de terreno en el proyecto del futuro mercado "Sergio Choquehuanca Santos", cumpliendo de esta manera con una de las recomendaciones sugeridas por la Comisión Multisectorial. El 4 de julio, la Dirección Regional de Defensa Civil de Lambayeque (INDECI) entregó al Alcalde las recomendaciones técnicas resultantes de las visitas de inspección realizadas en el Mercado Modelo de Chiclayo, recomendando que se cumpliesen con carácter obligatorio, imprescriptible e inmediato. En agosto, la DP recomendó al Alcalde dar cumplimiento a las observaciones técnicas formuladas por INDECI para el mejoramiento del Mercado Modelo. El 29 de septiembre, la Dirección Regional de Defensa Civil de Lambayeque realizó una visita de inspección al mercado, informando que es un local con riesgo alto, especialmente por el alto nivel de turgurización existente (aún cuando se han realizado mejoras en parte de su infraestructura); también reportó la problemática de la Compañía de Bomberos N° 27 de Chiclayo, aledaña al mercado, debido al comercio ambulatorio en la zona. Las recomendaciones emitidas al Gobierno Provincial de Chiclayo fueron calificadas de "carácter obligatorio, imprescriptible e inmediato". El día 26, la DP recomendó al Alcalde dar cumplimiento inmediato a dichas recomendaciones. El 20 de noviembre, el Procurador Público de la MuP Chiclayo presentó ante la Fiscal de Prevención del delito de Chiclayo una denuncia penal contra los comerciantes informales que se encuentran instalados indebidamente en la vía pública de las zonas adyacentes del Mercado Modelo por los delitos contra la vida, integridad y salud pública. Dicha acción penal tiene como propósito que los comerciantes se retiren de manera pacífica. El día 24, el gerente general de la MuP Chiclayo invocó, mediante comunicado público, al retiro de las vías públicas en un lapso de 24 horas. Se dispuso el local del Mercado José Balta para la reubicación. Sin embargo, los comerciantes continúan en la vía pública.

Al mes de febrero del 2007, no se ha reubicado a los comerciantes del mercado modelo. El actual alcalde de la municipalidad no está gestionando la reubicación, así las inmediaciones está siendo ocupadas por otros comerciantes informales.

Últimos acontecimientos. Desde el mes de marzo el GR está reubicando a los comerciantes informales que se encuentran en las afueras del Mercado Modelo. La reubicación continuará a pesar de la negativa de los comerciantes.

LIMA

53. Distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete,

Actores. Municipalidad Distrital de Cerro Azul, Compañía Constructora HV, Asociación Deportiva Campistas de Chepeconde.

Otros. Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete.

Antecedentes. Desde hace 20 años, la Asociación de Campistas de Chepeconde acampa en dicha playa. La Empresa HV se encuentra construyendo casas de playa en esa localidad.

Hechos. El 5 de enero del 2006, la Asociación presentó una queja contra la MD Cerro Azul por el retiro de sus campers rodantes y carpas el 20 de diciembre del 2005. Esto viola la medida cautelar emitida por el Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete, que dispone el libre tránsito por el camino carrozable en el Km. 119.2 de la Panamericana Sur. El día 21, el personal de Construcción Civil de la empresa volvió a impedir el ingreso a la playa a la Asociación y a la Fiscalía de Prevención del delito de Cañete. Se está haciendo una investigación preliminar en la 3ª Fiscalía Provincial Penal de Cañete. La DP solicitó informe a la MD y al Juzgado para garantizar el libre tránsito por la mencionada vía. Al respecto la MD respondió que el 26 de enero requirió cumplir dicha medida cautelar a la Empresa HV Contratistas; y el Juzgado respondió que el 12 de enero del 2006 tomó conocimiento del incumplimiento de la medida cautelar, por lo que el día 19 multó a la Constructora HV con seis Unidades de Referencia Procesal. El día 26 la DP recibió de la asesora de la MD Cerro Azul fotos y un plano del camino carrozable, espacio aprobado por el INC como zona arqueológica. El día 29, el Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete permitió el tránsito vehicular y peatonal a la vía.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

54. CC Jicamarca, distrito de Ate, provincia de Lima

Actores. Anexo 18 de la CC Jicamarca, pobladores.

Hechos. Los días 15, 19 y 21 de febrero, unas 150 personas ingresaron al anexo 18 de la CC Jicamarca con la intención de apropiarse de las tierras. Como resultado del enfrentamiento hubo quema de chozas, robo de enseres y heridos. Los pobladores atacados pidieron garantías a la Prefectura, la cual solicitó la presencia de la PNP (al parecer, este no llegó). El representante de los pobladores del anexo 18 pidió la intervención de la DP, la cual ha efectuado recomendaciones a la Prefectura y la Comisaría del sector. El 2 de marzo, la Prefectura otorgó garantías personales y posesorias a Juan Aroni Pillaca, Presidente de la Junta de Administración del Local del Anexo 18 Carapongo Alto Matahuey de la CC Jicamarca. Las garantías posesorias fueron otorgadas sobre un terreno de 295 Hás (eriazos y accidentado) con límites y colindancias determinados, hasta que la autoridad jurisdiccional o administrativa competente, de ser el caso, resuelva el asunto. La PNP y la DP realizan una supervisión permanente de la situación en la zona. Durante mayo se han generado pequeños incidentes entre las partes en conflicto que han sido controlados por la PNP. Por otro lado, la población del Anexo 22 informó que es agredida y amenazada por personas allegadas a Germán Cárdenas León, supuesto propietario, quien exige que desalojen sus viviendas. No se han presentado nuevos incidentes, aunque se mantiene un permanente resguardo policial. Ha disminuido la presencia policial en la zona al haber cesado los enfrentamientos entre pobladores del sector. El Poder Judicial continúa abocado al conocimiento de las denuncias penales formuladas con relación al tráfico de tierras. En el Anexo 18 de la Comunidad Campesina de Jicamarca se mantiene latente la posibilidad de futuros enfrentamientos por ser una zona donde frecuentemente hay invasión y tráfico de tierras.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

LORETO

55. Saramiriza, distrito de Manseriche, provincia de Alto Amazonas.

Actores. Presidencia del Consejo de Ministros, Frente de Defensa de Datem del Marañón (FREDESAM), Presidente. José Valera, Frente de Defensa de los Pueblos Indígenas y Mestizos del distrito de Morona (FREDEPIM), Empresa Plus Petrol, Comunidades Indígenas de la provincia del Datem del Marañón, Gobierno Regional de Loreto.

Antecedentes. En enero del 2002, los pueblos indígenas Aguaruna y Huambisa tomaron la carretera Amazónica y retuvieron a funcionarios de Transporte y Comunicaciones. Se suscribió un acta, por la cual dicho Ministerio se comprometió a mantener y rehabilitar la carretera Reposo–Bagua–Saramiriza. El 7 de noviembre del 2004, dirigentes del Frente de defensa de Saramiriza, de los Pueblos Indígenas y de los Frentes de Defensa de la provincia de Condorcanqui se reunieron para discutir las acciones a tomar frente al incumplimiento del acta firmada por el Ministerio de Transporte para la construcción de la carretera. Se acordó realizar un paro de 48 horas a partir del 12 de diciembre para exigir el cumplimiento del acta suscrita en enero del 2002. El 10 de diciembre, en Bagua Chica, se reunieron el congresista Alcides Llique y representantes del Ministerio de Transportes, Provías y del Comité de Gestión de Carretera y Desarrollo de los Pueblos Indígenas e Hispanos de Bagua, Condorcanqui y Alto Amazonas. En esta reunión se resolvieron las demandas del Comité pero, posteriormente, los representantes de la provincia de Alto Amazonas desconocieron los acuerdos ya que no se atendieron sus demandas (creación de la provincia de Alto Maraón e instalación de una oficina del Banco de la Nación en San Lorenzo). El Frente de Defensa del Datem del Maraón (FREDESAM) asumió la propuesta del paro que se inició el 13 de diciembre, el cual fue acatado en San Lorenzo. Ese día detuvieron las operaciones de bombeo de petróleo a través del oleoducto y dieron plazo hasta el 15 de diciembre para contar con la presencia de una Comisión de Alto Nivel; al no llegar, el 15 de diciembre ingresaron a la fuerza a las estaciones N° 5 y Morona, cortando la energía eléctrica. La escasa dotación policial no pudo contener este hecho, por lo que refuerzos fueron enviados desde Bagua. Ese mismo día, la DP se comunicó con la PCM manifestándoles que el problema surgía por la aparición de nuevas demandas que no fueron atendidas en la reunión del 10 de diciembre en Bagua. El 16, un asesor del premier informó a la DP que el Gobierno, luego de evaluar la situación con el Presidente Regional de Loreto, designó una Comisión de Alto Nivel para dialogar con el FREDESAM, la cual planteó vías para darle curso a sus demandas. El 17 de diciembre del 2005 se firma un acuerdo entre el Presidente Regional de Loreto y FREDESAM, en el cual el GR se compromete, entre otras cosas, a que el Banco de la Nación empiece a funcionar desde febrero del 2006.

Hechos. El 27 y 28 de enero del 2006 se acató un paro organizado por el Comité Central de Lucha por la Amazonía debido al incumplimiento en la construcción de las carreteras. El día 28, se firma el Acta de Reunión de Coordinación sobre la problemática planteada por el Comité Central de Lucha y Defensa de la Amazonía Peruana, entre dicho comité y la PCM. Dicho acuerdo no fue suscrito por el FREDESAM, por lo cual desde ese día, los pobladores del Datem del Maraón acatan una huelga indefinida exigiendo el cumplimiento de sus demandas: derecho a la territorialidad integral, instalación del Banco de la Nación en San Lorenzo, cumplimiento de los contratos firmados con Plus Petrol, construcción de puentes en el tramo Saramiriza–Puente Nieva, rechazo a la firma del TLC, creación del I.S.T. San Lorenzo, implementación de programas alternativos de producción agropecuaria, asesoría técnica para el fondo ganadero y lechero, créditos para sembríos. El día 31, aproximadamente 350 pobladores de diferentes comunidades indígenas (siete pueblos en total), organizados por el FREDESAM y el FREDEPIM, tomaron el frontis de la estación N° 5 y la de Morona (N° 4). Por otro lado, la población de Manseriche y Barranca han paralizado sus actividades e impiden la salida hacia Yurimaguas. Reclaman la presencia de una Comisión de Alto Nivel del Gobierno Central, sostienen que el Gobierno Regional de Loreto no ha cumplido con los acuerdos asumidos el 17 de diciembre del 2004. El 1° de febrero la DP informa que en el Gobierno Regional de Loreto formó una comisión para intervenir en este conflicto. Sin embargo, la población espera la llegada de una Comisión de Alto Nivel. El día 2 de febrero, la DP de Loreto emitió un oficio al Presidente Regional para solicitar su intervención en la resolución del conflicto y designó una comisión que partiría a San Lorenzo. El día 6, la DP se comunica con el sub prefecto de la Provincia de Datem del Maraón, Julio Panduro Flores, quien refiere que el día 3 llegaron a la Estación de Bombeo N° 5 la consejera regional Mariela Van Heurk Barrionuevo y el gerente general del Gobierno Regional, José Luis Univasos Muñoz, quienes buscaban tratar la plataforma de lucha de los pobladores. Sin embargo, los pobladores no quisieron conversar con ellos, seguían reclamando la presencia del Presidente Regional y una Comisión de Alto Nivel del Gobierno. Ambos se quedaron en la Estación de Bombeo hasta las 6pm del día 4. El mismo día, la DP se comunicó con José Valera, presidente del FREDESAM, quien refirió que dicha comisión no traía soluciones concretas a los pedidos. Confirmó que el día 7 llegaría una comisión desde Lima. Asimismo informó que la Fiscal de Alto Amazonas llegó a un acuerdo de paz entre ellos y la policía, a menos de que la Policía comience las agresiones. El jefe de la IV DITERPOL, Gral. Benigno Gregorio Román Pinto Huanqui, informó a la DP del envío de 50 efectivos de Chachapoyas y Bagua a la zona de Saramiriza y advirtió que la Estación de Bombeo N° 4 estaba siendo rodeada por 10 personas. Sin embargo, no había sido tomada. El día 7 se produjo un enfrentamiento entre la policía y los pobladores en la Estación de Bombeo N° 5. Por lo que llegaron al Centro de Salud de Saramiriza cinco heridos (dos indígenas y tres mestizos) y el cadáver de Mario Vargas Paredes; al parecer, éste ciudadano falleció a consecuencias de un paro cardíaco por efecto de los gases lacrimógenos. El día 8, la DP dispuso el traslado de dos comisionados para investigar las circunstancias de los hechos y mediar en el conflicto.

En comunicación con la Fiscal Adjunta de la Primera Fiscalía de Alto Amazonas–Yurimaguas se supo que la investigación sobre los sucesos ocurridos en la Estación N° 5 de PETROPERÚ se encuentra en su fase preliminar a cargo de la comisaría de la PNP de esa ciudad. El atestado policial se estará evacuando a más tardar a fines del mes de marzo. La DP recomendó celeridad en el proceso en vista de que, desde el 7 de febrero –fecha en que ocurrieron los hechos– ya ha transcurrido un tiempo prudencial.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

56. Saramiriza, distrito de Manseriche, provincia de Alto Amazonas

Actores. Junta Vecinal de Saramiriza, alcaldesa Nelly Quiñónez Risco por Acción Popular (25.12% de los votos) obtuvo cuatro regidores y uno es del Movimiento Independiente de los Pueblos Indígenas y Campesinos (MIPIC), regidores y trabajadores de la MD.

Hechos. El 12 de abril del 2005, miembros de la Junta Vecinal del Distrito de Saramiriza tomaron el local de la MD; desde esa fecha no permiten el ingreso de la alcaldesa, Nelly Quiñónez Risco, ni a los Regidores y trabajadores. La alcaldesa es acusada por irregularidades en su gestión, por no brindar información sobre la gestión municipal, actividades y viajes, y por falta de coordinación con la población, por lo que exigen la presencia de una comisión de CGR para realizar una auditoria a la gestión municipal. El día 19, una comisión encabezada por el Prefecto e integrada por funcionarios de CGR Iquitos, PNP y MiP llegó al distrito para intentar reabrir el local, sin lograrlo. El día 22, comisionados de la DP visitaron la zona. En diálogo con dirigentes de la Junta Vecinal, ésta reiteró su solicitud de contar con una comisión de CGR Lima; la DP informó que ésta no viajaría mientras el local municipal se encontrara cerrado. La DP propuso reabrir el local municipal, previo inventario de bienes por parte del MiP, para facilitar la llegada de la CGR; para ello se comprometió a efectuar las coordinaciones necesarias. Al día siguiente, en diálogo con la alcaldesa, se le recomendó designar al funcionario encargado de brindar información, implementar mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, conformar el CCL, realizar dos audiencias públicas de rendición de cuentas, y fortalecer la participación social en la elaboración del presupuesto participativo. La DP también propuso a ambas partes suscribir un compromiso de no agresión, idea que fue acogida por la Junta Vecinal y la alcaldesa. El día 23, la DP se reunió con delegados de ambas partes para suscribir un compromiso de no agresión.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

57. Distrito de Pastaza, provincia de Alto Amazonas

Actores. CN de la etnia Candoshi, pobladores de Ullpayacu.

Hechos. Miembros de las CN de la etnia candoshi denunciaron que los colonos y mestizos de Ullpayacu, capital del distrito de Pastaza, realizan labores de pesca ilegal en las cochas de las CN, lo que ha originado conflictos. Estos hechos fueron denunciados a las autoridades locales. En el año 2004, población mestiza y colonos retuvieron a 10 indígenas candoshi, entre ellos al regidor de la MD Iwaki Simón Yanadari, al profesor Sundi Simón Camaranti y ocho alumnos secundarios. Estas personas fueron impedidas de abandonar el pueblo después de que, dos semanas antes, apareciera el cadáver del señor Flin Chino en el lago Rimachi (aparentemente, miembro de una CN quechua) y que el señor Jorge Ríos fuera herido de bala (la población mestiza culpa de estos hechos a las CN candoshi). Anunciaron que la retención duraría hasta que los candoshi entreguen a los autores del homicidio y del ataque con arma de fuego. El 24 de noviembre llegó a la localidad la Fiscal Adjunta Provincial de Alto Amazonas acompañada por cinco policías para investigar los hechos denunciados. Esa noche, la Fiscal explicó a la población ubicada en el frontis de la MD las investigaciones que iba a desarrollar el MiP, lo que calmó los ánimos de la población. La Fiscal tomó manifestaciones, incluyendo a las personas retenidas. La Fiscal informó a la DP que habría identificado a los presuntos autores de los mencionados delitos, y que se acordó con los dirigentes nativos que los mismos serían trasladados a la CN Mushacarusha, donde serían recogidos por la PNP que, por razones de seguridad, los llevaría a San Lorenzo. El alcalde informó a la DP que la situación volvió a la calma y los alumnos candoshi asistieron a su centro educativo, mientras que el regidor y el profesor se encuentran en la MD colaborando para que el conflicto se solucione.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

MOQUEGUA

58. Distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto

Actores: Frente Agrario, cuyo representante es el señor Alex Sosa Ocampo, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua, representado por Juan Rodríguez Linares, y el Frente Amplio de Defensa de los

intereses de Moquegua, representado por Natalia Pilco. De igual forma han participado diversas organizaciones agrarias y juntas de riego.

Antecedentes: Desde el año 2003 se producen enfrentamientos entre Arequipa y Moquegua por el uso de las aguas de la Represa Pasto Grande, debido a que el caudal del agua disminuye en la época de estiaje (de octubre a enero). Mediante Resolución Ministerial N° 745-2005-AG del 20 de septiembre del 2005 se resolvió aprobar la delimitación del ámbito jurisdiccional del Distrito de Riego Tambo-Alto y de sus subdistritos de Riego Tambo y Alto Tambo, estableciéndose como sedes de funcionamiento de los subdistritos de Riego de: Tambo: La Curva en Arequipa y Alto Tambo: Omate en Moquegua. Así mismo, se estableció como sede de funcionamiento de la Administración Técnica del Distrito de Riego Tambo-Alto Tambo el distrito de la Curva, provincia de Ilay, Arequipa. Mediante Resolución Ministerial N° 758-2005-AG del 22 de septiembre del 2005 se resolvió aprobar la delimitación del ámbito jurisdiccional del Distrito de Riego de Moquegua estableciéndose como su sede de funcionamiento Moquegua. Mediante Resolución Ministerial N° 0036-2006-AG del 16 de enero del 2006 se resolvió: Conformar una Comisión Técnica encargada de revisar la delimitación del Distrito de Riego Tambo-Alto Tambo y de sus subdistritos de Riego Tambo y Alto Tambo, la cual debe recomendar la ratificación o modificación de dichas delimitaciones, en un plazo de 60 días calendarios de constituida (se debió constituir a los 10 días hábiles de publicada esta Resolución). Dicha Comisión estará conformada por un representante del Ministerio de Agricultura, quien la presidirá, Intendencia de Recursos Hídricos, Gobierno Regional de Arequipa, Gobierno Regional de Moquegua, juntas de Usuarios de Tambo, Ensenada-Mejía-Mollendo y Punta de Bombón, Juntas de Usuarios de Moquegua y Torata, Juntas de Usuarios de Puquina, La Capilla y Omate. Suspender los efectos de las Resoluciones Ministeriales N° 745-2005-AG y N° 758-2005-AG a la espera de las recomendaciones de la comisión técnica. Al considerar los pobladores moqueguanos que esta última norma contraviene los intereses de Moquegua se programó un paro para los días 22 y 23 de febrero del 2006.

El paro de 48 horas fue convocado por una comisión conformada por el Frente agrario, cuyo representante es el señor Alex Sosa Ocampo, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua, representada por Juan Rodríguez Linares y el Frente Amplio de Defensa de los intereses de Moquegua, representado por Natalia Pilco. De igual forma han participado de diversas organizaciones agrarias y juntas de riego.

Hechos: La DP coordinó con el Jefe de la Región Policial de manera previa al inicio del paro de 48 horas programado para los días 22 y 23 de febrero. Asimismo, una vez iniciado éste, se le recomendó adoptar las medidas necesarias para que no se afecten los derechos de los manifestantes y tampoco se altere el orden público ni la propiedad privada. La Representante de la Defensora del Pueblo en Moquegua, a través de los medios de comunicación, exhortó a la ciudadanía para que se respete el derecho de los ciudadanos y también el orden público y la propiedad privada. Durante el Paro se hizo pública la Resolución Ministerial N° 0036-2006-AG, que dejaba sin efecto las anteriores normas 745 y 758 que delimitaban la autonomía de las cuencas hidrográficas. A pesar de ello, cerca de un millar de personas respaldó en forma contundente el paro de 48 horas, bloqueando, desde la madrugada el tránsito de las unidades que se trasladaban a la ciudad de Puno y por la Panamericana Sur, a la altura del puente Montalvo. Ese mismo día, el alcalde del distrito del Alto de la Alianza, región Tacna, Ing. Víctor Gandarillas Chávez, expresó su solidaridad al pueblo moqueguano que exige la restitución del Distrito de Riego Alto Tambo-Sánchez Cerro, así como las Juntas de Usuarios de los distritos de riego de Carumas, San Cristóbal y Cuchumbaya, con dependencia administrativa, política y económica en la Región Moquegua.

El 18 de enero del 2007 se reunieron las autoridades de Moquegua y el premier para tratar el tema del conflicto. El 22 de enero se realizó una reunión entre la Junta de usuarios y el Frente de Defensa de los Intereses del pueblo de Moquegua, en la cual se llegó a los siguientes acuerdos: 1. Dar un voto de censura al Presidente Regional (PR) por participar en reunión con el premier. 2. El PR convocará a una reunión urgente para explicar su participación en la reunión con el premier. 3. El PR se deberá retractar de lo dicho durante la reunión. 4. La población desconoce la reunión del 18 de enero. 5. Las organizaciones agrarias se plegarán a los lineamientos de desarrollo agrario propuestos por el GR. 6. Rechazar el uso del agua del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) para cualquier actividad minera aprobada por las organizaciones agrarias de Moquegua.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

PASCO

59. Centro poblado San Juan de Milpo, distrito San Francisco de Asís de Yarusyacan, provincia de Pasco

Actores. Compañía minera Milpo, comunidad campesina de San Juan de Milpo, municipalidad provincial de Pasco.

Antecedentes. Desde el año 2005 la empresa y los pobladores de la comunidad no han podido mantener un diálogo respecto a la firma del convenio marco para que la empresa cumpla con sus compromisos sociales.

Hechos. A principios del año 2007 la empresa empezó la construcción de un nuevo vaso relave ubicado en terrenos que la comunidad considera son de su propiedad. En febrero la comunidad envía oficios a la empresa solicitando la paralización de las obras, el día 26 comunica que realizará un paro pacífico y la empresa decide iniciar el diálogo el 28 de febrero. El 28 de febrero se lleva a cabo la reunión, en la cual se propone a la DP como facilitador del proceso. El 5 de marzo la DP acudió a la zona, alrededor de 100 personas se encontraban en el vaso relave y solicitaban la presencia del gerente de la empresa para solicitar la indemnización por el uso de sus terrenos, además solicitaban información sobre dicho vaso relave. La DP consigue la participación del gerente y se organizan las comisiones negociadoras por ambas partes, la de los comuneros compuesta por 18 personas y 5 por parte de la empresa. Los puntos reclamados son: 1. indemnización por los perjuicios causados como consecuencia de la construcción del vaso relave. 2. mejores condiciones laborales (homologación de sueldos de obreros y mayor contratación de comuneros). 3. cese de la ampliación del vaso relave y 4. Cumplimiento de acuerdos anteriores. Los pobladores solicitan una indemnización de S/. 5,000.00 nuevos soles por año, la empresa no acepta estos términos porque afirman se está utilizando tierras que no son propiedad de la comunidad; así, ofrecen pagar S/. 1`260,000.00 nuevos soles durante un periodo de diez años. Esta oferta no es aceptada y se cierra el diálogo. Al finalizar la comisión de comuneros agredió verbalmente a la de la empresa y a la DP, la que se retiró de la mediación. El 6 de marzo un grupo de pobladores tomó las instalaciones de la empresa, hubo un enfrentamiento entre pobladores y la PNP, en el cual se mantuvo como rehén a un efectivo PNP. Los comuneros presentaron un nuevo pliego de reclamos el cual incluye el pago de cinco mil soles anuales a favor de cada poblador y la suspensión de la construcción del relave. Ante ello, la empresa solicitó primero el desbloqueo, los pobladores no accedieron, lo que provocó el retiro del personal de la empresa. Luego se produjo otro enfrentamiento con la PNP y se detuvo a cinco comuneros, los que fueron intercambiados por el efectivo PNP que había sido tomado como rehén. Se firmó un acta en presencia del representante del Ministerio Público. Ese día, sin embargo, las partes firmaron un acta mediante la que se comprometían a retomar el diálogo con el alcalde provincial como mediador. El día 7, se reunieron en el auditorio de la compañía minera, representantes de la comunidad, el gerente general de la compañía, un representante del MEM y un representante de PCM. Se acordó el pago de una indemnización a favor de la comunidad por un millón seiscientos mil soles en un solo pago. Además en treinta días se instalaría Internet en la zona, la compra de una ambulancia, se priorizaría en la contratación de comuneros de la zona y se evaluaría, por parte de las autoridades pertinentes, las obras realizadas y la construcción de la presa de relaves. Además del cumplimiento del convenio marco mediante el cual se invertirían doscientos mil soles durante los primeros diez años y treinta mil soles para los siguientes diez años.

60. Distrito de Huachón, provincia de Pasco

Actores. Comunidad campesina de Huachón; Gobierno Regional; Fiscal Adjunta de la Primera Fiscalía Penal de Pasco, Sonia Apari Vítor; jefe de la PNP Pasco, coronel Walter Vega Quiñones.

Antecedentes. El 1 de agosto del 2006, el presidente de la CC de Huachón, Rubén Escobedo Espinoza, solicitó la intervención de la DP para el cumplimiento de la construcción de la carretera Huachón-Huancabamba. Dicha construcción se viene aplazando desde año 2002, ya que el GR no dispone del financiamiento. El 4 de agosto, la DP solicitó informe al GR Pasco.

Hechos. Ante el incumplimiento de la construcción de la Carretera Huachón-Huancabamba, en dos tramos (Km. 13+000 al 17+000 y construcción en el kilómetro 82+000), los pobladores decidieron tomar las instalaciones de la Hidroeléctrica Yuncán el 9 de agosto. El 10, representantes de la DEINCRI Pasco coordinaron con el presidente de la Comunidad la realización de una inspección al día siguiente. Así, el 11 se enviaron a Huachón seis efectivos PNP, el Coronel de la PNP, dos representantes del GR y dos ingenieros de la Empresa Montes, que ejecutaría la referida obra. La Fiscal, Sonia Apari Vítor, y dos efectivos PNP constataron la toma de la hidroeléctrica Yucán. Cuando se estaba realizando la referida constatación, la fiscal y los efectivos fueron abordados por el presidente de la comunidad y otros pobladores, quienes les increparon el ingreso al lugar. Al momento en que procedían a retirarse del lugar en la camioneta de la policía fueron abordados por una turba de pobladores, que los obligaron a bajar del vehículo. Fueron golpeados por los pobladores e hicieron que la Fiscal caminase descalza hasta el local comunal, en donde fueron encerrados con la población. Ahí se vieron obligados a firmar un acta mediante la cual se comprometieron a no tomar represalias contra la comunidad. El vehículo policial se quedó en la hidroeléctrica (a dos kilómetros de la comunidad). Por la tarde, los efectivos PNP se enteraron de que su unidad vehicular había sido quemada por los pobladores. Por otro lado, a efectos de liberar a la Policía y demás autoridades, los pobladores decidieron que la camioneta del GR se quedaría en garantía para que se cumpliera la construcción de la carretera. Ahora ya no se exigía la construcción de los dos tramos faltantes,

sino de toda la carretera. El 14, la DP entrevistó al presidente regional, quien refirió que los pobladores podían quedarse con la camioneta porque el pedido de construir toda la carretera era inviable. Además, exigió que depusiese cualquier medida radical si deseaban entablar un diálogo. El 2 de septiembre se inició la construcción de la carretera Huachón–Puente Jancapunta (18 Km.), la cual demanda un financiamiento de 28 millones de soles, de los cuales 18 millones serán desembolsados este año (asumidos por el MTC, MEF y el GR de Pasco) y el resto durante el 2007, cuando finalice la obra. El responsable de la ejecución de las obras será el GR Pasco, en base a los estudios a nivel de construcción de la carretera Huachón–Huancabamba, donde se comprende el tramo Huachón–Puente Jancapunta, que realizó el MTC. El 6 de octubre, pobladores de la comunidad de Huachón solicitaron la intervención de la DP para salvaguardar los derechos de tres pobladores detenidos. Se verificó que dichos pobladores contaban con mandato de detención preventiva, ordenado por el Primer Juzgado de Pasco. El 16, el vicepresidente de la comunidad refirió que los comuneros fueron injustamente detenidos. Ese mismo día se verificó que estaban siendo procesados por los delitos de lesiones, secuestro, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, daños agravados, disturbios, producción de peligro común y arrebatos de armamento, a raíz de los acontecimientos del mes de septiembre. La DP ha remitido una carta al recurrente explicándole los mecanismos legales a los que tienen derecho para hacer valer su defensa. Además se le explicó que no se podía retirar la denuncia debido a la gravedad de la misma. El Estado debe seguir con los procedimientos penales. La comunidad amenaza con tomar medidas de fuerza para lograr que se libere a los tres comuneros. El caso ha sido judicializado. Los tres detenidos fueron puestos en libertad a mediados del mes de diciembre del 2006, se encuentran con orden de comparecencia.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

PIURA

61. Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba.

Actores. Pobladores y alcaldes de Huarmaca y Sondorillo, INEI, Presidente de GR Piura.

Hechos. El 3 de agosto del 2005, pobladores y autoridades de Huarmaca impidieron la realización del Censo Nacional programado por el INEI, debido a problemas limítrofes con caseríos colindantes que pertenecen al distrito de Sondorillo (consideran que la población iba a ser censada a favor de este último distrito). El día 15 se llevó a cabo una reunión con presencia de varias autoridades, en la cual, entre otros aspectos, se acordó lo siguiente: a) No impedir la realización del censo; b) el GR enviará a Huarmaca una Comisión de Alto Nivel con representantes de los sectores de agricultura, educación y salud. El 8 de septiembre, la DP remitió oficio al GR solicitándole los resultados del expediente técnico que se comprometió a diseñar. El día 14, la DP comprobó el archivo definitivo de la denuncia penal presentada por el alcalde de Sondorillo con relación a los problemas limítrofes que mantenían con el distrito de Huarmaca por no encontrarse suficientes elementos de prueba. La DP efectúa el seguimiento del trabajo de demarcación de límites que el GR está realizando con todas las municipalidades de Piura. El 13 de octubre, el GR de Piura informó a la DP que la ley que dio origen al distrito de Sondorillo comprendía los caseríos en cuestión. El día 24, pobladores de Huarmaca realizaron un paro de 48 horas exigiendo al GR la conformación de una nueva comisión que revise las conclusiones logradas por la primera comisión. El 19 de diciembre, el administrador de la MD presentó una queja a la DP, según la cual presuntos pobladores de Huarmaca habrían dañado las obras de alcantarillado del caserío Ovejerías. El mismo día, el alcalde presentó a la DP documentación relacionada con el conflicto. El 21 de diciembre, representantes de las partes involucradas acordaron informar sobre el trabajo realizado por la Comisión Técnica, elaborar un documento oficial sobre el estado de la cuestión del conflicto y tomar las medidas convenientes para proteger los derechos de las personas que viven en ambos distritos. El 29 de diciembre del 2005, la DP se reunió con el técnico de la Subgerencia de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Piura, Gustavo Benites Patiño, quien informó que ya se inició el Proceso de Saneamiento de Límites y organización Territorial de la Provincia de Huancabamba y sus distritos, el mismo que finalizará a mediados de año.

El 11 de enero del 2006, la DP solicitó información al GR Piura; en respuesta, su Presidente remitió un análisis e interpretación de las Leyes de Creación de la Provincia de Huancabamba y sus distritos del Instituto Geográfico Nacional, y el informe de las autoridades del Caserío Cuse sobre los supuestos abusos cometidos por autoridades del distrito de Huarmaca. El día 28 de febrero, la DP solicita información al GR mediante oficio, el cual es respondido el día 20 de marzo. Se da a conocer que el problema limítrofe sería solucionado mediante la culminación del estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia de Huancabamba, aun en ejecución. El 24 de mayo la DP remite al PR el Informe de Responsabilidad N° 019-2006-D.PIURA/AE-JS.

Últimos acontecimientos. No se tiene información adicional.

PUNO

62. Distrito de Crucero, provincia de Carabaya

Actores. Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Crucero, actividades mineras en Ananea (sectores de Huajchani, Chaquimina y Pampa Blanca), Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito de Crucero (conformado por miembros de todos los sectores afectados por la contaminación), pobladores de los distritos de Crucero, San Antón, Asillo, Progreso y Azángaro.

Hechos. El 25 de agosto del 2006 se convocó a una Audiencia Pública en el distrito de Crucero a fin de tratar el conflicto sobre la contaminación ambiental que viene afectando a los distritos y comunidades aledañas a la cuenca del río Ramis. Sin embargo, en esta reunión no se pudo llegar a ningún acuerdo o diálogo con las autoridades regionales y nacionales, por inasistencias de las autoridades nacionales y de la propia población. El 5 de septiembre, el Presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Crucero convocó a una reunión con autoridades y representantes de las comunidades campesinas afectadas, con la finalidad de acordar medidas de lucha contra la contaminación ambiental producida por las actividades mineras en Ananea (en los sectores de Huajchani, Chaquimina y Pampa Blanca). En dicha reunión se acordó realizar una movilización los días 25 y 26 de septiembre hasta el distrito de Ananea. Entre sus peticiones están: 1. Declaración en emergencia de la cuenca del río Ramis, acompañado de un paquete de medidas que contribuyan a combatir la contaminación ambiental. 2. Indemnización por los daños y perjuicios causados por la contaminación. 3. Paralización y cierre de las actividades mineras en el distrito de Ananea. 4. Repoblamiento de la flora y fauna. 5. Aprobación de estudios de impacto ambiental. 6. Formalización de las Mineras. Asimismo, se conformó el Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito de Crucero, el cual está conformado por miembros de todos los sectores afectados por la contaminación. La DP, durante los días previos a la paralización, solicitó información a los diferentes sectores competentes en este conflicto: el Gobierno Regional – Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Agricultura y Dirección Regional de Salud, quienes participarán en la audiencia convocada por los pobladores afectados; no se confirmó la presencia de los ministros o viceministros, a pesar del pedido de la población. Asimismo se solicitó información a la DIRTEPOL a fin de conocer las acciones tomadas respecto al tema de seguridad. Informaron que estará a cargo de las Jefes y personal de las comisarías de Azángaro y San Antonio de Putina. De igual forma mantuvimos comunicaciones con los Presidentes de los Comités de Vigilancia Medio Ambiental de los distritos afectados, quienes confirmaron que el pedido principal de esta medida de lucha es la declaratoria en emergencia de la cuenca del río Ramis y con ello la paralización de la actividad minera artesanal de Ananea. Asimismo, indicaron que se movilizarán los pobladores de los distritos de Crucero, San Antón, Asillo, Progreso y Azángaro hasta el distrito de Ananea el día 25 de septiembre, al mismo lugar donde se realizan los trabajos artesanales en minería con el ánimo de que las autoridades y funcionarios competentes conozcan la magnitud de la contaminación provocada por la minería en dicha zona. Mencionaron también que si durante los días 25 y 26 de septiembre advirtían actividad minera en el distrito de Ananea, la población que se movilizaría a esta zona tomaría medidas contra los mineros artesanales (requisa de materiales e instrumentos de trabajo). La DP realizó una visita el 24 de septiembre al distrito de Ananea con la finalidad de reunirse con las autoridades del distrito, así como con representantes de los mineros artesanales para evitar posibles enfrentamientos en la zona los días de la movilización. El 18 de octubre se suscribió un Acta de Reunión de Trabajo Interinstitucional en el MEM, reunión que contó con la participación de la Vice Ministra de Energía y Minas, Dra. Rosario Padilla, congresistas del departamento de Puno, Margarita Sucari, Tomas Cenzano y un representante del congresista Lescano, Presidente del Gobierno Regional de Puno, Ing. David Jiménez, representantes de las Cooperativas Mineras de Ananea, alcalde del distrito de Ananea y representantes del CONACAMI. Se acordó lo siguiente: Compromiso del Viceministerio de Minas; resolución del problema de la titularidad de los petitorios mineros, hecho que se coordinará con el INACC, el MEM gestionara ante la PCM la expedición de la norma para la creación de una comisión multisectorial, las partes se comprometen a gestionar ante el PCM la creación de la Comisión Multisectorial de Descontaminación de la Cuenca del Río Ramis, de tratamiento de los pasivos mineros, los representantes de las Cooperativas Mineras, alcalde y Presidente del Gobierno Regional se comprometen a financiar el proyecto de construcción de pozas de estabilización de sólidos en suspensión de Ananea, el Viceministerio del MEM y el Gobierno Regional se comprometen a realizar estudios y gestiones para el tratamiento de pasivos mineros y el compromiso de los congresistas de proponer una regulación legal excepcional para la solución de los problemas sociales y mineros existentes en la cuenca del Río Ramis (titulación, contaminación ambiental, formalización de concesiones mineras, etc.). El día 19 de octubre, el Presidente del Gobierno Regional de Puno, autoridades de la Cuenca del Río Ramis, organizaciones de las comunidades afectadas por la minería informal y representantes de los mineros informales suscribieron un

acta de acuerdos para gestionar lo siguiente: 1. Inmediata declaratoria en emergencia de la Cuenca del Río Ramis, 2. Inmediata remediación de los pasivos mineros, 3. Indemnización por los daños causados a las comunidades afectadas, 4. Solicitar la solución inmediata del problema de titularidad de los petitorios mineros, 5. Otorgar un plazo de 15 días para la publicación del D.S. que crea la Comisión Multisectorial de Descontaminación, 6. Cumplimiento de la construcción de las pozas de estabilización de sólidos de suspensión de Ananea, 7. Solicitar la presencia de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la inspección y verificación en la zona de contaminación y 8. Solicitar inmediata audiencia con el Presidente del Consejo de Ministros. El 22 de octubre se publicó en El Peruano la Resolución Ministerial N° 374-2006-PCM, mediante la que se constituye una Comisión Multisectorial encargada de proponer un plan de acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca del río Ramis. Dicha comisión está adscrita al MEM y está integrada por un representante del MEM, del MI, del INRENA, de DIGESA, de SUNAT y del Gobierno Regional de Puno. En el mes de diciembre de 2006 la Comisión Multisectorial presentó ante las autoridades de la región y poblaciones afectadas su plan de trabajo para la superación de la contaminación de la cuenca del río Ramis.

Últimos acontecimientos. Las autoridades municipales y organizaciones locales están convocando a un encuentro de las organizaciones y población de la cuenca el 19 y 20 de abril.

63. Provincia de Yunguyo

Actores. Ernesto Gauna Mamani, alcalde provincial por el movimiento independiente “Nuevo Yunguyo” (16.29% de los votos), obtuvo seis regidores. Cada uno de los siguientes tres regidores forman parte del Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aymara Marqa, Partido democrático Somos Perú y Partido Perú Posible. Frente Único de Defensa de los Intereses de Yunguyo (FUDIY).

Hechos. El 7 de noviembre del 2005, los pobladores del distrito solicitaron a la DP la revisión y seguimiento del proceso judicial contra el alcalde provincial, el regidor Néstor Arce, el proveedor Hipólito Chacón y el ex administrador Roberto Tapia por la presunta sobrevaloración en la compra de tres volquetes realizada en marzo del 2003. El día 14, la Sala penal de Puno varió el mandato de comparecencia restringida en favor de los inculpados por el de detención preventiva, provocando la reacción de sus partidarios. El día 15, el abogado del alcalde solicitó la intervención de la DP por haber sido impedido de interponer la demanda de hábeas corpus; el mismo día, el alcalde fue trasladado de la carceleta del PJ al penal de Juliaca. El día 23, representantes del FUDIY solicitaron la presencia de la DP en la quinta audiencia del juicio con el propósito de asegurar la imparcialidad del proceso. El 14 de diciembre, el alcalde provincial fue sentenciado por la sala penal de Puno a nueve años de pena privativa de la libertad por el delito contra la administración pública en su modalidad de concusión y contra la fe pública. Otros funcionarios, entre ellos el teniente alcalde, el administrador, el ex tesorero y un trabajador municipal, fueron condenados a similar pena, aunque por menor tiempo. El 12 de mayo del 2006, el alcalde y el regidor de la MuP Yunguyo fueron puestos en libertad por orden de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ya que ésta declaró nula la sentencia condenatoria y ordenó un nuevo juicio oral a cargo de la Sala Penal de Puno. El día 15, el alcalde asumió sus funciones. El día 16, un grupo de dirigentes del FUDIY tomaron la MuP, se encadenaron en las afueras del local. Ese mismo día un grupo de ciudadanos que apoyaban a las autoridades edilicias se enfrentaron verbalmente con los dirigentes. El día 17, la DP se reunió con dirigentes del FUDIY para informarles de la solicitud del expediente judicial contra el alcalde a la Sala Penal de Puno. Los dirigentes plantearon el retiro del alcalde y regidores de la MuP y solicitaron su licencia mientras dura el proceso judicial. El día 18 se trasladó este pedido al alcalde quien sostuvo que la medida de protesta era de un sector minoritario. El día 24 un grupo de 400 personas (aproximadamente) tomaron el local municipal, tres de ellas se encadenaron. Se impidió así la apertura de la Municipalidad y se anunció un paro de 48 horas. Ese mismo día se realizó una reunión, a la cual asistieron el Prefecto Regional, el Jefe de la Oficina Regional de CGR, PNP, DP y el alcalde, en la cual se acordó que la DP entablaría un diálogo con los pobladores. El alcalde se mostró reticente al abandono de su cargo. El día 1 de junio, el FUDIY suspendió su medida de fuerza (toma de local municipal, encadenamiento de dirigentes) debido a las elecciones generales. El día 4, el Presidente del FUDIY y su esposa manifestaron haber sido agredidos por tres desconocidos que se dieron a la fuga. El día 5, el hermano del alcalde, Ricardo Gauna Mamani, fue encadenado en el frontis del Municipio luego de dar declaraciones en una radio local acerca de las obras realizadas por el alcalde. Los pobladores le hicieron firmar un acta mediante la cual se compromete a: no realizar declaraciones en medios de comunicación y convencer al alcalde de que pida licencia. Luego, se trasladaron a la Plaza 2 de Mayo, en donde se produjo un enfrentamiento entre la PNP y pobladores (entre 800 y 1000 personas), en el cual resultaron heridos tres pobladores debido al impacto de una bomba lacrimógena, los cuales fueron evacuados al Hospital Regional MNB de Puno. Este enfrentamiento produjo que la PNP tome la Plaza de Armas y no permita el ingreso de ningún poblador. Ese mismo día se convocó al alcalde, el prefecto regional, el Jefe de la XII DIRTEPOL, el Jefe de la CGR Puno, el representante de la

Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Juli y a representantes de la DP a una reunión en la DP, en la cual se dialogó sobre los acontecimientos ocurridos. A esta reunión asistieron también el regidor Néstor Arce Mengoa, también procesado junto al alcalde y el Administrador de la Corte Superior de Justicia de Puno, quién informó que la población atacó el Módulo Básico de Justicia de Yunguyo, cometiendo daños materiales, malogrando computadoras y expedientes. En esta reunión se exhortó al alcalde que pida licencia a fin de viabilizar la solución del conflicto. El alcalde pidió vacaciones por 30 días. Al término de la reunión, el Prefecto Regional, el General de la PNP, representantes de la DP y la Coordinadora de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Juli, se dirigieron hacia la localidad de Yunguyo para conversar con el Jefe de la Comisaría y con representantes de FUDIY sobre el enfrentamiento y los resultados de la reunión. Los dirigentes exigieron la renuncia del alcalde y regidores, ya no solamente la licencia. Luego de dialogar se llegó a los siguientes acuerdos: 1. Compromiso de garantizar la realización de la sesión extraordinaria de Concejo Municipal para tratar la solicitud de vacaciones y el pedido de suspensión del alcalde, la cual se llevaría a cabo el día 7 de junio en el local de la comisaría. Asimismo se comprometieron a informar y persuadir a la dirigencia para que no se lleven a cabo reuniones en las plazas públicas que podrían ocasionar alteración del orden público. 2. Persuadir al alcalde de que convoque, a través del Secretario a sesión de consejo el día 7 a fin de que se apruebe el pedido de vacaciones. El día 6, el alcalde presentó su solicitud de vacaciones a la DP para que sea remitida al concejo municipal y presentó copia del documento dirigido al Secretario General de la MuP para que convoque a los regidores a la sesión del día 7. Estuvieron presentes el Prefecto Regional, un asesor del Ministro del Interior, la PNP y la DP. Inmediatamente se entregaron dichos documentos a la PNP para que sean llevados a Yunguyo. El día 7, por la mañana se realizó la sesión de concejo, estuvieron presentes los nueve regidores de la comuna, se aprobó por unanimidad el pedido de licencia (el pedido de vacaciones fue variado) del alcalde por 30 días y se concluyó la sesión. Luego se realizó una reunión en la Escuela Misionera de la Parroquia de Yunguyo, a la cual asistieron el padre Gastón Garatea, el Prefecto Regional, un Asesor del Ministerio del Interior, tres Regidores, el Coronel y el Mayor PNP de Ilave y los dirigentes del FUDIY. En esta reunión, luego de escuchar los pedidos y reclamos del FUDIY y teniendo en cuenta que el concejo municipal aprobó la licencia del alcalde, el FUDIY levanto la medida de fuerza. El personal de la PNP que reforzó a la Comisaría de Yunguyo retornó a sus dependencias policiales de origen. Por la tarde se realizó otra sesión de concejo municipal en la que se aprobó la licencia por 30 días del regidor Néstor Arce Mengoa.

La DP coordinó con la Cruz Roja el apoyo a uno de los ciudadanos heridos durante el enfrentamiento, el cual tenía que ser operado debido a una fractura de tibia y peroné. La Cruz Roja Internacional asumió los gastos de medicamentos y el MINSA se comprometió asumir los gastos de hospitalización (cama, alimentación y atención médica). La CGR se encuentra realizando una auditoria desde el día 7. El día 15, el alcalde solicitó a la DP garantías personales para él y para su familia. Esta solicitud fue derivada a la Prefectura Departamental de Puno, por ser de su competencia. El día 23, el Presidente del FUDIY, presentó ante la DP un documento en el cual se solicita: la aceleración del proceso judicial en contra del alcalde y regidor, el nombramiento de un Procurador Público Anticorrupción Ad Hoc para que asuma defensa de la MuP, intermediación para que el alcalde solicite ampliación de licencia por 30 días más y se denuncie actitudes intimidatorias de autoridades judiciales. El Presidente y dirigentes del FUDIY a la fecha tienen cinco denuncias penales ante Fiscalía de Yunguyo. Entre los denunciados está el PJ, el Banco de la Nación, la esposa del alcalde y el alcalde. La CGR continúa realizando la acción de control a la Municipalidad Provincial de Yunguyo. El 26 de junio, el Sr. Justino Ucharico Ramos, presentó una queja en la DP en contra de personal policial de la Comisaría de Yunguyo y del Fiscal Provincial de Yunguyo, refiriendo que sin ninguna notificación previa, fue conducido a la Fiscalía Provincial por el personal policial y dos ciudadanos que se negaron a identificarse, a fin de que le tomen su manifestación por los hechos ocurridos el 5 de junio del 2006 (destrozo de Módulo Básico de Justicia, BN y PNP); además, afirma que el Fiscal y los dos ciudadanos desconocidos lo han interrogado en el despacho fiscal. LA DP inició investigación sobre los hechos. El día 27, dirigentes del FUDIY se reunieron con la Presidenta de la Sala Penal de Puno, reunión en la que estuvo presente la DP, a solicitud del FUDIY, para programar fecha para el nuevo juicio oral en contra del alcalde. El 6 de julio se reunieron en la MuP el alcalde encargado, Emilio Huanca Aquino, el FUDIY y las principales autoridades de la provincia, a fin de tratar el conflicto social ya que el 8 de julio venció el plazo de licencia solicitada por el alcalde. No se llegó a acuerdos concretos. El día 7 se realizó una reunión en la Prefectura Departamental para tratar el posible rebrote del conflicto social al vencimiento del plazo de licencia del alcalde. Participaron el Prefecto Regional, General de la PNP, alcalde, alcalde encargado, presidente FUDIY, comisario de Yunguyo, Central de Barrios de Yunguyo y la DP. El alcalde manifestó su voluntad de retomar sus funciones, Idea que fue rechazada por el FUDIY. El día 10, el alcalde reasumió sus funciones en medio de un gran contingente policial y a pesar del rechazo de los dirigentes del FUDIY, quienes en un grupo minoritario protestaban al frente del MuP. No se registraron hechos violentos. Los días 11 y 12 el Presidente del FUDIY realizó una huelga de hambre en rechazo al retorno del alcalde. El día 13 los miembros del FUDIY realizaron una "marcha de sacrificio" a la ciudad de PUNO para exigir el

inicio del nuevo juicio oral en contra del alcalde. La Sala Penal programó para el 24 de agosto el inicio del nuevo juicio oral en contra del alcalde. El día 24, en el diario *La República* se informó que el Presidente del FUDIY anunció la suspensión de todo tipo de protesta hasta que la CGR culmine su trabajo.

Desde el 24 de agosto 2006 hasta el 22 de enero de 2007 se llevó a cabo el juicio oral contra del alcalde Ernesto Gauna y otros funcionarios de la municipalidad en la Sala Penal de Puno. La Municipalidad funcionó con normalidad hasta concluir la gestión 2006. El 22 de enero del 2007, la Sala Penal de Puno emitió sentencia condenatoria en contra del ex alcalde Ernesto Gauna Mamani y el regidor Nestor Arce Mengoa, condenándolos a 4 años de pena privativa de la libertad en calidad de suspendida. Este hecho motivó la protesta y disconformidad por parte de los integrantes del FUDIY porque consideran que la sentencia emitida por la Sala Penal es muy benigna y no es la pena solicitada por la Fiscalía Superior (12 años de pena privativa de la libertad), además mostraron su preocupación ya que, aparentemente, la Fiscalía Superior Penal de Puno no tendría la voluntad de interponer recurso de nulidad en contra de la sentencia a fin que la Corte Suprema eleve la pena impuesta, este hecho generaría malos precedentes en la lucha contra la corrupción. El 23 de enero, los integrantes del FUDIY recurrieron a la DP con la solicitud a la Fiscalía Superior para que interponga el recurso de nulidad. La DP lo transmitió al Fiscal Superior Decano del Ministerio Público de Puno, Dr. Manuel Torres Quispe, por cuanto únicamente corresponde al Ministerio Público interponer recurso de nulidad para que se eleve la sanción penal. Este mismo día la DP se comunicó con el Fiscal Superior, quién informó que ya se interpuso el recurso de nulidad.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

64. Centro poblado Los Uros, distrito de Puno, provincia de Puno

Actores. Pobladores de Uros, Comisión especial de evaluar la problemática de los pobladores de la Reserva Nacional del Titicaca, GR Puno, Colegio de Abogados.

Hechos. Luego de las protestas desarrolladas por los uros en febrero del 2005, el Ministerio de Agricultura constituyó, el 4 de mayo, una Comisión Especial encargada de evaluar la problemática de los pobladores de la Reserva Nacional del Titicaca (Resolución Suprema N° 024-2005-AG). Sin embargo, algunas instituciones (GR Puno, Colegio de Abogados) no acreditaron representantes. Los días 23 y 24 de mayo del 2005, pobladores de la isla Los Uros realizaron un paro de 48 horas demandando la derogación del Decreto Supremo N° 185-78-AA (crea la Reserva Nacional del Titicaca), la creación de la Reserva Comunal de Los Uros y la titulación de las zonas de totorales. Los manifestantes bloquearon el acceso de las lanchas hacia las islas del lago Titicaca, e interrumpieron las carreteras Huancané–Juliaca y Puno–Desaguadero. El día 24, la DP organizó una reunión a la que asistieron el Prefecto, el Jefe de la Reserva Nacional del Titicaca, el Administrador de INRENA Puno, y representantes del Gobierno Regional y de la Dirección Regional Agraria Puno. En dicho encuentro se suscribió una carta dirigida al Vice Ministro de Agricultura, solicitándole la implementación de la Resolución Suprema N° 024. El paro fue levantado, aunque la amenaza de que la medida de fuerza continúe; continúa en tanto no se cumplan los compromisos. El 8 de junio, mediante Resolución Suprema N° 024-2005-AG, el Ministerio de Agricultura instaló una Comisión Especial encargada de evaluar la problemática de los pobladores de la Reserva Nacional del Titicaca, conformada por representantes de Uros, Ramis, Capachica, Comité de Conservación de la Reservación Nacional del Titicaca, GR y Colegio de Abogados. Se trataron los siguientes puntos: derogatoria del DS N° 185-78 que crea la Reserva Nacional del Titicaca; exoneración de cobros por extracción de totorales de Ramis y Puno; titulación de zonas totorales de Ramis y Puno; desactivación de la Oficina de la Reserva Nacional del Titicaca; la intervención de la CGR en la Dirección Regional Agraria Puno, INRENA y Reserva Nacional del Titicaca, entre otros. La reunión programada para el 3 de agosto no se llevó a cabo. El día 11 se reunieron los dirigentes de los Uros con las autoridades del Ministerio de Agricultura, acordando pedir plazo ampliatorio de 90 días para las negociaciones y trabajar (se diseñó un cronograma hasta el 15 de noviembre), aunque no hubo acuerdo sobre el número de representantes por cada grupo. El día 16, los Comités de Conservación de los Recursos Naturales del Titicaca acreditaron a sus representantes para trabajar en la primera Comisión. El día 22, los pobladores de Ramis–Huancané acreditaron a sus representantes, lo que no hicieron los representantes de Uros y Chimú. El 15 de septiembre se reunieron representantes de MINAG, INRENA, CONAM, PETT, Colegio de Abogados de Puno, CP Ramis – Huancané y la DP. Aunque no asistieron representantes de los uros (consideran que el MINAG trabaja de manera parcializada) se trataron los siguientes temas: 1) derogatoria de los DS N° 185-78-AA y N° 010-2003-AG, en la cual ambos grupos (Comités de Conservación y Ramis–Huancané) estuvieron de acuerdo en exonerar del cobro por la extracción de totora; 2) la titulación en zonas de totorales es improcedente pues el lago Titicaca es patrimonio del Estado; 3) acuerdo sobre el reconocimiento de títulos ancestrales; 4) los temas de desactivación de la Oficina de la Reserva Nacional del Titicaca y derogatoria de la Ley N° 10842 se postergaron para la siguiente reunión debido a que necesitaba la opinión de asesores jurídicos que permita tomar decisiones sobre esos puntos. El 21 de octubre, la Comisión Especial y la Federación Unitaria de Campesinos de Huancané presentaron un proyecto de ley para exonerar de pagos por extracción de totora

en el departamento de Puno. Mediante actas de fechas 21 de octubre y 19 de noviembre del 2005, los pobladores de la comunidades campesinas del distrito de Huancané, Taraco y Pusi, representados por la FUCAMP, representantes de OBAAQ y de la Reserva Nacional del Titicaca se revisa y ratifica el acuerdo de respetar los derechos de posesión, uso y usufructo, ancestrales y tradicionales de las citadas comunidades. Mediante actas de reunión con los comités de Conservación de los Recursos Naturales en la Reserva Nacional del Titicaca se decide aprobar los proyectos de las normas de los acuerdos del Grupo de Trabajo de la Sesión del 15 de septiembre del 2005 y se revisa y ratifica el acuerdo de respetar los derechos de posesión, uso y usufructo, ancestrales y tradicionales vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales en la Comunidades de Llachón, Yapura, Capano, Carata, Faón, Yasín, Moro. El 24 de febrero del 2006 se publicó el D.S. N° 009-2006-AG, mediante el que se decreta: reconocer y respetar los derechos de posesión, uso y usufructo, ancestrales y tradicionales de los pueblos originarios vinculados al aprovechamiento sostenible de la totora, los llachos y recursos naturales dentro del sector Puno, que comprende parte de los distritos de Capachica, Coata Huatta, Paucarcolla, Puno y Chucuito, la misma que comprende un área de 29 150 hectáreas; orillas de Tilali hasta Desaguadero. Precisa que los usos ancestrales y tradicionales tienen carácter gratuito al relacionarse con el autoconsumo y subsistencia de los usuarios que aprovechan la totora, llachos y otros recursos. El 10 de marzo del 2006, los pobladores de la Isla Los Uros (grupo que se retiró de la Comisión Especial) realizaron una movilización en la ciudad de Puno, rechazando la promulgación del D.S. N° 009-2006-AG antes indicado.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

65. Distrito de San Gabán, provincia de Carabaya

Actores. DINANDRO, CORAH, campesinos agricultores del distrito de San Gabán.

Hechos. El 19 de octubre del 2004 se produjo un enfrentamiento entre unos 300 efectivos policiales y cerca de 1,500 pobladores apostados desde el día anterior en las inmediaciones de la Hidroeléctrica de San Gabán en protesta por la erradicación forzosa de cultivos de coca que el Ministerio del Interior realizaba en la zona. El saldo fue trágico: dos campesinos muertos y otros 10 heridos de gravedad, quienes fueron trasladados al Centro de Salud de Ollachea (uno de ellos falleció días después). A mediodía, tras un diálogo entre agricultores y PNP, se permitió la atención de los heridos en la posta médica y su traslado a Macusani. En la noche se realizó una reunión en este distrito donde se acordó llamar al diálogo, pero se dispuso el corte de la carretera y la movilización de piquetes a la Villa de San Gabán (que se desplegaron al día siguiente en dos volquetes de la MuP). Las autoridades de Carabaya se reunieron en Lima con autoridades del Gobierno y del Congreso. El Gobierno decretó el estado de emergencia en la zona y envió más efectivos policiales. La DP llegó a la zona el 19 de octubre; en la visita se acompañó el levantamiento de cadáveres y se dialogó con representantes de los agricultores. Posteriormente, el Gobierno nombró una Comisión de Diálogo que, luego de varios días de conversación, logró un acuerdo con los pobladores. El 25 de octubre se suscribió un acta de compromiso en la cual se aceptó la erradicación progresiva de los cultivos de coca de carácter ilegal con participación de los agricultores. En noviembre hubo una movilización por la paz convocada por la MuP, Iglesia Católica y organizaciones sociales. Por su parte, la empresa denunció a los responsables de la toma del local. El 22 de noviembre, la Fiscalía denunció a 50 personas, incluyendo a los alcaldes de Carabaya y San Gabán, por los presuntos delitos de “tentativa de homicidio en agravio de un policía y contra la tranquilidad pública”. También se está denunciando a seis PNP por “homicidio” y “lesiones seguidas de muerte” en agravio de tres personas fallecidas, sin mención de heridos. La DP revisó los expedientes y recomendó incorporar responsabilidades por heridos, por lo que el expediente ha vuelto a la Fiscalía (certificados médicos no han llegado al MiP). De otro lado, en cumplimiento del acuerdo suscrito, ENACO fue a San Gabán a comprar hojas de coca a los empadronados. Además, el Ministerio de Agricultura y el PETT visitaron la zona para evaluar las condiciones de la titulación. La Fiscalía ha ampliado la investigación, pero aún no emite su dictamen. La Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Ayaviri patrocina la defensa legal de los representantes legales de los fallecidos y de los heridos. El 14 de diciembre, en Lima, se realizó una reunión de seguimiento de los acuerdos adoptados el 25 de octubre, con participación del Ministerio de Agricultura, GR Puno, DEVIDA, MuP Carabaya, ENACO, FONAFE, AGROBANCO, ELECTROPUNO, MD San Gabán, Ayapata y Corani, Ronda Campesina de Carabaya, productores de San Gabán, congresistas de Puno, Ministerio del Interior, Transportes y Comunicaciones, Salud y Superintendencia Nacional de Bienes. Se revisaron todos los temas y se acordó sobrevolar la zona en helicóptero para realizar una verificación muestral y aleatoria de las áreas cultivadas de hoja de coca en la provincia de Carabaya. Esta inspección se realizó el 17 de diciembre y fue determinante para suspender los operativos en la zona, motivo que ha permitido el retorno de la tranquilidad. El Gobierno prorrogó el estado de emergencia por 30 días más. Los días 20 y 21 de febrero del 2005 se realizó un encuentro de rondas campesinas de la provincia de Carabaya. Parte de la agenda consideró el seguimiento a los acuerdos alcanzados con el Gobierno central; participaron también un asesor de la congresista Paulina Arpasi,

alcaldes Distritales, alcalde Provincial, Presidente Regional, y representantes de ELECTROSUR, Vicaría de Ayaviri, la DP, etc. En la reunión se acordó retomar la mesa de diálogo con las autoridades correspondientes. Las autoridades han decidido reanudar la mesa de diálogo y han convocado a una reunión para el 28 de abril en Lima. Durante mayo no se reanudó la Mesa de Diálogo para atender los problemas de San Gabán. La Sala Penal de Puno confirmó que no abrirá instrucción contra los alcaldes de Carabaya y San Gabán ni otros dirigentes denunciados como co–autores de los hechos ocurridos en la Villa Chuani. El Juez Mixto de Carabaya, sin motivo justificado, se ha inhibido de continuar el proceso penal. Los agricultores procesados han presentado un memorial al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno solicitando que el proceso siga en Macusani (su traslado a otra sede ocasionaría gastos a los litigantes). El 27 de junio, la población de San Gabán realizó un paro de 24 horas. Durante agosto, la Sala Penal dispuso continuar la investigación en el Juzgado Mixto de Carabaya. El 4 de octubre, CORAH y DINANDRO realizaron un operativo de erradicación de hoja de coca en la zona el que produjo un enfrentamiento con los agricultores; el dirigente Daniel Apaza fue detenido y trasladado a la base militar de Mazuco. El día 6, pobladores de San Gabán denunciaron el maltrato sufrido por parte de la PNP, solicitaron su retiro y la liberación de su dirigente. La DP se comunicó con autoridades de la PNP y verificó los daños causados en el operativo. El 11 de octubre, en Lima, se reinició la mesa de diálogo en la que participaron representantes de los agricultores cocaleros y el alcalde de San Gabán. El 24 de noviembre, el Juzgado Mixto de Carabaya realizó la diligencia de inspección judicial. El mismo día, como protesta contra los operativos de erradicación forzosa de la coca, los pobladores intentaron tomar la central hidroeléctrica. Al 25 de enero del 2006 se han vencido los plazos del proceso penal seguido por la toma de la Hidroeléctrica San Gabán. Se espera que la Sala Penal disponga una ampliación para completar las diligencias.

El proceso penal que se tramita por la muerte y lesiones graves de los agricultores de coca de San Gabán, se encuentra (al mes de enero del 2007) en la Sala Penal Descentralizada de San Román, Juliaca, con informes finales para que se disponga la realización del juicio oral (Exp N° 01-2005).

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

SAN MARTÍN

66. Distrito de Pólvora, provincia de Tocache

Actores. Agricultores de La Pólvora, PNP, CORAH.

Hechos. El 26 de mayo, unos 250 efectivos policiales ingresaron a Puerto Pizana resguardando al personal de CORAH que había programado la erradicación de cultivos de coca en esta zona. El 28 de mayo, unos 3,500 agricultores del distrito de La Pólvora se enfrentaron a la PNP. La prensa informó que, en el enfrentamiento, 18 personas resultaron heridas (nueve cocaleros y nueve efectivos policiales), de los cuales dos se encuentran en grave estado en el Hospital de Tingo María. La DP visitó a los heridos y comprobó que estaban siendo atendidos. El 30 de mayo, representantes de la DP se entrevistaron con Elsa Malpartida, recibiendo sus quejas. El 31 de mayo, un comisionado de la DP viajó a la zona para investigar los hechos denunciados; en la visita se recibieron quejas de los ciudadanos y se decidió indagar si los cultivos que fueron erradicados estaban inscritos en ENACO. Por otro lado, en Lima, la DP solicitó a OFECOD y ANTIDROGAS la información que justifique la elección de los terrenos en Puerto Pizana para la incursión de los efectivos policiales y la erradicación del cultivo de coca.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

67. Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres.

Actores. FRECIDES Mariscal Cáceres- José Torres Mori, Concejo de Coordinación Local de la Provincia de Mariscal Cáceres, alcalde - Raúl Vela, Radio La Voz del Abiseo, Radio Antena 3, Radio Sintonía, Contraloría General de la República.

Hechos. El 9 de octubre del 2006, un grupo de pobladores dirigidos por el FRECIDES y miembros del Consejo de Coordinación Local de la Provincia de Mariscal Cáceres-Juanjuí, tuvieron una reunión en la Plaza de Armas y decidieron apostarse en el frontis del local de la Municipalidad, donde estaba reunido el alcalde con sus Regidores. Decidieron iniciar una huelga en protesta por los malos manejos del presupuesto de la municipalidad por parte del alcalde y la falta de información sobre el manejo de los fondos. Solicitaron la presencia inmediata de la CGR. El 10 de octubre, la población seguía apostada en el frontis de la municipalidad, la que no ha sido tomada. En el interior permanece el alcalde; en horas de la madrugada los regidores se retiraron del local municipal. Durante la noche se llevó a cabo una reunión en el Comité Provincial de Lucha en la que se acordó mantener la huelga hasta que se haga presente una comisión de la CGR o del MP. No se registró ningún tipo de enfrentamiento. El 11, se toma conocimiento de que una comisión de la CGR irá a la zona el día 12. El Fiscal ha solicitado que se lacre la documentación de la

municipalidad hasta que se haga presente la comisión de la CGR. El 13, la comisión de la CGR se reúne con las dirigentes de FRECIDES, Comité de Lucha Provincial, el Consejo de Coordinación Local, el Fiscal Mixto de Mariscal Cáceres y la DP. En la reunión informan sobre las labores de verificación e indagación de las denuncias contra el alcalde, las cuales tomarían 15 días. Ese mismo día, el alcalde se comprometió a realizar una rendición de cuentas antes de las elecciones (se le sugirió que sea el 30 de octubre). Ante estos hechos, la Plaza de Armas fue despejada. Un grupo de dirigentes sociales y de personas permanecería hasta que la CGR culmine su trabajo. Actualmente la CGR se encuentra realizando su trabajo. La DP está haciendo un seguimiento del caso. La situación está en calma.

Al mes de enero del 2007, la CGR aún no ha publicado los resultados de su investigación. La población se encuentra tranquila porque el procedimiento está siguiendo su curso. El 5 de febrero se reunieron pacíficamente aproximadamente 30 personas en el frontis del Poder Judicial para solicitar: 1. Destitución del Juez Titular del Juzgado Penal de Mariscal Cáceres y de su secretario de juzgado por presuntas irregularidades durante la tramitación de procesos penales en contra del ex alcalde de Mariscal Cáceres. 2. Destitución del Juez (P) del Juzgado Mixto de Mariscal Cáceres por no haberse inhibido del conocimiento de las causas penales antes mencionadas. Dicho Juez ha sido asesor legal de la municipalidad durante la gestión anterior. Sobre ello, se obtuvo información de que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de San Martín emitió una resolución de rotación de dicho Juez. De acuerdo a información obtenida por la DP, el Comité de Lucha se encuentra a la espera del informe de la comisión de la CGR (la investigación se realizó en octubre del 2006) y a la espera de la captura del ex alcalde, quien ya cuenta con mandato de detención en el Juzgado y en la Sala Mixta de Mariscal Cáceres. Por otro lado, el presidente de la Sala Mixta de Mariscal Cáceres informó a la DP que se reunió con los dirigentes que llevaron a cabo la manifestación para explicarles las competencias del Poder Judicial, la PNP y la Fiscalía, así los manifestantes depusieron su lucha.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

68. Caserío de Sión, distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.

Actores. PNP, CORAH, Agricultores y dirigentes cocaleros, Rondas Campesinas, alcalde del Caserío Sión, Teniente Gobernador (Néstor Sayazo Mateo). Confederación Nacional de las Cuencas Cocaleras del Perú en Sión (Dirigente: Mario Huamán Tamanguillo).

Otros: congresistas Nancy Obregón y Elsa Malpartida, Gobierno central.

Antecedentes. Enfrentamientos entre efectivos policiales y cocaleros en cuatro oportunidades desde al año 2002: abril del 2002, septiembre del 2004, mayo y septiembre del 2006.

Hechos. El 11 de septiembre del 2006, aproximadamente entre las 5:00 y 6:00 horas, empezó la erradicación forzosa de coca. La población en general del CP de Sión pretendió impedir el acceso del personal del CORAH y miembros de la PNP a las viviendas de la localidad, ante lo cual los efectivos policiales realizaron disparos y lanzaron bombas lacrimógenas. El enfrentamiento duró hasta las 1.30 p.m., aproximadamente. Por efecto del enfrentamiento se reportaron 37 heridos (31 por parte de la población y seis por parte de la PNP, y tres personas detenidas. La DP se desplazó a la ciudad de Juanjuí, acudió a la comisaría para verificar el estado de los detenidos, quienes ya habían sido revisados por el médico del MINSA, en ausencia de un médico legista. Nos informaron que en el tópicó de Sión habría aproximadamente 21 personas heridas. Se entrevistó a los ciudadanos detenidos: Agustín López Pintado (50), José Aguilar Ramos (41), Tito Chinguel Rojas (45). El primero de ellos presentaba dolores en el tórax, parte izquierda y al parecer registraría fractura en las costillas, y otros presentaban maltratos en la cara y en el cuerpo. Además se entrevistó al Fiscal Mixto de Mariscal Cáceres, quien señaló que formuló denuncia penal por presunto delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de disturbios, asociación ilícita y motín, en contra de los tres detenidos y otro no habido (Presidente de Rondas Demetrio Martínez Facundo). Se recomendó al Juez Penal de Mariscal Cáceres que dispusiese que se tomen placas radiográficas a los detenidos que argumentaban que tenían fracturas. Asimismo se constató que se estaban tomando las instructivas de los detenidos quienes estaban siendo asesorados por un abogado designado por la congresista Nancy Obregón. Nos comunicamos con el dirigente de la Confederación Nacional de las Cuencas Cocaleras del Perú en Sión, quien refirió que tiene grabaciones de la incursión de un número aproximado de 300 a 400 efectivos policiales y trabajadores del Proyecto CORAH en el CP Sión, disparando ráfagas de ametralladora y lanzando bombas lacrimógenas, rompiendo puertas, ventanas, artefactos y demás enseres de los moradores. Los atacantes tenían el objetivo de detenerlos y tomarlos como rehenes. Hubo aproximadamente 32 personas entre niños, adultos y ancianos con lesiones quienes fueron atendidas por una brigada médica que llegó hasta el lugar. Se le exhortó que en su condición de dirigente invitase a todos los moradores a mantener la calma. De acuerdo a lo conversado con los pobladores, miembros del Proyecto CORAH anteriormente habían ingresado a la zona. Sin embargo, esta vez instalaron su campamento en el sector Anchorma, ubicado a una hora y media de Sión con unos 400 efectivos policiales. La población trató de conversar con el Jefe sin obtener respuesta. Realizaron la erradicación de

las plantaciones y luego intentaron ingresar al poblado produciéndose el enfrentamiento que duró desde las 6:30 a.m. hasta el mediodía, hora en que llegó la brigada médica junto con un camarógrafo; en ese momento se dispersó el personal policial. Agregan que hubo disparos de bala por AKM. El día 13, la DP llegó al CP Sión, cerca de la 1pm. Se conversó con la población quienes sostuvieron que desde el día 7 de septiembre empezaron a llegar helicópteros con personal de CORAH a la zona de Anchorma (a una hora de Sión) que, entre los días 8, 9 y 10 fueron acercándose a Sión, realizando actividades de erradicación de plantaciones de coca. Los pobladores solicitaron la presencia de un psicólogo para que atendiese a los niños ya que muchos de ellos habían quedado conmocionados debido a las continuas intervenciones. El día 14, el Juzgado Penal de Juanjuí nos confirmó que las tres personas detenidas habían sido puestas en libertad. El 19, el Ministerio de Salud comunicó a la DP que los profesionales de salud mental llegarían en los próximos días a Sión para evaluar a los niños y niñas. El día 22 los médicos llegan a Sión para hacer las evaluaciones de salud física y mental a los niños. El día 25, regresan para continuar con las evaluaciones. El 3 de noviembre el Director General de Salud de San Martín informa (mediante oficio N° 2360-DG-DESP-DIRES/SM-2006) que se observa afectación psicológica de los niños y adolescentes, un elevado porcentaje de casos de estrés agudo. El 12 de diciembre el Fiscal Provincial de Mariscal Cáceres, doctor Leonardo Leo Mendoza, comunica a la DP que la denuncia formulada por los pobladores de Sion ha sido remitida a la comisaría de esa localidad para que efectúen las diligencias respectivas y se remita el atestado policial correspondiente.

El 23 de enero del 2007 el Fiscal Provincial de Mariscal Cáceres comunica que el 9 de enero del 2007 ha devuelto el parte remitido por la PNP para que, en el plazo más inmediato, amplíen las investigaciones ya que no se han notificado a los policías involucrados ni a los denunciantes (supuestamente porque han cambiado al Técnico PNP que estaba a cargo de las investigaciones del caso).

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

UCAYALI

69. Provincia de Coronel Portillo

Actores. Asentamientos Humanos de la Provincia Coronel Portillo.

Hechos. Conflictos existentes entre 90 asentamientos humanos de la provincia de Coronel Portillo por la propiedad de terrenos, concluyeron en una movilización que dio lugar a actos de vandalismo en medio de una manifestación realizada el 13 de enero del 2004. Luego del diálogo propiciado por la DP con autoridades, dirigentes y la CGTP, se conformó una Comisión Multisectorial que ha encauzado el problema y formulado propuestas de solución. No obstante, un sector de la población solicita la reversión al Estado de los terrenos en disputa y su posterior adjudicación a los moradores. La DP recomendó al GR la creación de una Comisión Multisectorial con carácter ejecutivo, como plataforma de apoyo a la alternativa de conciliación. El 25 de junio, impulsada por el congresista Víctor Valdez, se promulgó la Ley N° 28259, Ley de Reversión a favor del estado de los predios rústicos adjudicados a título gratuito, que establece que los predios rústicos declarados en abandono o que no hayan cumplido los fines para los que fueron gratuitamente adjudicados, revertirán al Estado. Esta medida ha tranquilizado a la población pues consideran que abre una solución al conflicto, por lo que esperan la elaboración del respectivo reglamento. Con el nuevo procedimiento para la reversión de predios, gran parte de los asentamientos humanos ha optado por hacer efectivo este derecho, presentando sus solicitudes ante la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali. Otro grupo de asentamientos humanos ha optado por la vía de la conciliación y posterior compra-venta de los terrenos, constituyendo para ello una Comisión integrada por los regidores de la MuP Coronel Portillo, Colegio de Abogados de Ucayali, Prefectura y dirigentes, los que han iniciado el proceso de negociaciones con los propietarios de los predios para su posterior formalización a través de COFOPRI. La DP, a pedido de los asentamientos humanos, acompaña el proceso. El 28 de enero del 2005, el Presidente Alejandro Toledo, con ocasión de la sesión de Consejo de Ministros descentralizada realizada en Pucallpa, ofreció públicamente presentar un proyecto de ley de reversión a favor del Estado de predios otorgados a título oneroso que, al igual que los otorgados a título gratuito, hayan incluido en causal de reversión. Durante el mes de marzo, la DP se encontró monitoreando la consolidación del proceso; no ha existido mayor variación. El 11 de enero del 2006, el Presidente Alejandro Toledo promulgó en Pucallpa la Ley N° 28667, que declara la reversión de predios rústicos, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos. Esto ha motivado que varios grupos de ellos, que venían realizando procesos de conciliación con los propietarios de los predios ocupados, para su posterior formalización por la MuP Coronel Portillo y COFOPRI, los han paralizado y están a la espera del Reglamento de esta Ley para solicitar la reversión de los predios que ocupan. Otros grupos de personas han comenzado a invadir predios, lo que ha originado que los propietarios utilicen la fuerza para desalojarlos inmediatamente. La OD Ucayali viene visitando a algunos AA.HH. constituidos entre diciembre del 2005 y enero del 2006, con la finalidad de informar claramente que la Ley aprobada contiene dos requisitos: a) que los predios se

encuentren ocupados con anterioridad al 31 de diciembre del 2004, y, b) que estos hayan sido declarados como tal por el Gobierno Local correspondiente; por lo que ocupaciones posteriores a diciembre del 2004 no pueden acogerse a esta norma. Mientras estos predios no se reviertan al Estado, los propietarios pueden plantear acciones de desalojo. Al mes de febrero del 2007 la Dirección Regional de Vivienda había evaluado 31 lotes de la urbanización San Jorge, se seleccionó 24 lotes a los cuales se les ha realizado la adjudicación. Esto generó el descontento de ciertos propietarios. El 20 de febrero la DP solicitó información a la Directora Regional Sectorial de Vivienda para conocer la situación de los expedientes de adjudicación de algunos terrenos (Mz. C, Lote 9, Mz. C, Lote 7) pues los poseesionarios actuales están en desacuerdo con la adjudicación.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

AMAZONAS**70. Distrito de San Jerónimo de Paclas, provincia de Luya**

Actores: Pablo Castañeda Gallac, alianza electoral Unidad Nacional (segunda reelección), pobladores de Luya.

Hechos: El 19 de noviembre del 2006, luego del proceso electoral, al enterarse de la reelección de Pablo Castañeda, la población destruyó el material electoral de las tres mesas de sufragio instaladas, las cuales estaban en poder de personal de la ONPE. Sin embargo, los resultados fueron corroborados por el JNE que proclamó la reelección del Alcalde con los resultados de las actas de los personeros, las cuales no habían sido destruidas.

El 30 de diciembre, la población cercó con alambres de púas la parte exterior del municipio, impidiendo así la juramentación del Alcalde y regidores. Los pobladores afirman que están disconformes con la autoridad reelecta porque no ha tenido una buena gestión, no ha ejecutado obras. Además afirman que esta reelección se ha logrado con votos golondrinos.

El 6 de enero del 2007, gracias a la intervención del Ministerio Público y la PNP, el Alcalde ha podido juramentar en la agencia municipal del anexo Chonia, ya que el municipio continúa cerrado. Actualmente están despachando desde ahí, con el resguardo de vigilantes particulares. El local municipal continúa cerrado e inclusive se han reforzado las barreras para impedir el ingreso. La DP está interviniendo en el caso, a solicitud de las autoridades locales.

El 19 de enero, el ciudadano Francisco López Reap, en su calidad de Presidente del Comité de Lucha del Defensa del distrito de Paclas, ha solicitado nuestra intermediación para dar solución a la problemática planteada. Ese mismo día se solicitó al Jefe de la Región Policial Amazonas un informe detallado acerca de los hechos acontecidos en el distrito y la situación actual en el local municipal. El 24 se solicitó al Fiscal Provincial Mixto de la Provincia de Luya información acerca de las actuaciones efectuadas por su despacho el 19 de noviembre y sobre la investigación preliminar respecto a estos hechos. Ese día también se solicitó a la secretaría general del JNE que nos indicasen las actividades de Fiscalización efectuadas en el distrito Paclas con motivo de las denuncias por presuntos existencia e votos golondrinos, así como su resultado. Las actividades realizadas respecto a la destrucción del material electoral; circunstancias de la declaración de ganador del Alcalde adjuntando copia de las actas de escrutinio y la de proclamación de resultados. El 14 de febrero se revisó la Inst. N° 147-2006, en el Juzgado de Lamud verificándose que el 8 de noviembre se abrió instrucción contra el Alcalde de Paclas por el delito de Peculado Doloso. También se efectuaron diversas entrevistas por separado al recurrente, al Presidente de la Junta Comunal, y otras personas para conocer directamente las versiones sobre lo sucedido. Además se realizó una audiencia con los pobladores de la localidad a fin de informar los motivos de la interevención de la DP y dar a conocer la información obtenida hasta el momento. Los días 15 y 16, en las ciudades de Lamud (Juzgado) y Chachapoyas (Sala Mixta), se procedió a estudiar los expedientes existentes contra el Alcalde con una comisión designada por los ciudadanos de Paclas.

Últimos acontecimientos. El 28 de febrero se constituyó una comisión, conformada por la PNP, el Fiscal adjunto anticorrupción de Amazonas, el Fiscal adjunto de Luya y el representante de la DP, para solicitar la entrega del local municipal, la deposición de la medida de fuerza y el retorno de la calma. En dicha reunión, la DP dio cuenta de las actuaciones realizadas, llegándose a los siguientes acuerdos: 1. Entrega de la municipalidad de forma pacífica el 9 de marzo. 2. Realización de audiencias de rendición de cuentas mensuales. 3. Cambio de integrantes del Consejo de Coordinación Local. 4. Las autoridades presentes impulsarán los procesos judiciales del Alcalde (por peculado y malversación de fondos) para determinar su responsabilidad. El 9 de marzo se entregó de manera pacífica el local municipal (en presencia de la DP) y se designó a nuevos representantes del Consejo de Coordinación Local. El 18 de marzo se llevó a cabo una audiencia de rendición de cuentas con participación de la DP.

ANCASH**71. Comunidad de Pocpa, distrito de Huasta, provincia de Bolognesi**

Actores. Cía. Minera Santa Luisa (Mitsui Mining) y pobladores de la comunidad de Pocpa.

Hechos. La Cía. Minera Santa Luisa ha logrado la concesión de explotación de la mina Palca. Sin embargo, la comunidad reclama el incumplimiento sistemático de acuerdos y el pago de servidumbre minera por el uso de territorio comunal para la construcción de una carretera (la carretera se construyó el año 1997). Este hecho los llevó a bloquear dicha carretera. En su labor de intermediación, la DP ha logrado establecer una mesa de diálogo en la zona, que está funcionando, con la cual se están logrando algunos avances.

En una reunión realizada el 5 de enero del 2007, la comunidad otorgó a la empresa la propuesta de compensación por servidumbre (S/. 900.00.00 nuevos soles) y le otorgó un plazo de siete días para emitir una respuesta. En caso contrario procederán al bloqueo de la vía que conduce al asentamiento minero Palca, vía que pasa por el territorio comunal. El 22 de enero del 2007, el presidente de la comunidad se acercó a la DP y comunicó la decisión de la población de tomar la carretera que conduce a la mina Palca en la zona del territorio comunal, tramo Salguayoc–Cuncush, como una medida de fuerza al no obtener respuesta positiva de la minera sobre el pago de la servidumbre. Esta medida empezaría el 23 de enero. El mismo 22, la DP se comunicó con el Director Regional de Energía y Minas, solicitándole que pusiera en conocimiento de la Dirección General de Minería (MINEM) este hecho para que pudiese acudir a la zona y explicar la razones por las que se otorgó la concesión de explotación a pesar de que la comunidad indica que nunca aceptó una compensación por la servidumbre. Así mismo, que informase respecto del cumplimiento del EIA de la compañía, indicándole que la DP podría facilitar el diálogo.

Últimos acontecimientos. El 23 de enero, la DP se comunicó con el adjunto del Fiscal provincial mixto de Bolognesi para informarle sobre el paro; además, se le solicitó que buscara información en el Ministerio de Transportes y el MEM sobre la situación de la vía (la cual, al parecer, se encontraría en territorio comunal). Esto generó que la compañía aumentara su propuesta y ofreciera un millón de soles para la ejecución de obras prioritarias para la comunidad. La propuesta fue discutida y aceptada por la comunidad, se firmó un acta y se levantó la medida de fuerza.

AREQUIPA

72. Distrito de Majes, Provincia de Caylloma

Actores. Adjudicatarios de parcelas de la Irrigación Majes, Alcalde distrital, Víctor Huarca Usca.

Otros. Regidores, Felipe Coaguila Zegarra, Manuel Véliz Pinto.

Hechos. En mayo del 2004, adjudicatarios de parcelas de la Irrigación Majes protestaron por la adjudicación de sus tierras a nuevos propietarios de lotes urbanos. Las partes, incluyendo AUTODEMA, entendían que la solución dependía de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Las protestas se incrementaron desde inicios de junio: una serie de plantones frente a la MuP impidió el normal cumplimiento de labores. El problema se agravó porque el Alcalde Distrital, Víctor Huarca Usca, desconoció los límites del CP La Colina. El Prefecto convocó a una reunión con autoridades el 11 de junio, que se frustró por inasistencia del Alcalde. La reunión se realizó el día 14 con asistencia de los Alcaldes en conflicto, y representantes del MiP, PNP, AUTODEMA, la DP, adjudicatarios afectados y agricultores colonos. Se acordó cesar los actos violentos, suspender los plantones y esperar la decisión judicial sobre la jurisdicción del CP La Colina. Los Alcaldes acordaron reunirse el 21 de junio para discutir soluciones. Por otro lado, el 16 de junio se reunieron la Comisión de Gobiernos Locales del Congreso, el Presidente Regional de Arequipa, el Alcalde de Majes y la Superintendencia de Bienes Nacionales para encontrar una salida a la transferencia de lotes urbanos. El 7 de julio, en la madrugada, un grupo de personas ingresó a los terrenos ocupados por colonos (los colonos ocupan este espacio luego de adjudicaciones dispuestas por el Alcalde, que son cuestionadas). El enfrentamiento no produjo daños personales. La PNP y el Fiscal Provincial Mixto de Castilla iniciaron las investigaciones correspondientes. La PNP incrementó su personal en el sector para prevenir nuevos enfrentamientos. El 12 y 16 de noviembre, la Superintendencia de Bienes Nacionales emitió las Resoluciones N° 087-2004/SBN-GO-JAD y N° 088-2004/SBN-GO-JAD con las que aprobó una transferencia patrimonial predial gratuita a favor de la MD de 364 predios de propiedad del Estado. El 1 de diciembre, el Alcalde Distrital, Víctor Huarca Usca, programó la subasta de lotes urbanos, pero los pobladores lo impidieron alegando que el proceso no contaba con aprobación del Concejo. Se formó un Comité de Lucha y Defensa del Patrimonio e intereses de Majes con el objetivo de evitar la venta de estas propiedades. El 6 de diciembre, algunos pobladores tomaron el local municipal en ausencia del Alcalde. El 13 de enero del 2005 se publicó la ley N° 28466, que revierte al Estado los terrenos urbanos que se adjudicaron a AUTODEMA en 1984, siempre que no hayan sido afectados. El Alcalde despachaba normalmente. Se instaló una comisión de la CGR para investigar supuestas irregularidades en la gestión edil. Había calma en Majes y el Frente de Defensa se encontraba vigilante de las investigaciones y a la espera de los resultados. El 21 de mayo, la CGR publicó la Resolución N° 243-2005 que autorizaba al Procurador a iniciar acciones legales a presuntos responsables por delito de colusión ilegal y contra la fe pública. El 26 de mayo, la CGR publicó la Resolución N° 262-2005, en la que se autorizaba al Procurador a iniciar acciones legales a presuntos responsables de delitos en agravio de la MD Majes. El 10 de junio, la CGR publicó la Resolución N° 281-2005 en la que se establecía que la MD incorporó ilegalmente como patrimonio de la comuna terrenos inscritos a nombre de AUTODEMA. Además, en vez de subastar dichos terrenos, se “reservaron” terrenos a favor de Asociaciones en las cuales son socios un regidor y dos hermanas del Alcalde. El Alcalde no se presentó a la MD. El 14 de junio, el Procurador Público de la CGR formuló denuncia contra los presuntos responsables de los hechos

delictuosos considerados en dichas Resoluciones. El 8 de julio, en sesión extraordinaria de Concejo, el Alcalde fue suspendido por 30 días. El día 11, en otra sesión, juramentó como Alcalde el tercer regidor Felipe Coaguila Zegarra. Ante ello, el regidor Vélez Pinto denunció al regidor Coaguila por el delito de usurpación de funciones. El local municipal fue ocupado por cien personas, que fueron desalojadas al día siguiente por la PNP. El día 4 de julio, el Segundo Juzgado Mixto de Caylloma, mediante Resolución N° 1, abrió instrucción contra Víctor Huarca Usca y otros por delitos de peculado en la modalidad de peculado doloso, abuso de autoridad en la modalidad de omisión de actos de funcionarios y acto arbitrario en agravio de la MD de Majes. El día 7, el Alcalde Víctor Huarca Usca fue arrestado y conducido al penal de Pucchun. El 11 de septiembre, el JNE publicó la Resolución N° 249-2005 en la que acreditaba temporalmente como Alcalde de la MD al primer regidor Manuel Esteban Véliz Pinto y le otorgó las credenciales de regidora a la ciudadana Giuliana Choctaya Ponce, a efectos de completar el número legal de miembros del Concejo.

Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes

JUNIN

73. Provincia de Satipo (límite con la provincia de Atalaya, región Ucayali)

Actores. Población de Satipo y Atalaya, MuP Atalaya (Ucayali) y Satipo (Junín)

Hechos. Desde hace más de 10 años, la población asháninka reclama la delimitación entre las provincias de Satipo y Atalaya. La imprecisión de linderos ha causado constantes fricciones entre pobladores de ambas provincias. A lo largo del tiempo se han suscrito varias actas de acuerdo mutuo con intervención de autoridades locales y regionales, entre las que se encuentran las MuP de Atalaya (Ucayali) y Satipo (Junín). El 28 de julio del 2004, grupos de indígenas bloquearon varias vías de comunicación de la provincia: unos 700 en la carretera y la vía fluvial que conecta Satipo con la CN Puerto Ocopa (tramo de la CN Gloriabamba y Puente Boca Satipo); otro grupo en Otica, a orillas del río Tambo, obstaculizando el tránsito de embarcaciones; otros 200 nativos en Poyeni, también a orillas del Tambo. La Central Asháninka del Río Tambo tomó esta decisión después de que el Alcalde de Atalaya intentó inaugurar una carretera que atraviesa la provincia, violando un acuerdo firmado entre ambas regiones de no realizar obras en la zona en conflicto. Los nativos reclamaron la devolución de mil hectáreas de linderos que –según afirman– fueron invadidas por pobladores de Atalaya. Otro motivo habría sido el asesinato de un poblador indígena de la CN Impanakiari el 19 de julio, en el puente Chismichorro, punto de referencia para la delimitación, perpetrado supuestamente por pobladores de Atalaya. El 6 de agosto se reunieron el Presidente de la Región Junín, el congresista Alcides Chamorro, y representantes de PCM, CND, Prefecto, Ministerios de Salud, Agricultura (INRENA, PETT), Educación y la DP. Acuerdos: la PCM elaborará el informe final de delimitación territorial y tendrá en cuenta el informe técnico de los GR Junín y Ucayali y el Convenio 169 de la OIT; el PETT titulará 27 CN y 1,000 expedientes individuales de colonos; la Dirección Regional de Agricultura ubicará más profesionales en la Sede Agraria de Río Tambo; la Dirección Regional de Salud elaborará el expediente técnico para ampliar el Puesto de Salud de Puerto Ocopa; Provías Nacional y el congresista Chamorro solicitarán a la CGR la auditoría de la carretera Puerto Ocopa-Atalaya, pues carece de expediente técnico y estudio de impacto ambiental. Las autoridades asháninkas decidieron suspender temporalmente el paro, otorgando un plazo prudente para el cumplimiento de los acuerdos. El 14 de septiembre, una delegación de asháninkas estuvo en Lima para exigir la solución definitiva del conflicto. En respuesta, una delegación de la Comisión de la Amazonía y Asuntos Indígenas y Afroperuanos del Congreso viajó a la zona del conflicto, comprometiéndose a participar en el diálogo para solucionar la controversia. El 20 de septiembre, autoridades de ambas provincias, con apoyo de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM y en presencia de funcionarios de la DP y Ministerios de Agricultura e Interior, acordaron poner fin al diferendo limítrofe aceptando el informe técnico emitido por dicha entidad. Sin embargo, el 22 de septiembre se realizó un paro regional convocado por el Frente de Lucha de los Intereses de Ucayali que fue acatado de manera parcial en Pucallpa y total en la provincia de Atalaya y en el Gran Pajonal. Las CN cuestionaron el informe de la PCM que divide sus territorios en el sector del CP Oventeni (río Unine). A fines de septiembre, los nativos asentados en la zona limítrofe y el Alcalde de Atalaya solicitaron una consulta popular para definir el tema. Por su parte, los jefes nativos del río Tambo acordaron en el congreso asháninka defender los límites de la provincia de Satipo. Durante enero, la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la PCM, a través de una mesa de diálogo, logró un acuerdo de límites con amplia participación de las partes. Este informe no se convirtió en proyecto de Ley porque se requiere que ambas provincias efectúen el saneamiento de sus territorios. Sin embargo, el informe técnico fue cuestionado por congresistas de Ucayali quienes solicitaron la realización de una consulta popular para definir la controversia (las autoridades de Junín están de desacuerdo con esta propuesta). La DP efectúa el seguimiento del proceso de demarcación definitiva a través de su Programa de Comunidades Nativas. En febrero, el GR Junín, mediante Ordenanza Regional N° 016-GRJ/CR, confirmó la definición de

límites territoriales aprobada por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM. Las autoridades y representantes de Ucayali no están de acuerdo con dicho informe, por lo que el Congreso deberá definir la controversia mediante una Ley. Sigue la espera de la resolución que debe realizar el Congreso de la República. Durante el mes de julio, la PCM resolvió el conflicto a favor de la provincia de Satipo. El informe y el expediente técnico han sido derivados al Congreso para que emita la ley respectiva; Hasta la fecha, ésta no ha sido emitida.

Últimos acontecimientos. Al mes de febrero del 2007, las organizaciones asháninkas ya no mencionan el tema. Los pobladores de la zona de conflicto están desarrollando sus actividades con normalidad.

74. Distrito de Ondores, provincia de Junín

Actores. CC Ondores, SAIS Túpac Amaru.

Hechos. La CC Ondores (unos 3,000 comuneros) y la SAIS Túpac Amaru (15,000 comuneros, aproximadamente, agrupados en 15 CC) sostienen un largo enfrentamiento por la posesión del predio Atocsayco (22,000 Has). En 1970, la Reforma Agraria formó la SAIS Túpac Amaru, integrando como socias a varias CC. En 1979, la CC Ondores decidió separarse y solicitó la devolución de sus tierras, incluyendo el fundo Atocsayco (el cual les había sido adjudicado en 1970 luego de un juicio iniciado en 1958 contra la Cerro de Pasco Copper Corporation). El 6 de septiembre de 1979, el Juzgado de Tierras les otorgó la posesión, pero la SAIS apeló y desalojó violentamente a los comuneros de Ondores. El 12 de septiembre de 1986, otra resolución judicial ordenó restituir el predio a la CC Ondores. El 29 de marzo de 1996 ello se formalizó con la inscripción de su título de propiedad (saneado por el PETT) en los Registros Públicos de Huancayo. Pero el 12 de enero de 1999, el Ministro de Agricultura, acogiendo una solicitud de la SAIS, declaró nula la resolución que aprobó el plano de Ondores. En el 2002, la Corte Suprema volvió a fallar a favor de la CC Ondores, pero no se ejecutó la sentencia por la oposición violenta de la SAIS. Actualmente se siguen tres juicios en Lima y uno en Junín. El 14 de octubre del 2004, el Gerente de la SAIS solicitó garantías personales y posesorias ante el Subprefecto de Junín, la que fue desestimada el 15 de diciembre luego de la constatación policial. El Subprefecto envió informes a la Prefectura el 18 y 23 de diciembre, sin obtener respuesta. El 21 de diciembre del 2004 se programó una audiencia de conciliación entre las partes, que no se realizó por la inasistencia de los representantes de Ondores; dicha diligencia se reprogramó para el 13 de enero del 2005. El 31 de diciembre del 2004, unos 300 comuneros de la CC Ondores ocuparon a la fuerza el Fundo Atocsayco, produciéndose daños materiales y la muerte de dos personas. El 3 de enero del 2005, el MiP y la PNP realizaron una inspección en el lugar. El asesor legal de la SAIS Túpac Amaru pidió la intervención de la DP y la celeridad del proceso judicial pendiente en el Juzgado Mixto de Junín; se comprometió también a evitar enfrentamientos. El 6 de enero, un equipo de la DP visitó la zona para iniciar una investigación. La Fiscalía denunció a miembros de la CC Ondores por robo agravado, usurpación agravada e interrupción de las comunicaciones. Sus dirigentes señalaron que permanecerán en la zona Hasta que se pronuncie el Poder Judicial. El 7 de enero se realizó una reunión con participación de representantes de la SAIS, CC Ondores, PNP, Prefecto y MiP. Al no llegar a un acuerdo sobre la devolución del predio, los representantes de la SAIS se retiraron sin suscribir un acta, señalando que tomarían medidas. El 20 de enero se realizó una inspección judicial en el proceso seguido contra comuneros de Ondores. Entre los días 31 de agosto y 2 de septiembre, la DP participó de una inspección judicial realizada por el PJ.

El 24 y 25 de noviembre del 2006, la DP realizó una visita a la zona y verificó: 1. la zona se encontraba en tensa calma debido al retiro del destacamento policial (realizado en agosto). 2. El presidente de la CC Ondores está solicitando el regreso de dicho destacamento debido a las amenazas de toma violenta del lugar por parte de los trabajadores de la SAIS. 3. Acerca de los estados de los procesos judiciales, se tiene que la demanda interpuesta por la SAIS contra la CC Ondores sobre interdicto de retener (expediente N° 2003-15) no tiene actividad procesal desde el mes de mayo por lo que se puede solicitar el archivamiento, por otro lado la denuncia interpuesta por la SAIS por el delito de usurpación de la propiedad (expediente N° 2005-001) ha vencido el plazo de instrucción por lo que el 1 de noviembre del 2006 el juez ha elevado su informe final a la Sala Mixta de Tarma, el cual se encuentra a la espera de resolución. La DP recomendó a las autoridades pertinentes orientar sus acciones a la prevención de hechos que pongan en riesgo la seguridad e integridad de las personas.

Últimos acontecimientos. El 8 y 9 de febrero del 2007, el PETT realizó la georeferenciación con el uso de GPS diferencial del lindero sur a la SAIS Tupac Amaru del territorio de la CC Ondores, conforme a las actas de determinación del punto de inicio de hitos colindantes dispuesto por el Juzgado Mixto de la Provincia de Junín. La DP acompañó el proceso.

LORETO

75. Distrito de Caballococha, provincia de Mariscal Ramón Castilla

Actores. Gregorio Quispe Sánchez del Frente Popular Agrícola del Perú, población de Caballococha y presidente del Frente de Defensa de Caballococha.

Hechos. El 20 de noviembre, la población realizó acciones de protesta ante los resultados que daban como ganador al candidato del Frente Popular Agrícola del Perú (FREPOP). Sostuvieron que existe parcialización por parte de los organismos electorales (JEE y ODPE). La DP se entrevistó con las autoridades locales y logró establecer un canal de diálogo entre la población y los representantes de los partidos políticos locales. Se les informó sobre los mecanismos a seguir respecto de las irregularidades de los organismos electorales y, además, acerca del procedimiento en el caso de impugnaciones de votos, actas y mesas electorales.

El 7 de enero del 2007, la población impidió el ingreso al local municipal al Alcalde electo por no contar con la credencial necesaria y no aparecer como Alcalde electo en la página web de la ONPE. Se produjo entonces un enfrentamiento con la PNP, que intentaba restablecer el orden. El resultado fue de siete personas heridas (tres policías y cuatro civiles). El Alcalde se tuvo que retirar a la comunidad de Alto Monte. De acuerdo a lo publicado en el diario La Nación, el Alcalde juramentó el 5 de enero. La población sigue descontenta, pero permanece en un estado de aparente calma. El Alcalde se encuentra despachando en una oficina instalada en la localidad de Chimbote (provincia de Ramón Castilla) y la oficina de Coordinación de Iquitos. Sólo se presta el servicio de recojo de basura con un camión de la municipalidad y el bombeo de agua.

Últimos acontecimientos. El 12 de marzo se llevó a cabo una reunión con la asistencia del Alcalde de la municipalidad provincial de Ramón Castilla, el presidente del Frente Patriótico de Loreto – base Ramón Castilla, el secretario de la organización del Frente Patriótico de Loreto – base Caballococha, el gobernador de distrito de la provincia de Maynas (quien conduce el diálogo), representantes de la DP, el presidente del Frente Patriótico de Loreto, la coordinadora del Comité de Derechos Humanos del Vicariato de San José del Amazonas, cuatro regidores, el ex prefecto y el representante de los comerciantes de Ramón Castilla. Se llegó a los siguientes acuerdos: 1. Intervención de la CGR en la gestión del ex Alcalde. 2. Presencia de pobladores de Caballococha en la nueva gestión (60% de puestos). 3. No discutir respecto de prohibir la migración de integrantes de la religión Israelita a la provincia. 4. Solicitar información sobre la situación judicial de dirigentes y pobladores denunciados. 5. Intervención de las instituciones públicas en la comunidad de Alto Monte Israel. El 19 de marzo, la DP realizó una visita de inspección y verificó el correcto funcionamiento de la municipalidad.

PASCO

76. Distrito de Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Alcides Carrión

Actores. Mateo Campos Baldeón del Partido Nacionalista (segunda elección), pobladores de Santa Ana de Tusi, PNP, Prefectura de Pasco, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.

Antecedentes. El 19 de noviembre del 2006, los pobladores tomaron el local de votación, destruyeron actas electorales y denunciaron la existencia de electores golondrinos

Hechos. El 23 de diciembre del 2006, los pobladores presentaron un memorial al prefecto de Pasco, el cual fue presentado también a la DP el día 27. En este documento, los pobladores sostienen que las elecciones no se llevaron con transparencia. Afirman que, además de los votos golondrinos, existen sospechas acerca de la transparencia en la actuación del JNE. De acuerdo a sus afirmaciones, a las 72 horas de realizado el escrutinio, el JEE Pasco había declarado que contaba sólo con tres actas electorales. Sin embargo, luego de ocho días se contaba con once actas electorales. Por otro lado, afirman que el presidente del JEE viajó en un auto alquilado a Lima para entregar las actas impugnadas, hecho al que consideran sospechoso. Ellos solicitaban la nulidad de las elecciones, pero el JNE validó las actas mediante una resolución. Así responsabilizan al JNE de los actos que sucedieron en el distrito a partir del 29 de diciembre.

El 1 de enero del 2007, el Alcalde saliente y el Alcalde entrante acordaron reunirse para ejecutar el proceso de transferencia de cargo. Debido a que los pobladores habían cerrado el local municipal, esta reunión no se produjo. El 9 de enero se llevó a cabo una reunión en el distrito, con la participación del Alcalde electo, pobladores, el prefecto, PNP y la Fiscalía provincial. No se llegó a ningún acuerdo en esta reunión; los pobladores no querían ceder en su posición. El día 16 se llevó a cabo una mesa de diálogo en las instalaciones de la comandancia de la PNP, a la que asistieron los pobladores, el prefecto, el Fiscal Decano, el coronel de la PNP, el representante de la DP, un representante del Alcalde y el presidente del gobierno regional. En esta reunión, el representante de la DP manifestó su posición respecto de respetar la legalidad bajo un correcto sistema democrático y sugirió a los pobladores deponer la medida de fuerza y solicitar luego la revocatoria de autoridades. Se propuso una segunda reunión para el 21 de enero. El 19 de enero, la

DP envió una carta a los pobladores, en la cual se explicaron los procedimientos legales que se podían utilizar para vacar o revocar del cargo al nuevo Alcalde. El 24 de enero se llevó a cabo otra reunión, a la que asistieron el Alcalde electo, la PNP, la DP, la Fiscal provincial penal, el Alcalde saliente, representantes y pobladores. Como la municipalidad seguía tomada, la Fiscalía ordenó recuperar las instalaciones mediante el uso de la fuerza. No lo lograron y se retomó el diálogo con los pobladores, quienes solicitaron la renuncia de los asesores del Alcalde y que los familiares del Alcalde no ocupasen puesto alguno en la municipalidad. El Alcalde aceptó los pedidos de la población y se comprometió a conversar con el pueblo en una asamblea general el 28 de enero. Esta reunión no se produjo por inasistencia de los pobladores, así que el Alcalde convocó a una nueva reunión el 4 de febrero.

Al mes de febrero, la municipalidad ya no está tomada. El Alcalde empezó a ejercer su cargo. Sin embargo, la población ha manifestado a través de los medios de comunicación que no aceptarán que el Alcalde gobierne desde Santa Ana de Tusi y solicitan que lo haga desde otro distrito. Amenazaron con tomar medidas de fuerza como la toma de carreteras o, nuevamente, del local municipal.

Últimos acontecimientos. Durante el mes de marzo el Alcalde continuó ejerciendo su cargo en las instalaciones del municipio distrital con normalidad.

77. Distrito de Pallanchacra, provincia de Daniel Alcides Carrión

Actores. Compañía minera Volcan – Unidad Vinchos, pobladores del CP LA Merced de Jarria.

Hechos. El 30 de enero del 2007, dirigentes de la Comunidad Campesina La Merced de Jarria solicitaron a los representantes de la Mina Vinchos, su presencia en la comunidad a efectos de conversar sobre los convenios suscritos, solicitud que fue desatendida por la compañía. El 6 de febrero, los pobladores de Jarria volvieron a remitir un escrito a la Compañía Minera Volcán S.A. solicitando la presencia del Superintendente en la comunidad, dándole un plazo de 48 horas; si no obtienen respuesta, iniciarían un paro de 48 horas, solicitud que también fue desatendida por la minera. El día 8, pobladores de la comunidad Campesina La Merced de Jarria tomaron las instalaciones del local de la Minera Vinchos, perteneciente a la Compañía Minera Volcán S.A., reclamando puestos de trabajo, así como la firma de un nuevo convenio de explotación. En la misma fecha, en horas de la noche, hizo su arribo a la Comunidad Campesina de Vinchos el Fiscal Penal de turno. Sin embargo, no logró contactarse con los pobladores toda vez que se habían bloqueado las vías de acceso a la Mina. El día 9, ante la solicitud del Jefe de Relaciones comunitarias de Volcán, el representante de la DP se acercó al paraje denominado Pumachuanca, situada a tres kilómetros aproximadamente de la Comunidad Campesina de Vinchos, y llegó a la una de la tarde, comprobando que un grupo de pobladores (piquete) custodiaban el bloqueo de la única vía de acceso a la Comunidad Campesina de Vinchos, la cual se encuentra a dos kilómetros de la C.C. La Merced de Jarria. Luego del arribo del representante de la DP hizo su aparición personal de la Mina, conjuntamente con el Coronel de la Policía Nacional y un contingente de aproximadamente 15 efectivos. Los pobladores refirieron que cualquier proceso de negociación se realizaría al día siguiente (sábado), toda vez que ellos habían convocado un paro de 48 horas con las respectivas medidas de lucha como bloqueo de carreteras y toma de local. La DP exhortó a la población a que dejaran de lado el bloqueo de carreteras toda vez que, aparte de constituir un delito, se estaba impidiendo el paso a los pobladores de la comunidad de Vinchos. Si bien la empresa aceptó negociar al día siguiente, el Coronel de la Policía manifestó su deseo de desbloquear la vía y pasar hacia Jarria, en momentos en que la población se mostró exaltada, mostrando su decisión de enfrentarse a los efectivos. En estas circunstancias se les volvió a decir que lo que estaban haciendo constituía delito y que las fuerzas policiales tienen facultades para restablecer el orden. Los pobladores aceptaron desbloquear la carretera, con la condición de que la policía se quedase en la comunidad de Vinchos y no pasaran a la Comunidad de la Merced de Jarria. Ante ello se procedió al desbloqueo de la carretera con la ayuda de un tractor de la misma empresa. El 10 y el 11 de febrero, los pobladores y la empresa no pudieron llegar a ningún acuerdo. El lunes 12, siendo aproximadamente las tres de la tarde y no queriendo los pobladores abandonar las instalaciones de la empresa a efectos de empezar el diálogo, el Fiscal Provincial de Turno ordenó el restablecimiento del orden público. Para ello contó con la presencia de 90 efectivos policiales procedentes tanto de la Sub Región Pasco con el apoyo de efectivos de la Región Policial de Junín que, con equipo y material antidisturbios, procedieron a ingresar a las instalaciones de la mina, enfrentándose con aproximadamente unos 300 pobladores de la Comunidad Campesina la Merced de Jarria. El 13 de febrero se reunieron en el local del Gobierno Regional de Pasco representantes de la Comunidad Campesina La Merced de Jarria (Constantino Gonzáles Valerio, Alfonso Cruz Quinto y otras personas). Asimismo estuvo el Jefe de Relaciones comunitarias de la Compañía Minera Volcán, Luís Pariona Arana, siendo facilitada la reunión por la Dirección General de Gestión Social mediante la participación de Sonia Lou Alarcón. Asimismo asistió John Romero Lloclla, representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, y Edmundo Jaimes, en representación de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Pasco. Se contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la gobernación de Pasco y periodistas. Se discutieron nueve demandas presentadas por la comunidad, lográndose los

siguientes acuerdos: 1. Con relación a las demandas laborales. La empresa se comprometió a realizar una revisión de las 90 personas contratadas que pertenecen a Jarria, ya que existe una relación de 24 personas que dicen provenir de dicha comunidad, pero al parecer estas 24 personas no pertenecen a dicha comunidad; de ser ello así, se procederá inmediatamente a contratar a más pobladores de Jarria, en el término de 48 horas. Asimismo, la empresa se comprometió a implementar un centro de capacitación laboral minera que incluirá a comuneros de Jarria. Este centro de capacitación se deberá implementar a más tardar en agosto del 2007. Asimismo, la empresa apoyará la instalación de un vivero forestal. 2. Con relación a la compensación de seis millones de dólares, por posible contaminación ambiental, se acordó que el tema no sería tratado ya que es necesario sustentar los daños denunciados a través de los informes técnicos de las autoridades correspondientes. 3. Con relación a las facilidades que debe otorgar la empresa para que las autoridades comunales que trabajan no desatiendan sus labores; la empresa se comprometió a respetar el sistema de trabajo 14 por siete. Esta facilidad será extensiva al resto de los trabajadores de la comunidad. Se aclara que el sistema 14 por siete es por las 12 horas trabajadas, la que será implementada en el más breve plazo. 4. La empresa se comprometió a dar prioridad a la empresa Comunal de Jarria para las obras civiles, entre ellas la construcción del palacio municipal, en tanto la Empresa comunal se presente. 5. Adicionalmente se pusieron de acuerdo en que la Empresa Explotadora Vinchos tomará el servicio de transporte a la Empresa comunal en tanto la movilidad de la empresa comunal reúna las condiciones técnicas necesarias. 6. Finalmente, la comunidad campesina ofreció ceder un área de terreno para la instalación de una cancha de relaves, tema que será tratado directamente con la empresa.

Últimos acontecimientos. En la actualidad se encuentran en proceso de implementación los acuerdos firmados en el acta. La DP se encuentra haciendo su seguimiento.

PIURA

78. Distrito de Huancabamba, provincia de Huancabamba

Actores. Pobladores de Huancabamba, Asociación de Ganaderos, Alcalde, Valentín Quevedo Pinilla por el Movimiento Poder Industrial Campesino (17.74% de los votos) obtuvo siete regidores, uno del Movimiento Desarrollemos el campo y la ciudad, del APRA, de Somos Perú y Perú Posible.

Hechos. En febrero del 2005, la población señaló irregularidades en la Licitación Pública N° 002-2004/CEA/MPH, destinada a la adquisición de productos para el Vaso de Leche; por ello, solicitaron al Concejo que anulara el proceso antes de la suscripción del contrato correspondiente. Ante la negativa del Alcalde, la Asociación de Ganaderos convocó a un paro el 21 de febrero, en el cual tomaron carreteras y puentes, exigiendo además, entre otros aspectos: vacancia del Alcalde, destitución de funcionarios municipales, autonomía de la UGEL Huancabamba, asfaltado de la carretera Canchaque-Huancabamba. El 20 de febrero, un día antes del paro, la DP llegó a la zona y, al día siguiente, solicitó al Alcalde una copia del Procedimiento de Licitación Pública y participó en la reunión con los organizadores del paro. En la reunión, el representante de la DP explicó el procedimiento de selección del producto, adquisición y distribución del producto, y enfatizó que la toma de carreteras afecta el derecho a la libertad de circulación, por lo que constituye un delito. Al concluir el diálogo, se suscribió un acta con los siguientes acuerdos (entre otros): de existir causal de vacancia, sería informada al Concejo y al JNE; la DP elaboraría un informe sobre el proceso de licitación; se retiró la confianza a los funcionarios implicados; se dispuso la ejecución de proyectos 2003-2004 en el presente año presupuestal. La población aceptó levantar el paro. Acerca de los requerimientos en los sectores de salud, educación y transporte, el 30 de marzo del 2006, la representante de la OD Piura se reunió en Huancabamba con personal de la Dirección Regional de Educación para tratar la problemática de la educación. Además, la DP realizó el informe sobre la situación del programa Vaso de Leche en Huancabamba, precisando las responsabilidades existentes, información que ha sido puesta en conocimiento del Alcalde de Huancabamba, quien se encuentra pendiente de enviar un informe con la implementación de las recomendaciones formuladas.

Al mes de enero del 2007, de acuerdo a lo informado por el gerente administrativo de la municipalidad, se ha cumplido con resolver los contratos y retirar la confianza a los funcionarios responsables del mal proceso de adquisición del producto Vaso de Leche y otros errores administrativos (administrados, asesor legal y director municipal).

Últimos acontecimientos. Al mes de febrero del 2007, los compromisos de la municipalidad de Huancabamba se están cumpliendo. Ya se han resuelto los contratos de los funcionarios responsables del mal proceso de adquisición.

PUNO

79. Distrito de Unicachi, provincia de Yunguyo

Actores. Pobladores de Yunguyo, Alcalde, José Coarita Yapachura del Movimiento Unión Regional para el Desarrollo (37.42 % de los votos) obtuvo cuatro regidores y uno el APRA.

Hechos. El 2 de diciembre de 2004 se produjo un incidente en el local de la MD respecto del cual las partes tienen versiones distintas. Según los pobladores, ese día, el Alcalde los invitó a una reunión. Lo estuvieron esperando durante una hora. Poco después escucharon que en el exterior tocaban pitos y empezaron a ingresar al local personas desconocidas, así que decidieron cerrar el local por seguridad. Poco después hizo su aparición el Fiscal de Yunguyo en compañía de la PNP manifestando que se había producido el secuestro del Alcalde. Para los pobladores, se trataba de una trampa urdida por el Alcalde para presentarse como víctima, pues hace tiempo que le exigen transparencia en la gestión. De las 19 personas detenidas ese día, 13 fueron denunciadas por el MiP por atentar contra la libertad personal del Alcalde. El 7 de noviembre de 2005 se realizó una movilización en Yunguyo en protesta por esta decisión. El 23 de noviembre, las personas detenidas fueron puestas en libertad, aunque siguen con orden de comparecencia. En el Juzgado Mixto de Yunguyo continúa el proceso penal contra 19 pobladores por delito de secuestro en agravio del Alcalde, aunque se declaró improcedente la diligencia de reconstrucción de los hechos. Los pobladores han apelado. Hasta el 25 de enero del 2006, el proceso penal pendiente fue remitido a la Sala Penal de Puno; luego fue devuelto al Juzgado Mixto de Yunguyo.

Últimos acontecimientos. Se tiene información sobre el archivamiento definitivo del proceso penal seguido contra los pobladores de Unicachi procesados por secuestro en agravio del ex Alcalde.